

GOLPE BLANDO

El proceso de desestabilización al gobierno de Fernando Lugo

**Aréchaga, Juan Ignacio
Rodríguez, Luciana**

ÍNDICE

Introducción	4
Capítulo I	
El shock	14
La Masacre de Curuguaty	16
Los días previos	19
Los cuerpos y las pruebas	21
La versión de la Fiscalía, la versión mediática	23
Capítulo II	
El golpe	26
La previa del juicio	28
El juicio	30
Capítulo III	
Poncho Jurúicha	33
Ikueráima Paraguay: la catapulta política	34
El país, la nueva catedral	37
El padre	39
Capítulo IV	
Injerencia externa	42
Ministro de Defensa en la mira	44
El Plan Colombia se extiende al Paraguay	46
El verdadero objetivo; el primer juicio político	50
Una historia digna de Soriano	52
Capítulo V	
Montando el escenario	54
El Ejército del Pueblo Paraguayo	57
La vida en Tacumbú	60
Rubén Villalba, el enemigo común	62

Capítulo VI

La Antesala 66

Nace la Liga Nacional de Carperos 68

El rey de la soja 70

Los sucesos de Ñacunday 71

Capítulo VII

Invasores 78

Los dueños de la tierra, del aire y sus medios 80

La espiral 83

La objetividad conservadora 87

La Tv Pública y la resistencia 89

Capítulo VIII

Neoliberalismo tardío 92

Del Atlántico al Pacífico 95

Río Tinto Alcan 97

La era Cartes 99

Alianza Público-Privada 101

Militarizando el terreno 103

Introducción

Muchos años pasaron para que se adjetivara a la última oleada de dictaduras militares latinoamericanas como golpes cívico – militares – mediáticos – financieros. A medida que los procesos de reconstrucción de la verdad y enjuiciamiento a los actores de tan atroces programas fue reconociendo, justamente, los actores implicados, los golpes de Estado dejaron de llamarse únicamente golpes militares —por ser su cara más visible, en una primera instancia— para incluir a los actores que estos procesos de verdad y justicia fueron liando. Hoy en día, su enunciación denota el protagonismo que determinados sectores de la sociedad han tenido en los genocidios perpetrados durante los años 70`y 80`. No sólo en su carácter de partícipes necesarios sino, incluso y en reiterados casos, como co-autores de los hechos.

A inicios del siglo XXI, los gobiernos surgidos frente al rechazo de las políticas neoliberales impuestas en las últimas dictaduras y profundizadas en las décadas siguientes, se han vistos cercados por las intentonas golpistas de las clases dominantes, en busca del reestablecimiento de la conducción en términos políticos de los destinos de estas sociedades. Una nueva modalidad de golpes de Estado denominada golpes blandos o suaves: “es el nuevo nombre que se utiliza en Estados Unidos para mencionar las acciones desestabilizadoras utilizadas por el poder económico, con apoyo extranjero, y de los viejos elementos de las dictaduras militares y policiales. Ya no resulta imprescindible sacar a las Fuerzas Armadas a la calle: se van minando lentamente las bases de un gobierno popular cuando se han logrado controlar la mayoría de los medios de comunicación”¹.

Este nuevo acto enunciativo oculta deliberadamente a los actores que buscan apoderarse de los resortes del gobierno de estos Estados desplazando a los nuevos líderes populares, y aplica sobre el objeto un juicio de valor acorde a la época. El aparente oxímoron, golpe blando, lleva a pensar falazmente en una estrategia de golpe caracterizada por la ausencia de violencia, en contraposición a los golpes militares clásicos y sus reminiscencias icónicas en las que aparecen ciudades sitiadas por tanques militares, sindicatos intervenidos y medios de comunicación censurados. Una estrategia propicia para legitimar por medio del reconocimiento internacional a los gobiernos surgidos de dichos golpes, como en el caso de Honduras (2009) o de Paraguay (2012).

La disyuntiva en el acto enunciativo de estos golpes de Estado se comprende a partir de la complejidad que los caracteriza; el modo refinado del avance de sus técnicas dificulta la aproximación a los hechos. Ya en 1931, el escritor italiano Curzio Malaparte advierte en su obra “Técnica del Golpe de Estado” la importancia de conservar la apariencia de legalidad en el modo de realización de un golpe de Estado moderno, iniciado por Napoleón Bonaparte². “El ejemplo de Bonaparte, que se sirve del ejército como de un instrumento legal para resolver, en el terreno del procedimiento parlamentario, el problema de la conquista del Estado, ejerce todavía una gran sugestión sobre todos los que pretenden (...) conciliar el empleo de la violencia y el respeto a la legalidad, y quieren realizar por la fuerza de las armas una

¹ Stella Calloni, *Los Golpes Blandos*, nota publicada el 10 de agosto de 2008 en el blog La máquina de escribir, disponible en <http://lamaqdeescribir.blogspot.com.ar/2008/08/stella-calloni-los-golpes-blandos.html>.

² Curzio Malaparte, *Técnica del Golpe de Estado*. Ed. Tolemia, Argentina, 2008.

revolución parlamentaria. La táctica del 18 brumario no es la de una sedición militar. Lo que la caracteriza es la preocupación de permanecer en la legalidad, y esta preocupación constituye el elemento nuevo aportado por Bonaparte a la técnica del golpe de Estado”³. Malaparte da cuenta así de dos cuestiones fundamentales: la apariencia de la legalidad y el terreno parlamentario como ocultador de la violencia. De allí se desprende, a la vez, que quienes buscan adueñarse del ejercicio del poder de los Estados lo hacen proclamándose no enemigos sino servidores del mismo. El juicio político perpetrado contra el presidente Fernando Lugo es, en este sentido, el zenit del desarrollo de esta táctica. Desde diciembre de 2009, los senadores Juan Carlos Galaverna y Alfredo Jaeggli impulsaron el tramposo concepto de que “el juicio político es político y por lo tanto no necesita argumentos, sino votos”⁴. La investigadora Rossana Gómez lo explica de esta manera: “Los legisladores y partidos políticos que apoyaron el juicio político utilizaron la lógica de que si el mecanismo existe en la norma (más aún si está previsto en una Constitución escrita en los tiempos post Stroessner y, por lo tanto, democrática) es en consecuencia legítimo. Esta noción de legalidad exige la discusión en cuanto a los argumentos (...), no tanto porque la autoridad así lo diga y lo determine (la autocracia), sino porque esta vez las evidencias eran de público conocimiento y no necesitaban comprobación alguna”⁵.

Sin embargo, ávidos de sostenerse en la legitimidad del mecanismo, los golpistas pasaron por alto el hecho de que el acto de ruptura democrática es de carácter político-jurídico. Como estado firmante del protocolo Ushuaia I, Paraguay se comprometió a que, en caso de ruptura del orden democrático, sea el derecho internacional el único régimen jurídico aplicable. No es el derecho interno ni los argumentos esgrimidos por quienes irrumpieron con el orden democrático. Es decir, que la operación de calificación correspondía a los órganos respectivos internacionales; en el caso, el órgano inmediatamente habilitado en el seno del Mercosur es el compuesto por los jefes de Estado —órgano netamente político. Siendo, además, que el artículo 3 del protocolo habla en términos generales de “...toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados Partes del presente Protocolo...”; por lo que, al no tipificar los actos, el campo de aplicación de la cláusula democrática no se encuentra delimitado sólo a ciertos tipos de hechos⁶. Dicha generalidad se debe a que “la ruptura de la institucionalidad democrática en la subregión, puede ser el resultado de la utilización de medios novedosos y con nuevos actores”⁷, explica el abogado Díaz Balbuena, y hace hincapié en el caso del golpe de Estado contra el gobierno democrático de Venezuela en abril de 2002 en el que hubo “una participación y autoría colectivas (...) en mano de empresarios, con el protagonismo de primer nivel de los propietarios privados de medios de comunicación”⁸.

Aunque inacabada, la caracterización del proceso de destitución del presidente paraguayo como un caso de golpe blando permite, por un lado, posicionarse en la

³ *Ibíd.*, pág. 91.

⁴ Fátima Elizabeth Rodríguez González, *Paraguay 2012: Crónica de un juicio político anunciado*. En www.apeparaguay.org, octubre de 2012.

⁵ Rossana Gómez, *La construcción de la democracia como relato nacional*, en *Franquismo en Paraguay: el golpe*. Edición literaria a cargo de Rocco Carbone y Lorena Soler. Buenos Aires, El8vo. Loco, 2012. Pág. 59.

⁶ Este argumento se encuentra extensamente desarrollado en: Hugo Ruiz Díaz Balbuena, *Golpe de Estado en el Paraguay. Un proyecto político antidemocrático y contra la integración*. Ed. Arandura, Paraguay, 2013. Pág. 104.

⁷ *Ibíd.*, Pág. 104.

⁸ *Ibíd.*, Pág. 103.

disputa discursiva en la que los agentes del golpe se declararon “constitucionales”, “legítimos” y hasta “democráticos”. Por el otro, dar cuenta de que la modalidad del juicio político se enmarcó en una estrategia, o sea que permite visualizar las acciones que en una prolongación de tiempo desencadenaron en el desplazamiento del poder del líder del Frente Guasu.

La escasa literatura acerca de los golpes blandos, desarrollada en Sudamérica principalmente por la revolución bolivariana en Venezuela, pone en el centro de la escena al filósofo estadounidense de la Albert Einstein Institution, Gene Sharp, como autor principal de la matriz teórica que los sustentan. Asimismo, el escritor argelino Ahmed Bensaada afirma que las revoluciones de los colores, como se dieron en llamar a las revueltas acontecidas en antiguas repúblicas soviéticas a comienzos del siglo XXI —Serbia (2000), Georgia (2003), Ucrania (2004) y Kirguistán (2005)—, “estuvieron lideradas por movimientos que agrupaban a jóvenes activistas locales, pro occidentales, formados, que luchaban por la democratización de sus países. Todos esos movimientos que consiguieron derrocar los regímenes autocráticos establecidos utilizaron los métodos de acción no violentos teorizados por el filósofo estadounidense Gene Sharp y aplicados por Robert Helvey”⁹.

En su ensayo “De la dictadura a la democracia”¹⁰, Sharp parte de la premisa de que el sustento de un régimen político reside en la cooperación y obediencia de los gobernados para acceder a lo que denomina las fuentes del poder: *la autoridad*, que indica la creencia entre la gente de que el régimen es legítimo y que tiene el deber moral de obedecerlo; *los recursos humanos*, la cantidad e importancia de las personas y grupos que obedecen a los gobernantes, cooperan con ellos o los apoyan; *el conocimiento y las destrezas*, los que el régimen necesita para llevar a cabo acciones específicas, y que le son suministrados por las personas y grupos que cooperan con él; *los factores intangibles*, los factores psicológicos e ideológicos que pueden mover a la gente a obedecer y apoyar a los gobernantes; *los recursos materiales*, hasta qué punto controlan los gobernantes la propiedad o tienen acceso a ella, los recursos naturales, el sistema económico y los medios de comunicación y transporte; y *las sanciones*, castigos con los que se amenaza, o que se aplican a los desobedientes o a los que no colaboran, para asegurar su sumisión y cooperación, necesarias ambas para que exista el régimen y para que ponga en práctica sus políticas¹¹. En consecuencia, concibe que menoscabando el acceso a dichas fuentes de poder, los gobernados pueden deponer al régimen de gobierno. En consonancia con las teorías de desestabilización de los años 70` que explican que, una vez encontrada la masilla que sostiene a una sociedad, se aplica ese conocimiento para desmoronar a dicha¹².

⁹ Ahmed Bensaada, *La Primavera Birmana*, disponible en www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1407 , 28 de abril de 2012.

¹⁰ Gene Sharp, *De la Dictadura a la Democracia. Un sistema conceptual para la liberación*; traducción al español por Claridad Inda; La Institución Albert Einstein; diciembre de 2003.

¹¹ *Ibíd.*

¹² Apud: Günter Neuberger y Michael Opperskalski en *Operación Cóndor; pacto criminal*, de Stela Calloni. Ed. La Habana: Ciencias Sociales, 2006.

Mas, ubica a las bases grupales e instituciones (no gubernamentales) como los actores sociales capaces de llevar adelante dicha acción, ya que los comprende como los instrumentos mediante los cuales los individuos ejercen su influencia en una sociedad. Sharp retoma el concepto de desobediencia civil de Henry David Thoreau, quien concebía que las libertades individuales de cada hombre se encontraban avasalladas por el gobierno —concretamente critica al gobierno de EE.UU. de mitad del siglo XIX¹³—, que se había extralimitado en sus funciones, ya que utilizaba a los hombres como instrumentos para llevar adelante la voluntad propia de quienes se habían conferido del recurso del gobierno, no porque poseyeran “la verdad ni porque la minoría lo considere más justo, sino porque físicamente son los más fuertes”¹⁴. Para Thoreau, un gobierno es “un mero recurso por el cual los hombres intentan vivir en paz”¹⁵, o sea, para que puedan coexistir las libertades de todos los individuos. “Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución (...), es decir, el derecho a negar su lealtad y a oponerse al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesurados e insoportables”¹⁶, escribe Thoreu en relación al gobierno invasor de Estados Unidos. Para éste, entonces, la conciencia de los hombres debe conllevar el acto de justicia por encima de la ley; así, la disidencia política es expresada en un acto de desobediencia civil.

Siendo así, Sharp propone el concepto de desafío político masivo, introducido por el ex coronel del ejército de Estados Unidos y colaborador suyo, Robert Helvey:

“(...) indica una confrontación noviolenta (protesta, no colaboración e intervención) que se lleva a cabo de manera desafiante y activa, con fines políticos. La palabra desafío denota una deliberada provocación a la autoridad mediante la desobediencia, y no deja lugar para la sumisión. El término desafío político describe el entorno en el cual se emplea la acción (político), así como el objetivo (el poder político). Se usa principalmente para describir la acción realizada por la población para retomar de manos de la dictadura el control de las instituciones gubernamentales mediante el constante ataque a las fuentes de poder y el uso deliberado de la planificación estratégica y de las operaciones para alcanzarlo. En este sentido, desafío político, resistencia noviolenta y lucha noviolenta se usarán aquí como sinónimos intercambiables, aunque los dos últimos términos, por lo general, se refieren a las luchas que persiguen una gama más amplia de objetivos (sociales, económicos, psicológicos, etc.)”¹⁷.

El pensador estadounidense distingue la dinámica del desafío político de la dinámica de la violencia como medios distintos de lucha por el poder político, entendiendo éste como el ejercicio del control de las instituciones políticas. La primera, indica, es una lucha que emplea armas políticas, económicas, sociales y psicológicas, aplicadas por la población y las instituciones de la sociedad. “A estas armas se les ha conocido bajo diversos nombres, como protestas, huelgas, desobediencia o no cooperación, sumisión y desobediencia de la población y de las

¹³ “Desobediencia civil”, es un discurso que el escritor y filósofo estadounidense Henry David Thoreau prolifera entre enero y febrero de 1848, en el marco de la intervención estadounidense en territorios mejicanos. Disponible en http://www.oshogulaab.com/MISCELANEA/DESOBEDIENCIA_CIVIL.htm.

¹⁴ *Ibíd.*

¹⁵ *Ibíd.*

¹⁶ *Ibíd.*

¹⁷ *Op. cit.*

instituciones de la sociedad, reciban el constante refuerzo de las fuentes de poder que necesitan. El desafío político, a diferencia de la violencia, es el instrumento idóneo para negarle acceso al régimen a esas fuentes de poder”¹⁸.

En síntesis, su tesis promulga que socavando las fuentes de poder de un gobierno, éste se derrumba. Y para ello, propone el desafío político masivo como la mejor herramienta en la estrategia de la acción no violenta. Recomienda la planificación de una gran estrategia que “coordine y dirija el uso de todos los recursos apropiados y disponibles (económicos, humanos, morales, políticos, organizacionales, etc.) de un grupo que busca alcanzar sus objetivos en un conflicto”¹⁹. La cual debe incluir a las estrategias particulares para enfocar las campañas principales, que contienen a su vez a los movimientos tácticos y los métodos de acción especialmente escogidos para dichos fines. Por último, hace un detallado de ciento noventa y ocho métodos plausibles de llevar a cabo.

Para realizar dicha estrategia, Sharp advierte que deben considerarse determinados puntos: los métodos específicos o armas políticas que mejor se puedan emplear para implementar la estrategia escogida; estipular si los asuntos económicos deben relacionarse con la lucha total (“si los asuntos económicos han de ser prominentes en la lucha, hay que cuidar que los malestares económicos de veras podrán remediarse luego de liquidada la dictadura”²⁰); establecer “qué medios de tomar decisiones y de comunicación serán posibles durante el curso de la lucha para orientar continuamente a los de la resistencia y a la población en general”; y determinar qué clase de ayuda del exterior es deseable para apoyar una campaña específica o la lucha por la liberación en general.

A decir de Ahmed Bensaada sobre las revueltas mencionadas, “la debilidad del modus operandi de la visión de Sharp de la revolución no violenta viene del hecho de que los jóvenes disidentes o ciberactivistas formados en ese enfoque sólo sirven para desestabilizar el régimen y expulsar a los dirigentes establecidos. Una vez que cumplen su misión su papel se termina, porque no tienen base política ni otro programa salvo descabezar al gobierno. A menos, claro, que eso forme parte de la estrategia de los organismos que mueven los hilos entre bastidores”²¹.

Según la periodista Rosa Tristán, los fundamentos de la teoría de Sharp son una fusión entre el espíritu individualista de Thoreau con el símbolo de la movilización de grandes masas humanas sin el uso de las armas de Gandhi. “Sintetiza la herramienta política que le conviene al sistema: usa el símbolo redentor de Gandhi con la filosofía individualista de Thoreau”²². Describe tres etapas del método de “la revolución de los colores”: en un principio, se exhorta al individualismo egoísta a identificar una causa

¹⁸ Op. cit.

¹⁹ Op. cit. Pág. 45

²⁰ Ibid. Pág. 56.

²¹ Op. Cit.

²² Rosa Tristán, *Golpe No Tan Suave*, Educere, enero-abril de 2011, Venezuela.

de desagrado personal para desconocer al Estado, como huecos en la calle, la basura o la corrupción, sin nunca mostrar los motivos sociales (etapa de ablandamiento); luego, identificado el motivo de descontento, “queda justificado el desacato a la autoridad y se le moviliza para la desobediencia”²³ (etapa de deslegitimación y calentamiento en la calle); por último, se ofrece un nuevo motivo superior capaz de unificar los intereses dispersos, por ejemplo, dice, la libertad: “la libertad es el valor máspreciado y debemos defenderla. Viene la pregunta necesaria; ¿quién sofoca su libertad? Y la respuesta obligada es: el dictador. Les dirán que su protesta no es violenta, así que no habrá nada que perder. El cuadro estará completo y el trabajito hecho. El líder a derrocar habrá resumido en su persona miles de frustraciones. No habrá constituciones que lo respalden, ni elecciones democráticas que lo avalen”²⁴.

Desde el punto de vista teórico, sin embargo, este método mediante el cual las personas se identifican a través de un motivo superior (la libertad, por caso), se condice con la lógica de la hegemonía en la forma de hacer política. Ese motivo superior capaz de unificar intereses dispersos, es lo que el teórico político argentino Ernesto Laclau nombró *significante vacío*: un signo al que no se le correspondería ningún significado, sino que asume la representación de una totalidad de demandas²⁵. Este proceso de articulación en que demandas aisladas se inscriben en una demanda que totaliza las anteriores, a partir de lo que éste pensador denomina una relación *equivalencial*, tiene como resultado “el surgimiento de un abismo cada vez mayor que separe al sistema institucional de la población”²⁶. De este modo se produce la formación de una frontera interna, “una dicotomización del espectro político local a través del surgimiento de una cadena *equivalencial* de demandas insatisfechas”²⁷. Si bien esta conceptualización el autor la desarrolla en torno a una de las precondiciones en la formación de un populismo, es dable en tanto que explica el modo en que se construye una frontera que separa al pueblo –como unidad política– del poder. A la vez, en un tercer movimiento, para que haya una operación hegemónica como tal, debe construirse una identidad popular a partir de las distintas demandas vinculadas; la cual, pasa a ser también el *significante* de una universalidad más amplia (Laclau ofrece el ejemplo de que “mercado”, en el tiempo posterior a 1989 en Europa del Este, significó “mucho más que un orden puramente económico: abarcaba, a través de vínculos *equivalenciales*, contenidos tales como el fin del gobierno burocrático, las libertades civiles, ponerse a la altura de Occidente, etc.”²⁸). Ahora, entre la particularidad de una demanda y la *significación* popular dada por su inscripción dentro de la cadena, se produce una tensión en la que cuanto más autónoma, discursiva e institucionalmente se vuelve una demanda, más fácilmente conduce “a una desintegración casi completa del campo popular-*equivalencial*”²⁹. En este sentido, la debilidad del *modus operandi* de Sharp que señala Ahmed Bensaada, se comprende a partir de que una vez que se disolvieron los *vínculos equivalenciales* de los jóvenes

²³ *Ibíd.*

²⁴ *Ibíd.*

²⁵ Ernesto Laclau, *¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?*, disponible en <http://es.scribd.com/doc/34034681/Por-Que-Los-Significantes-Vacios-Son-Import-Antes-Para-La-Politica>, julio de 2003.

²⁶ Ernesto Laclau, *La razón populista*, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2005. Pág. 98.

²⁷ *Ibíd.* Pág. 98.

²⁸ *Ibíd.* Pág. 124.

²⁹ *Ibíd.* Pág. 125

activistas con otras demandas, o sea, que se disolvió la frontera política, se desintegraron como grupo social de cambio.

Estas acotadas conceptualizaciones no buscan ahondar en el campo de la investigación en ciencias sociales, sino aproximarse a la comprensión de la estrategia del golpe blando como una estrategia contrahegemónica. Ya bien aclara Laclau que la lógica de la hegemonía puede conllevar prácticas no emancipatorias. Este modo de constitución de identidades colectivas y su relación en la producción de las lógicas de disputas políticas, clarifican los motivos que llevan a movilizarse a ciertos sectores de la sociedad con proclamas que, en muchos casos, se encuentran alejadas de las realidades materiales de los sujetos, o que, en el proceso de universalización de sus demandas particulares, la identidad totalizadora no presenta los rasgos característicos (o primordiales) de la voluntad expresada en las demandas originarias. Así como la heterogeneidad de las distintas demandas que alberga una identidad totalizadora, en reiteradas ocasiones, no termina por comprometer más que al descabezamiento del gobierno. El efecto alcanzado en el proceso de cohesión de un sector de la sociedad es, en consecuencia, no más que la demonización, por proceso de exclusión, de otro sector; en este caso, del sector que gobierna, y de la amplia mayoría de la sociedad que respaldó a estos gobiernos. Dicho de otra forma, el periodista Luis Bruschtein afirma que el golpe blando “consiste en travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría que gobierna, hasta hacerla caer (...)”³⁰.

Asimismo, esta estrategia contrahegemónica de lucha por el control de las instituciones políticas, ha tenido un aliado fundamental: las corporaciones mediáticas. En primer lugar, cabe señalar lo que otro teórico social, Eliseo Verón, ha denominado como la mediatización de la sociedad. Proceso acontecido con el advenimiento de la radio y, principalmente, de la televisión a mediados de los años 50; por el cual, los medios no se comprenden solamente como “dispositivos de reproducción de un real al que copian más o menos correctamente, sino más bien (como) dispositivos de producción de sentido”³¹. En este tipo de sociedades, dice Verón, “el funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos, de la cultura, comienza a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios”³². Esta transformación ha repercutido, en consecuencia, en el modo de los comportamientos políticos; pues, las instituciones políticas han dejado de ser las encargadas de la gestión política de las representaciones sociales, particularmente, “en el terreno que, desde siempre, le había concernido a la gestión política: el de las experiencias sociales que trascienden los horizontes de la experiencia individual”³³. Esto explica el hecho de que los sectores dominantes, desplazados de las conducciones políticas, hayan encontrado en los medios de comunicación masiva su herramienta predilecta en el campo de las disputas políticas. Esta premisa no adhiere –como suele confundirse–

³⁰ Luis Bruschtein, *Golpe Blando*, nota publicada en el diario Página/12 el 15 de marzo de 2014, disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-241870-2014-03-15.html>

³¹ Eliseo Verón, *El cuerpo de las imágenes*, Grupo Editorial Norma, 2001.

³² *Ibidem*.

³³ Martín Retamozo y Mariano Fernández, *Discurso político e identidades políticas: producción, articulación y recepción en las obras de Eliseo Verón y Ernesto Laclau*; en Cuadernos de H Ideas, vol. 4, nº 4, diciembre de 2010; UNLP, FPyCS, Laboratorio de Estudios en Comunicación, Política y Sociedad.

con las visiones totalizadoras y manipuladoras sobre la función de los medios de comunicación; lo que revela es la consecuente cosmovisión de dichos sectores sobre la lógica instrumental de la comunicación.

A su vez, la concentración de la propiedad de los medios a partir de la desregulación del espectro audiovisual ha puesto la problemática en otra dimensión aún mayor. La unidireccionalidad constitutiva de los medios masivos se ha volcado, varias veces, en una unidireccionalidad del mensaje, a partir de la marcación de la agenda mediática –mediante la que se influye en la opinión pública en los temas a tratar y se silencian otros por su omisión–, como de una coordinación explícita entre medios como ha ocurrido en el caso de Ecuador, por ejemplo, cuando cinco de los diarios de mayor tirada del país publicaron la misma portada no por un hecho noticioso en el terreno del discurso informativo, sino con la proclama “Por la libertad de expresión”³⁴. Las corporaciones mediáticas, como en el caso ecuatoriano, suelen estar asociadas (o directamente pertenecer) a corporaciones financieras, como también a religiosas o vinculadas a la agroindustria (asociadas a su vez a multinacionales como Cargill) y a los negocios inmobiliarios o a constructoras como en el caso paraguayo.

De estos puntos deriva que los gobiernos populares hayan comprendido que la democratización de la información promueva la democratización de las sociedades, y que esto se refleje en una disputa contra las corporaciones. Como en el hecho de que los sectores dominantes que desarrollan la estrategia del golpe blando encuentren en los medios masivos una herramienta para desestabilizar a los gobiernos. Puesto que no ejercen el control de las instituciones políticas, el poder político, los sectores dominantes tienen terreno ganado contra los gobiernos populares en tanto que consigan constituir identidades colectivas en torno a significantes que separen al sistema institucional de la población, con la formación de una frontera política de momento insoluble; siendo que los medios de comunicación masiva, en tanto dispositivos de producción de sentido, son el recurso por excelencia para llevar a cabo las etapas de deslegitimación y ablandamiento que describe Sharp. De esta manera, desgastadas las bases de un gobierno y con la formación de grupos sociales que lo rechacen de cuajo, se concretará la consolidación del escenario propicio, el caldo de cultivo, que logre legitimar los actos desencadenantes de una fractura institucional. Para los cuales no se necesitan la movilización de grandes masas o la intervención de fuerzas armadas, sino la consecución de un evento traumático para el conjunto de la sociedad, como ha sido la masacre de Curuguaty en Paraguay, por el cual termine por justificarse el golpe. Ya sea mediante una intervención extranjera o, como en el caso, mediante un juicio político. Este es, en definitiva, el modo refinado del golpe blando.

Por último, si hay una estrategia planificada para llevarse a cabo, ¿quiénes son sus ejecutores? Pues, no azaroso fue el comienzo de esta introducción. A medida que los pueblos vislumbran los procesos mediante los cuales los poderes fácticos los oprimen, estos mismos son quienes siembran más sutilmente el oscurantismo en las

³⁴ El 10 de agosto de 2011, cinco diarios de Ecuador abrieron sus ediciones impresas con la misma portada en la que reivindicaban la libertad de expresión por la denuncia por calumnias injuriosas que el presidente Correa efectuó contra el ex jefe de opinión de El Universo, por una columna en la que afirmó que el presidente ordenó “fuego a discreción y sin previo aviso en un hospital lleno de civiles”, durante los sucesos del intento de golpe de septiembre de 2010.

verdades históricas. Este no es más que la comprobación de largos siglos de este tipo de accionar.

A continuación, narraremos los sucesos acontecidos en Paraguay en la destitución del primer presidente no colorado, tras más de sesenta años del reinado de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado, incluida la feroz dictadura stronista, en busca de visualizar y describir estos nuevos modos de deshacer la voluntad de los pueblos de elegir sus propios designios.

El shock

La tierra se tiñe de rojo, el hierro muestra su intensidad camino a Curuguaty. En la prolongación de la ruta se pierde a la izquierda el río Paraguay, como un serpenteo lento. Atrás van quedando las pocas casas blancas de tejas rojas, las arboledas verdes rodeadas de palmeras. Atrás queda la ciudad capital, Asunción, y tras las primeras curvas, se adentra el allá, el otro, el campo. Desde las partes altas del terreno se ven los restos marrón claro de las últimas cosechas; los límites de la tierra se dispersan en el horizonte. Paulatinamente, las radios empiezan a confundirse: ni castellano ni mucho menos guaraní se escucha; el portugués impera como marca de una frontera corrida.

Allí llegaron hace más de un siglo, los pocos viejos y niños que formaban los rescoldos del ejército de Francisco Solano López en su larga marcha hacia el norte. Ocupada Asunción por los brasileños, el mariscal López declaró a Curuguaty como capital de la República en agosto de 1869. Era la última parada antes del final de la Guerra de la Triple Alianza, que dejaría diezmado a un país rico como el Paraguay y marcaría el cierre de una voluntad integracionista, justo allí, donde viviera exiliado por casi tres décadas el protector de los Pueblos Libres, el Karay-guazú³⁵ para los lugareños, Don José Gervasio Artigas. Al Paraguay próspero e independiente, sin deuda externa, que contaba con un Estado partícipe de su economía y era propietario de la mayor parte de la propiedad rural —de 80 mil yardas de madera exportadas a Europa a mitad del siglo XIX, 50 mil pertenecían al Estado paraguayo³⁶—, le quedaban pocos días. Las minorías extranjerizantes de Brasil, Argentina y Uruguay cumplían a rajatabla sus servicios al imperio inglés.

En ese lugar, en Curuguaty, a 250 kilómetros al noreste de Asunción, por última vez se transmite la orden a la población civil de no seguir al ejército. Pero nadie quiere separarse de esa caravana de agonizantes³⁷. Mientras la voz del mariscal López “siga tronando por montes y laderas, la patria existe, y en pie queda la obligación de luchar por ella”, describe el militar y escritor Arturo Bray³⁸. Seis meses después, el 28 de febrero de 1870 advierten la cercanía del ejército imperial. Indios caygús ofrecen en vano esconder al mariscal en sus tolдерías: independencia o muerte será. Al día siguiente, en la profundidad de los bosques de Cerró-Corá, un soldado brasileño le daría un lanzazo al vientre del mariscal, quien, ante la negación de rendirse, pronunciaría la histórica frase “muero con mi patria”, poco antes de ser rematado con un fusil Mannlicher.

Casi un siglo y medio después, Curuguaty sería el epicentro de otro gran trauma en la sociedad paraguaya, que se cobraría la vida de diecisiete personas y dejaría trunco el proyecto político del gobierno de Fernando Lugo Méndez, a trece meses de su consumación. El 15 de junio de 2012, once campesinos y seis policías fueron asesinados en las tierras de Marina Kue, a escasos kilómetros de la ciudad, en lo que se denominaría como la Masacre de Curuguaty. Una semana después, el 22 de junio de 2012, este hecho sería el principal argumento para destituir al presidente Lugo en un juicio político calificado de exprés. Mientras los miembros del Mercosur y de la Unasur

³⁵ Término guaraní que significa “el Gran Señor”.

³⁶ Rosa, José María, *La Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas*. Buenos Aires, Punto de Encuentro, 2008. Pág. 16.

³⁷ *Ibíd.* Pág. 272.

³⁸ *Ibíd.* Pág. 273.

suspenderían al Paraguay de la participación en las reuniones de dichos organismos, la OEA, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos terminarían por no condenar los hechos.

La Masacre de Curuguay

Pocas cuadras atraviesan la avenida principal, cercada por una cantidad de bancos inverosímil. De noche, solo algunos puestos de comidas al paso dan vida a Curuguay. La terminal de ómnibus está parcialmente cerrada, esperando los escasos micros que transitan. A unas dos cuadras, un guardia de un hotelucho cruza su escopeta sentado en una silla de plástico. En la calle no hay voces ni rumores. Tal vez, algún foráneo desprevenido podría pensar que allí nada pasa.

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) había llegado por el sur, desde Caaguazú y Alto Paraná. Dependiente de la Policía Nacional, con poder de fuego de armas de guerra, el GEO era el encargado de llevar adelante los continuos desalojos producidos en el interior de Paraguay, producto de una distribución de la tierra irrisoria, en un país fundamentalmente dedicado a la producción agrícola-ganadera y con una masa campesina cercana a la mitad de su población. Alrededor de trescientos cuarenta agentes se habían desplazado hacia las afueras de Curuguay, en dirección a las tierras de Marina Kue.

En el amanecer del 15 de junio, los campesinos rancheaban tranquilos, esperando el hervor del agua. Los de la capital les habían asegurado una victoria. Un abogado del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) —instituto encargado de la tan postergada reforma agraria— se había apersonado en el monte donde acampaban los campesinos y, con expediente en mano, les afirmó: “Ya están ganando las tierras, es de ustedes, vayan haciendo nomás, rumbo”³⁹. Pues, ¿quién no le creería al hombre que venía de la capital, a la autoridad? Tras largos meses de ocupaciones, le arrancarían al gobierno un compromiso más fuerte para conseguir su porción de tierra. Las colonias contiguas les habían quedado pequeñas, y estas dos mil hectáreas de tierras del Estado —como les habían afirmado— promoverían el desarrollo de sus familias. Para los más jóvenes, era la oportunidad para instituir una familia, y asentarse. Podrían cultivar sus zapallos, algodón, mandioca y vivir en y para sus comunidades. Por eso se vivía un clima cuál preparativos de fiestas. Los más chicos improvisaron unos tambores alrededor de la ronda del mate y los grandes rieron, conversando de sus futuros proyectos una vez que obtuvieran sus tierras.

Larga es la historia de Marina Kue, la tierra en disputa. Como muchas cosas en Paraguay, su conflictivo origen se remonta al epílogo de la Guerra de la Triple Alianza, cuando los capitales foráneos —principalmente, ingleses— irrumpieron en la explotación del suelo paraguayo. La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA), actual propietaria de los dominios en cuestión según la Dirección del Registro de la

³⁹ Entrevista a Martina Paredes.

Propiedad⁴⁰, es un ejemplo de ello. A raíz de la Ley de ventas de tierras públicas de 1885, “un grupo de hombres de negocios extranjeros e influyentes políticos paraguayos constituyen en 1886 LIPSA, que llegaría a ser la más grande y poderosa empresa yerbatera del Paraguay en el siglo XIX y gran parte del siglo XX”⁴¹. Desde esa época se concentró la propiedad territorial en pocas manos; para 1910 las tierras de LIPSA abarcaban 1.091 leguas cuadradas de superficie (25.431 Km²)⁴². Hacia 1960, cuando comenzó a agotarse la economía de enclave, LIPSA empezó a liquidar sus activos mobiliarios. No solo vendió sus propiedades, además concedió fracciones al Estado por una deuda contraída con el mismo, y con el objetivo de que éste instale cuarteles. Ya que en la década del 60, Paraguay se encontraba en un proceso de “colonización” del este de la Región Oriental. Así, el 13 de agosto de 1967, tras la mensura del lugar denominado Ybyra Pytã, distrito de Curuguaty, donó 2.821 hectáreas a la Armada Nacional⁴³; es decir, al Estado paraguayo. Por eso, Marina Kue: en guaraní, Kue significa “que fue de”; o sea, el lugar que fue de la marina.

Tras la larga línea de continuidad de acumulación de tierras en pocas manos, la introducción de la soja transgénica al país reverdeció un proceso de expulsión y criminalización del campesinado en pos del avance de la frontera agrícola, en los albores del nuevo siglo. En este caso, de las 2.821 hectáreas que fueron donadas, hoy solo quedan 2 mil; mientras que el resto ha sido robado paulatinamente desde los 60 por uno de los compradores de las tierras de LIPSA: Blas N. Riquelme, antiguo senador de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado. Como quien achica su arco cuando el rival no lo mira, el influyente político colorado ha ido corriendo los mojones de sus propiedades lindantes, acaparándose de las tierras fiscales.

Cerca de media hora se tarda en llegar a Marina Kue desde Curuguaty por la ruta Nº 10, de profuso tránsito de camiones. De un lado de la ruta, se encuentra el acceso a la colonia Ybypytã I, un camino de tierra colorada que se pierde en una bifurcación de vegetación silvestre. Es una colonia ganada hace dos décadas, cuando aún los montes acaparaban el paisaje. Junto a Ybypytã II y colonia La Esperanza, son las comunidades campesinas de donde provenían la mayoría de los ocupantes de la tierra de Marina Kue, del otro lado de la ruta.

Desde temprano, cerca de las siete y media de la mañana, comenzó a desarrollarse el operativo. El capitán del GEO, Erven Lovera, luego de sobrevolar la zona en helicóptero le indicó a la fiscal Ninfa Aguilar que comenzarían el operativo. El Grupo Antimotines, desarmado y portando únicamente escudos, porras y balines de goma avanzaría en la primera línea; atrás quedaría el Grupo Táctico, pertrechado con armas⁴⁴. Uno ingresaría por el lado izquierdo de la entrada a la finca, por el sector de la estancia Campos Morombí, y el otro por el derecho, por el camino que viene de la Hacienda La Paraguaya, rodeando a los campesinos que se encontraban en la entrada

⁴⁰ Aunque consta en los registros la donación efectuada por LIPSA, el Estado paraguayo nunca inscribió las tierras en el registro de la propiedad. Esto se debe a una negligencia por parte de las autoridades, que se comprende a partir de que al momento de la donación, durante la dictadura, los decretos de Stroessner tenían el peso de una ley.

⁴¹ Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). *Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue*. Asunción, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2012. Pág. 43.

⁴² Op. cit.

⁴³ Op. cit.

⁴⁴ Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), *Informe Masacre de Curuguaty*, Informe elaborado por el Dr. Aitor Martínez, basado en el trabajo de campo realizado por el Dr. Domingo Laino y el periodista José María Quevedo, octubre de 2012, Asunción, Paraguay.

de la estancia, a alrededor de dos mil metros de la ruta. Los esperaban poco más de cincuenta, mujeres y niños incluidos.

—Están entrando muchos policías —le dijo Fermín Paredes por teléfono a su hermana, desde el sitio.

—Váyanse hacia el monte, nomás —respondió Martina, que se encontraba en su casa en la comunidad del frente, en Ybypytâ I.

—No, vamos a esperarle, nomás, si total van a venir autoridades con ellos y vamos a hablar.

— ¡Qué bueno!, tranquilo, entonces.

—No, yo voy a cortar el teléfono: ya están llegando y seguro que vamos a hablar.

—Tranquilo —le dijo.

Cortaron la comunicación, y comenzaron los primeros estruendos. Martina salió por el camino de tierra hasta el acceso a la comunidad. Un centenar de policías habían formado un cordón a lo largo de la ruta, impidiendo el ingreso a Marina Kue, al frente. Desde allí, vio entrar a la montada por el otro lado. Se escucharon más ráfagas de disparos. Los vecinos de las comunidades lindantes comenzaron a aglomerarse sobre la ruta.

Esta vez lo llamó Martina:

— ¿Cómo estás? Porque yo estoy escuchando tiros.

— ¡Yo ya estoy herido en las piernas! —respondió entre gritos y sollozos—. Veán la forma cómo pueden entrar y puedan sacarme de acá para llevarme al hospital, porque ya voy a morir desangrado.

Martina corrió hacia los policías para pedirles que la dejaran entrar. “Mi hermano está ahí, ellos son campesinos, y él está herido; hablé con él y yo lo quiero sacar”, les decía. “No, ahí no vas a entrar, ahora hay enfrentamientos con policías y campesinos, y no vas a poder entrar”, le respondieron.

Adentro, ya habían caído quienes se habían encargado en los operativos anteriores de resolverlos de manera pacífica: Erven Lovera, el jefe del GEO, y Avelino Espínola, uno de los referentes de los campesinos. Casi en simultáneo, cuando se acercaban a negociar, recibieron los primeros disparos que se escucharon. Luego, vino la balacera.

Estela se encontró con el mismo cordón policial, ineludible. Estaba trabajando en un Centro de Salud de la zona cuando escuchó la noticia por la radio. Les dijo a sus compañeros que iba a ir para ahí, ya que uno de sus hijos estaba adentro. Al salir, unos motoqueros le preguntaron si tenía noticias, porque a esa altura ya estaban casi todos muertos. Por suerte había convencido a su otra hija de asistir al desfile de la escuela, en el que sus hijos habían participado tres días atrás, por lo cual ya no había vuelto a Marina Kue. Pero el más chico, de 18, con seguridad se encontraba en la ocupación. Adentro, en el conflicto que “era una guerra, parecía una película”⁴⁵. Sin más que

⁴⁵ Entrevista a Estela Medina.

hacer, y fiel a su sentido del deber como trabajadora sanitaria, comenzó a ayudar a las brigadas de asistencia de Salto de Guairá y de Curuguaty. Hasta que por fin llegó el mensaje: “Ya estoy saliendo, me estoy escapando mamá”. El maizal maduro, de dos metros de alto, les había propinado de resguardo junto a otros compañeros. Por campo traviesa escaparon de la matanza.

Otra fue la suerte de Rubén Villalba. Se encontraba en la primera línea de los campesinos a unos pocos metros de Espínola, cuando cayó por un disparo que le rozó la cabeza, momento después de él. Al reincorporarse, atendió su celular que le sonaba. Lo llamaban desde la radio Fe y Alegría:

—Sí, Rubén, te estamos escuchando, se hizo el desalojo y hay heridos, no estás diciendo, Rubén.

—Sí, unos cuantos y también muertos, si, ¿hola?

— ¿Habría fallecidos, Rubén?

—Sí, hay, hay.

— ¿Y dónde están ustedes ahora?

—Estamos en unos yuyales —la voz es cada vez más agitada—. ¿Hola?, ¿hola?

—Sí, Rubén, te escuchamos, te escuchamos...

Los días previos

Todos los campesinos muertos eran vecinos de la zona, ya sea de las comunidades fronterizas o de distritos próximos. En el caso de Luis (26) y Fermín Paredes (28), los dos hermanos de Martina asesinados, vivían en la comunidad Ybypytâ I donde su padre, Don Alberto Paredes, tenía diez hectáreas de tierra que trabajaban desde el origen de la comunidad, hace veinte años, aunque aún no poseían el título de su propiedad. Ambos eran agricultores; además, Fermín hacía trabajos como gomero para tener un dinero extra. Venían participando en la Comisión sin Tierra de Marina Kue desde el principio. Eran once hermanos y las diez hectáreas de su padre no alcanzaban; por eso, decidieron hacerse de las tierras públicas, tal como lo había hecho su papá. Incluso, habían participado del conflicto de enero, cuando el dirigente Leonor Rivas los había motivado para manifestarse contra las fiscalías de Curuguaty y la policía y los cascos azules les reprimieron. Les sacaron sus motos, les pegaron y tiraron con balas de goma: un chico perdió un ojo. Ahí percibieron para quién jugaba Rivas, y lo echaron de la comisión. A decir de Martina, “él es campesino también, solo que le utiliza la empresa Campos Morombí, que se adueña de Marina Kue, que es de los Riquelme”⁴⁶. Desplazado el presidente de la comisión, hicieron otra vez asamblea, nueva comisión e ingresaron a Marina Kue a comienzos de mayo, un mes y medio antes de la masacre.

⁴⁶ Entrevista a Martina Paredes.

Por ese entonces, el 9 de mayo, fue cuando la fiscal Ninfa Aguilar de la Unidad Penal Nº 3 de la fiscalía zonal de Curuguaty, ordenó de oficio a la Sub Comisaría Nº 19 de la Colonia Campo Aguae que se establecieran en la propiedad de Campos Morombí S. C. y A. para constatar un supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno⁴⁷. Los policías verificaron el campamento de alrededor de ciento cincuenta personas, ubicados según el informe dictaminado, en las fincas Nº 72 y 1.352 y su desprendimiento 258, 259 y Finca Nº 30, en el Km 28 de la ruta Nº 10 “Las Residentas, dentro de la propiedad de Campos Morombí”. Días más tarde, el guardia de seguridad de la empresa Campos Morombí denunció haber sido expulsado por los campesinos de la casilla situada en la entrada del bosque de Marina Kue. Nuevamente, la policía concurrió el 17 y el 23 de mayo. El jefe de Orden y Seguridad del departamento, Miguel Ángel Anoni, constató a setenta campesinos, entre hombres, mujeres y niños, con los cuales entabló un diálogo para negociar la retirada del campamento. Como condición, los campesinos reclamaron observar el documento que compruebe que las tierras en cuestión eran propiedad de la empresa Campos Morombí. Sabían que las tierras eran del Estado, y que Blas N. Riquelme se las había apropiado: eran tierras malhabidas. Pues, la policía no tuvo otra opción, y se retiró.

El último contacto que tuvieron los campesinos con funcionarios del Ministerio Público antes de la masacre fue el 7 de junio. La situación volvió a presentarse de la misma manera: buscaron convencer a los ocupantes de que abandonaran el lugar, y éstos exigieron ver algún documento de acreditación de las tierras a nombre del ex senador. Acto seguido, los funcionarios les advirtieron que ya existía una orden de allanamiento para ejecutarse, próximamente⁴⁸. Claro que no podrían ordenar un desalojo, ya que para esto debía establecerse primero quién era el propietario de las tierras.

Advertidos de algún posible operativo, los campesinos nunca imaginaron semejante despliegue de las fuerzas policiales. Pues, ellos reivindicaban su derecho a una porción de tierra, de tierras del Estado que debieran destinarse para la reforma agraria: retornárselas a quienes la trabajan. Frente a las más de cien mil hectáreas de los Riquelme, qué sería exigir su porción de diez hectáreas para sus cultivos. El referente Avelino “Pindú” Espínola estaba convencido de ello, y de esto hablaba con sus compañeros; ellos también eran el Estado, por lo que el Estado no podía levantarse contra el Estado.

⁴⁷ Estas informaciones parten del testimonio de los campesinos y de una serie de informes policiales elaborados por la Subcomisaría Nº 19 de la colonia Campo Aguae, Curuguaty, que vigiló todos los movimientos de la organización en Marina Kue hasta los sucesos del 15 de junio e informó a la comandancia departamental (Ministerio Público, 2012d: 198-211); y fueron recolectados por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). *Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue*. Asunción, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2012.

⁴⁸ *Ibidem*.

Los cuerpos y las pruebas

Las declaraciones de los policías frente al Ministerio Público dictaminaron que, cuando se encontraban próximos a los campesinos para negociar su salida, Erven Lovera dispuso al Grupo Táctico —pertrechado con fusiles de asalto Galil— detrás de la primera línea comandada por los jefes del operativo⁴⁹. De este grupo resultaron los seis policías abatidos. Luego de ser asesinados el hermano del custodio presidencial y jefe del operativo, Erven Lovera, y el vicepresidente de la comisión de sin tierra de Marina Kue y encargado aquel día de dialogar con los policías, Avelino Espínola, cayeron abatidos el resto del cuerpo de élite de la Policía Nacional. Todo en cuestión de segundos.

Según el informe de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC)⁵⁰, que refutó las líneas de investigación del fiscal de la causa, ocurrieron primero dos disparos aparentemente de distintas armas, un tercer y cuarto disparo de cadencia automática, y posteriormente “una sucesión abierta de disparos automáticos por 9 segundos”⁵¹. El estudio analizó la cadencia de disparos (la cantidad de proyectiles disparados por un arma por unidad de tiempo) a partir de la recolección de videos que registraron el momento, en especial uno que filmó con su celular un agente del Grupo Antimotines y que fue difundido en baja calidad por los medios de comunicación. También señala que en la Carpeta Fiscal, el informe pericial asegura que solo se encontraron dos vainas de balas 5.56 de fusil automático y que el informe policial sólo menciona una vaina de 5.56; sin embargo, lo importante no sería solo la incongruencia, sino, la pregunta radicaría en por qué no se encontraron más casquillos. “Una explicación podría ser que el que disparó esas armas automáticas contara con recolectores de vainillas servidas, pero ese no es el modus operandi de la Policía, sino de los criminales que no quieren dejar rastros”⁵². Sin embargo, al día siguiente de la masacre encontraron muchas más vainas que tampoco fueron incorporadas a la causa, existen fotografías de las mismas y la declaratoria del concejal de Curuguaty Julio Colmán de haber propiciado dichas pruebas.

El cordón policial apostado sobre la ruta permaneció hasta al día siguiente. Durante el viernes 15 de junio nadie pudo ingresar o salir de Marina Kue por el sendero que iba hasta la ruta N° 10, a la altura del ingreso a la colonia Ybypytâ I. Nuevamente se les impidió a los campesinos ir a buscar a sus familiares. A Martina le dijeron que todavía había enfrentamientos e, incluso, que era peligroso porque había cazabobos. Tampoco la prensa pudo entrar.

Como la unidad móvil de la región sanitaria se vio desbordada, las mismas patrulleras sirvieron para el traslado de los heridos. Los agentes policiales fueron los primeros en ser llevados al hospital de Curuguaty; sus ingresos se registraron entre las 8.30 y 9.45 de la mañana. Los campesinos debieron esperar por lo menos hasta el mediodía. Los que no pudieron escapar por el monte ubicado detrás de la escena de los hechos o entre el maizal alto, fueron arrestados o, según los testimonios,

⁴⁹ *Ibidem*. Pág. 98.

⁵⁰ *Op. cit.*

⁵¹ *Op. cit.* Pág. 12.

⁵² *Ibidem*.

asesinados a sangre fría: ejecutados. “Al parecer, siguiendo estos testimonios y pruebas, los policías del GEO —carentes de mando operativo en el terreno por la muerte simultánea del jefe y el subjefe del operativo— se entregaron a la brutalidad y cometieron actos de venganza sobre los civiles que cayeron en sus manos”⁵³. El informe de CODEHUPY⁵⁴ ofrece una serie de testimonios acerca del caso del campesino Adolfo Castro Benítez, por ejemplo, que coinciden en que, guarecido en unos pastizales luego de las primeras descargas de fusiles, salió a entregarse cuando vio que un policía se llevaba a su hijo de tres años. Al hacerlo, poniendo las manos en alto, fue acribillado. El médico forense de la fiscalía Matías Arce constató en el acta de procedimiento las heridas en su tórax, brazo izquierdo, pierna y la definitiva, “una herida de arma de fuego en el cráneo, aproximadamente de 20 cm de diámetro en la región parieto temporal izquierdo, con destrucción de masa encefálica”⁵⁵. En la fotografía aportada por el PEICC, se lo ve a Adolfo Castro Benítez boca abajo, con el torso desnudo con una herida en el omóplato izquierdo, otra en el antebrazo izquierdo, y un cuarto de su cabeza desparramada en la tierra.

Fermín Paredes tampoco murió por su herida en el muslo. Por lo menos tres testigos indicaron que la policía lo ejecutó. Pasado el mediodía, Martina se enteró del porvenir de su hermano: “Fermín fue ejecutado, ya falleció y está ahí”⁵⁶, le informaron por teléfono. Y allí quedó hasta que fue transportado junto a ocho cadáveres más de campesinos al hospital de Curuguaty, primero, y luego a Asunción. Ironía y realidad, su traslado no tuvo el lujo de una unidad móvil del Ministerio de Salud o siquiera de una patrullera policial: fueron los camiones que llevan y traen las cosechas del campo mecanizado los que transportaron sus cuerpos. Recién tres días después, Martina y sus familiares pudieron realizar su entierro. “Nosotros no sabemos si es nuestro hermano el que enterramos porque no le pudimos mirar más la cara. Le llevaron a Asunción envuelto en una carpa, bien asegurado con cinta, sucio, con sus zapatas, así como estaba; ni le pudimos bañar, ni le pudimos sacar la ropa. Así ellos le trajeron de Asunción otra vez, todo podrido, tenía un olor insoportable. Nosotros no lo pudimos ver más”⁵⁷.

Una vez que se retiró el cerco policial, el sábado 16 de junio campesinos y periodistas recorrieron los dos mil metros que van de la ruta Nº 10 hasta el lugar donde se desarrolló la masacre. A unos cien metros del sitio donde emboscaron a los campesinos, encontraron los cuerpos de Luis Paredes y De los Santos Agüero. Luis ya tenía una herida en un hombro cuando le dispararon en la cabeza a corta distancia; la bala le entró a la izquierda de la frente y le salió por debajo de su oreja derecha. Junto a él, había casquillos de munición 5.56 45mm⁵⁸. De los Santos Agüero murió por disparos en sus piernas y glúteo. Detrás de él había una escopeta de las que utilizaban para cazar pájaros, tatú y otros bichos silvestres mientras estaban en la ocupación. Según las pruebas periciales esa escopeta no fue disparada aquel 15 de junio. De

⁵³ Op. cit. (Informe de CODEHUPY). Pág. 106.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*. Pág. 108.

⁵⁶ Op. cit.

⁵⁷ Op. cit.

⁵⁸ Op. cit.

hecho, de las escopetas incautadas a los campesinos se comprobó que solo una se había accionado y, cuando la probaron, no funcionó⁵⁹.

La versión de la Fiscalía, la versión mediática

En la noche del 15 de junio, el principal diario de Paraguay, el ABC Color, publicaba que “asesinos usaron escopetas”, en su bajada describía que “fuentes de la investigación confirmaron que los 6 policías abatidos en Curuguaty, recibieron impactos de perdigones en la zona de la cabeza y el cuello”, y en el cuerpo de la nota decía: “En la mañana de este viernes al conocerse el enfrentamiento entre policías e invasores, se manejó la información de que miembros del Ejército del Pueblo Paraguay (EPP) estuvieron asesorando a los campesinos”⁶⁰. La nota resume la línea editorial que manejarían en los días sucesivos. Así, los principales medios comerciales recurrían a un viejo mecanismo utilizado en las dictaduras: la estigmatización de las víctimas, su conexión con un grupo extremista, para luego presentar los hechos como el desarrollo de un enfrentamiento por el cual se legitima la violencia institucional. Si había habido francotiradores pertrechados con armas automáticas, como se desprendía de las autopsias de los policías que presentaban de a tres disparos consecutivos entre su cabeza y cuello, los campesinos debían haber tenido alguna instrucción. Si había infiltrados, era la mano del EPP: “Según datos, los campesinos tuvieron entrenamiento armado, supuestamente del Ejército del Pueblo Paraguay (EPP), e incluso se sospecha que integrantes del grupo criminal estaban infiltrados entre ellos”⁶¹, informaba el ABC. De algún modo, poco más de cincuenta campesinos, con mujeres y niños incluidos, habían emboscado a los más de trescientos cuarenta policías y grupos especializados: “Carperos emboscan y matan a 6 policías para evitar desalojo en Curuguaty”⁶², afirma otro de los diarios de gran tirada, La Nación.

Desde un principio, los zócalos de los canales televisivos, los titulares y bajadas de los diarios expusieron que los sucesos ocurrieron en propiedad de la empresa Campos Morombí. No indagaron sobre la titularidad de las tierras de Marina Kue, por lo que el conflicto lo describían como una disputa entre propietarios y ocupantes: el campesino fácilmente se volvía un invasor. De este modo podían enunciar además la maniobra como un operativo de desalojo cuando la orden resuelta por el juez Dolores Benítez había sido de allanamiento. Con la calificación de desalojo se podía justificar el uso de la fuerza para retirar a los campesinos de Marina Kue y, en algún punto, el semejante despliegue policial.

Con la consecuente ligazón con el EPP para explicar las evidentes huellas de que los campesinos no podían haber emboscado a tales fuerzas policiales, la estigmatización histórica al sector campesino recrudecía al punto de su demonización.

⁵⁹ PEICC, Op. Cit.

⁶⁰ ABC Color, 15 de junio de 2012, disponible en: <http://www.abc.com.py/nacionales/policias-fueron-abatidos-con-perdigones-414662.html>,

⁶¹ <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/dantesco-enfrentamiento--en-colonia-de-curuguaty-414759.html>, ABC Color, 15 de junio de 2012.

⁶² <http://www.lanacion.com.py/articulo/76494-masacre-desata-crisis-politica.html>, La Nación, 16 de junio de 2012.

Incluso, Fernando Lugo, el presidente descripto como el consentidor del campesinado, no se animaría siquiera a compadecerse de las muertes en las filas campesinas y solo hablaría de los policías abatidos: “Como presidente de la República manifiesto mi firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeña en defensa y preservación de la ley. Manifiesto mi solidaridad con las familias de las víctimas fatales y los heridos que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión”⁶³.

Por su parte, el Ministerio Público actuaría con igual parcialidad. En la tarde del 16 de junio de 2012, los fiscales Ninfa Aguilar y Diosnel Giménez ampliaron la imputación a 54 personas. A los nueve campesinos apresados el día anterior, a quienes acusaron de la autoría de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, autores de los delitos de lesión grave, coacción, coacción grave y asociación criminal, le sumaron un listado con más de cuarenta campesinos, con nombre y cédula, que hallaron en el campamento luego de la masacre. “La fiscalía argumentó que en la misma nómina figuraban varios de los campesinos muertos en el desalojo, así como quienes resultaron con lesiones, *constatándose con claridad que todos los integrantes de la nómina forman parte activa y efectiva del grupo criminal que perpetró el homicidio y lesiones de los integrantes de la comitiva policial*”⁶⁴. El listado formaba parte de un censo que habían realizado los mismos campesinos con objeto de presentarlo ante el INDERT, como uno de los pasos necesarios que obliga la entidad, y de utilizarlo para reclamar víveres. “Al ser procesados están imputados y su declaración, ellos pueden mentir, entonces su declaración no es válida como testigo; sí se les toma declaración pero como indagatoria, que es un medio de defensa: uno puede mentir, puede abstenerse de declarar, y eso no puede ser usado”⁶⁵, explicará más tarde el abogado defensor de los campesinos, Vicente Morales. También sin mayor argumentación, el principal hecho punible cambiaba de clasificación a homicidio doloso agravado.

El 17 de junio declararon la rebeldía de todos los acusados cuyos nombres se encontraban en la lista y todavía no habían sido apresados. A la vez, el Juzgado decretó su detención y su remisión a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.

El 18, la fiscal Ninfa Aguilar pidió la ampliación de la imputación al delito de invasión de inmueble ajeno agravado, a la que dieron lugar.

“Desgarradores discursos realizaron representantes de la comunidad y de los organismos policiales y coincidieron en reclamar justicia y cambios de leyes, para que los uniformados puedan actuar con eficacia contra los delincuentes instigadores que empujan para las invasiones de propiedades privadas y que tantos daños ya causaron al país”⁶⁶, difunde el ABC Color a raíz del entierro de Erven Lovera. Los pedidos de cambio ya tienen una dirección precisa, nada tiene que ver la irrisoria distribución de la tierra, de las riquezas, el profundo avance de la agroindustria, la estigmatización del campesinado y largos años de injusticias. Los males de la sociedad paraguaya recaen en quiénes dan muestra de su sinrazón.

⁶³ La Nación, 16 de junio de 2012, disponible en: <http://www.lanacion.com.py/articulo/76497-en-forma-fria-y-escueta-lugo-lamento-las-muertes.html>

⁶⁴ CODEHUPY, Loc. Cit. P.162.

⁶⁵ Entrevista a Vicente Morales.

⁶⁶ ABC Color, 16 de junio de 2012, disponible en: <http://www.abc.com.py/nacionales/piden-justicia-durante-cepelio-del-jefe-de-geo-415093.html>

El 19 de junio, según el ABC, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Eduardo Felippo, “explicó que se encuentran bastante preocupados por lo que se viene y además lamentan la muerte de paraguayos. Dijo que el conflicto debe servir para que el Gobierno enderece su rumbo y empiece a tomar las medidas necesarias”⁶⁷. En la misma nota se exhibe la incertidumbre de un ex ministro de Hacienda, César Barreto: “Y ahora todo es incierto, porque queda definir si es un hecho aislado o va a ser a partir de ahora la forma de proceder de este grupo. Esta situación es un problema grave para las inversiones”.

El clima de inestabilidad política era latente. Aunque Fernando Lugo removiera de sus cargos al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional, el trauma provocado en la sociedad paraguaya por la mayor masacre de campesinos en democracia durante un episodio en torno al conflicto por la tierra, realzaba el desapego y el descreimiento a su gobierno. Mientras los medios de comunicación construían una verdad trastornada de los sucesos ocurridos en el interior paraguayo, que los fiscales se encargaban de argumentar con su accionar parcializado, varias eran las voces que en el arco político opositor se levantaban reclamando el juicio político al presidente; esta vez, con la sospecha fundada de que se alcanzaría a concretar.

⁶⁷ABC Color, 19 de junio de 2012, disponible en: <http://www.abc.com.py/nacionales/conflicto-afecta-imagen-del-pais-416020.html>,

El golpe

Los balines de goma repiqueteaban en el piso de la Plaza de Armas. La gente huía despavorida cubriéndose con lo que tenía a su alcance, intentando ver a través de la cortina de humo que formaban los gases lacrimógenos. Algunas voces desesperadas gritaban: “No se vayan, no se vayan”; pero las banderas paraguayas se retiraban de la plaza, mientras Federico Franco obtenía lo que tanto había anhelado: la banda presidencial.

El frío de la noche iba avanzando sobre quienes allí quedaban. Infructuosos fueron los intentos de resguardarse de los gases y las balas; en el Congreso Nacional, la larga columna de policías que bloqueaba la puerta les impidió la entrada. Los potentes chorros de agua, lanzados desde los camiones, y el miedo latente de la sociedad paraguaya producto de los casi 35 años de dictadura militar, fueron cercando la plaza hasta reducirla a la nada. Los bancos quedaron vacíos, los papeles en el piso y las voces se apagaron. El cántico: “El pueblo unido jamás será vencido”, lentamente se diluía en las puertas de Mburuvicha Róga⁶⁸, para dar lugar al simple sonido del viento.

La plaza estaba acostumbrada, era la misma que había visto sus canteras llenas de sangre a causa del Marzo paraguayo, cuando fueron asesinados siete jóvenes. Aquel 26 de marzo de 1999 la caballería, el fuego, los francotiradores y las tanquetas, llenaron las calles de Asunción; intentaban reprimir a quienes se manifestaban en contra del asesinato del vicepresidente Luís María Argaña, ocurrido tres días antes, y exigiendo la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau y de su mano derecha por fuera de la política, el general Lino Oviedo, a quien consideraban autor intelectual del acribillamiento. Esa plaza tenía historia, de balas y represión, de gritos y sangre, de muerte y miedo, pero también de lucha y reivindicaciones; entonces no era cualquier sitio: “para quien iba, tenía un riesgo, un riesgo que yo mismo como no me crié en Paraguay, no tenía; de hecho, cuando se tiran las primeras bombas lacrimógenas muchísima gente huyó, pero despavorida. Porque sus fantasmas aparecieron ahí concretándose”⁶⁹, explica el chileno Pelao Carvalho, integrante de Articulación Curuguay.

En frente, el Palacio de los López, ese antiguo edificio construido por Francisco Solano López, el presidente que vio cómo su Nación se derrumbaba a causa de la Guerra de la Triple Alianza, cerraba firmemente sus puertas a Fernando Lugo. La democracia paraguaya estaba de luto, el ex obispo se transformaba ahora en ex presidente, trece meses antes de concluir su mandato. La investidura presidencial y las riendas de la Nación pasaban a manos de quien hasta ese momento había ejercido el cargo vicepresidente, Federico Franco; un cardiólogo de 50 años, perteneciente al Partido Liberal Auténtico (PLRA), con quien Lugo había hecho una alianza para triunfar en los comicios de 2008, denominada “Alianza Patriótica para el Cambio”, junto con más de veinte agrupaciones de izquierda.

Ese abril de 2008 fue histórico, diez puntos de ventaja lo colocaron por encima del legendario Partido Colorado, que desde 1947 había gobernado sin interrupciones en Paraguay, incluida la dictadura de Alfredo Stroessner. El día 20 por la noche, los fuegos artificiales y los bocinazos de los automovilistas inundaron las calles de Asunción; Palma fue la elegida donde improvisaron un pequeño escenario de madera

⁶⁸ En guaraní significa “la casa del jefe”.

⁶⁹ Entrevista a Pelao Carvalho.

y, desde allí, Fernando Lugo le habló a todo el Paraguay, a su lado Federico Franco y su esposa, Emilia, los primeros en subirse a la tarima de la gloria, sonreían a la multitud. Unas veinte mil personas cantaron el estribillo de la canción popular Patria Querida: "Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir". Era la primera vez en la historia paraguaya que un presidente de centroizquierda ganaba las elecciones. Todo transcurría a tan solo dos cuadras de la Plaza de Armas, donde tres años después se encontrarían, ya no entre luces de colores y festejos, cánticos y aplausos, sino entre gases y escudos policiales, con unos cuantos francotiradores apuntando a la cabeza de los presentes. El escenario era el mismo, solo habían cambiado las circunstancias: Fernando Lugo había sido destituido en un juicio político exprés. La soberanía popular acababa de perder una gran pulseada.

La previa del juicio

Cinco horas fue el tiempo que demoró la aprobación del juicio político al presidente, juicio que se realizaría tan rápido como un relámpago: el proceso duró poco más de 24 horas, empezando antes del mediodía del jueves y culminando en la tarde del viernes. No era la primera intentona, pero sí la que finalmente se concretaba. Durante toda su gestión, Fernando Lugo tuvo que enfrentarse a veintitrés tentativas de juicio político, hasta que finalmente la Masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, dio a los legisladores el motivo que tanto habían esperado.

Los tiempos apremiaban, así que cuando tan solo habían pasado unas horas de conocerse la matanza, cuando todavía la pólvora estaba caliente y una nube de humo cubría los campos Morombí, en el departamento de Canindeyú, la Cámara de Diputados había llamado ya a una sesión extraordinaria para analizar el juicio político. El diario ABC Color rápidamente hizo su aporte conspirativo contra el presidente, titulado: "Dantesco enfrentamiento en colonia de Curuguaty", y colocando en la bajada la frase: "Hubo más muertos que en el Marzo Paraguay"⁷⁰, reflatando una herida abierta de la sociedad paraguaya y dando a entender que Fernando Lugo debía correr con la misma suerte que el presidente de ese momento, Raúl Cubas Grau. Pero a diferencia de Cubas Grau, Lugo no renunció, por lo que seis días más tarde la operación en su contra estaba en marcha y resultaría todo un éxito.

El ex obispo nunca tuvo paz, a tan sólo 72 horas de haber asumido su mandato llegó la primera amenaza de juicio político, de la mano del asesor legal de la presidencia del Senado, Diego Bertolucci, uno de los máximos exponentes de la masonería paraguaya que estuvo acusado por el cobro irregular de 529 millones de guaraníes pertenecientes a la Entidad Binacional Yacyretá. El abogado, formado en La Sorbona, elaboró una ruidosa declaración al decir que 45 minutos después de asumir, Lugo había violado la Constitución al tomar juramento como ministros a los senadores Efraín Alegre y Blas Llano, quienes no tenían permiso de la Cámara. Este argumento

⁷⁰ABC Color del 15 de junio de 2012, disponible en: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/dantesco-enfrentamiento--en-colonia-de-curuguaty-414759.html>.

no contó con el apoyo de ningún partido, pero la política del desgaste había dado su puntapié inicial, comenzando a socavar las bases del gobierno constitucional.

A partir de ahí, la veintena de intentos para poner fin al gobierno empezaron a aparecer: la creciente inseguridad en el país a causa del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado de izquierda del cual nunca se comprobó su existencia; un acto político en las Fuerzas Armadas, donde representantes de la juventud socialista enarbolaron una bandera con la imagen del Che Guevara, pecado mortal en un país donde la calificación de comunista podía valer la muerte; la aparición de los hijos del ex obispo, que lo mostraban como una persona infiel a sus principios religiosos, en una sociedad donde la moralidad aparece como uno de los preceptos rectores; la detección de un linfoma cancerígeno, que afectaba su estado de salud y lo incapacitaba para la presidencia, entre otros. Ante cualquier conflicto que hubiera en la tierra paraguaya el gran culpable era Fernando Lugo, y las dos palabras hacían su aparición poniendo en tela de juicio la democracia.

El presidente estaba solo, en ambas cámaras del Congreso era preponderante la presencia del Partido Colorado; Lugo tenía el título de Jefe de Estado, pero no detentaba el poder político, el cual seguía en manos de los herederos del dictador Stroessner. Apenas tres diputados de ochenta y tres senadores de cuarenta y cinco eran del Frente Guasu, por lo que durante todo su mandato tuvo que lidiar con una acérrima oposición legislativa. De hecho, uno de los detractores más fuertes del gobierno lo encontró dentro de la Cámara de Senadores: Alfredo Jaeggli, quien a un año de iniciado su mandato, en octubre de 2009, declaraba en el diario ABC Color que debía realizarse un juicio político al presidente, ya que este no era capaz de llevar seguridad a la población⁷¹. Pese a pertenecer al PLRA y haber formado una alianza estratégica con Fernando Lugo, el senador no dejaría pasar oportunidad para acorralar al presidente, juzgarlo y buscar destituirlo de su cargo.

Federico Franco, su vicepresidente, tampoco se la haría sencilla. El cardiólogo, también perteneciente al PLRA, no le perdía pisada y desde un principio anunció estar listo para ocupar el cargo de jefe de Estado, en caso de que el ex obispo sea sometido a juicio político; así lo muestra el relato del periodista Nicasio Vera del diario ABC Color, quien en la editorial titulada “La angustia de Federico”, publicada el 14 de diciembre de 2009, cuenta: “El domingo, hicimos una entrevista en un desayuno con el vicepresidente Federico Franco, que apenas terminó de expresar su apoyo a Lugo, nos recordó que estaba capacitado para sustituirlo en caso de un eventual juicio político”⁷². Lugo llevaba poco más de un año en la presidencia, pero hasta sus mismos ‘aliados’ buscaban destituirlo y peleaban por quién ocuparía su lugar.

La alianza con el Partido Liberal era débil. Luego de la Masacre de Curuguaty rápidamente le dieron la espalda y buscaron desvincularse de todo tipo de responsabilidades; durante estos tres años, Federico Franco había permanecido como un gato agazapado esperando el momento de dar el gran zarpazo. La relación se tensó aún más cuando Lugo, luego de los hechos en Marina Kue, nombró ministro del

⁷¹ ABC Color del 19 de octubre de 2009, disponible en: <http://www.abc.com.py/nacionales/senador-jaeggli-pide-juicio-politico-para-lugo-32151.html>

⁷² ABC Color del 14 de diciembre de 2009, disponible en: <http://www.abc.com.py/articulos/la-angustia-de-federico-50238.html>

Interior a Rubén Cándida Amarilla, del opositor Partido Colorado, en reemplazo de Carlos Filizzola. Fue así que los cuatro ministros de la fuerza liberal que integraban el Gabinete presentaron su renuncia: Víctor Ríos, de Educación; Enzo Cardozo, de Agricultura; Francisco Rivas, de Industria y Comercio, y Humberto Blasco, de Justicia y Trabajo, “porque el Partido a partir de ahora deslinda cualquier responsabilidad política con respecto al Gobierno del presidente Lugo”, había anunciado el mandatario del PLRA, Blas Llano, en conferencia de prensa el 21 de junio.

Por eso no sorprendió a nadie que de los setenta y siete presentes en el Congreso, setenta y seis levantaron sus manos al unísono, haciendo temblar la silla presidencial y fijando el día y la hora clave del juicio político: viernes 22 de junio, a las cuatro y media de la tarde, momento en que se dictaría la sentencia. Solo una diputada izquierdista, Aida Robles, votó a favor del presidente en la Cámara baja y tres senadores pidieron una moción para otorgar tres días para preparar su defensa, moción que no fue conseguida.

Mientras los diputados firmaban el acta de ruptura del orden democrático, votando a favor del enjuiciamiento, Fernando Lugo desmentía su posible abandono como jefe de Estado y expresaba ante toda la Nación: “Este presidente no va a presentar renuncia al cargo y se somete con absoluta obediencia a la constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias”. En la calle no había tanquetas ni militares, aunque las Fuerzas Armadas pueden actuar accionando o no accionando, como explica la periodista Stella Calloni para destituir a un presidente “ya no resulta imprescindible sacar a las Fuerzas Armadas a la calle: se van minando lentamente las bases de un gobierno popular cuando se han logrado controlar la mayoría de los medios de comunicación”⁷³.

Eran las nueve de la noche cuando el tribunal anunció su veredicto: el ex obispo tenía tan solo quince horas para preparar su defensa. De esta manera, en un proceso de enjuiciamiento que afectaba al presidente de la República, se le otorgaba un margen completamente escueto, violando el inciso 7 de artículo 17 de la Constitución Nacional paraguaya, que expresa que el acusado “debe disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación”, algo que no ocurrió con Fernando Lugo. Pero no había tiempo para reproches; minutos después se recluyó en el Palacio de López, a donde entraría por última vez. Los miembros de su Gabinete Militar lo escoltaban, mientras la noche avanzaba y con ella disminuían las posibilidades de salir airoso de un proceso que de antemano tenía dictada su sentencia.

El juicio

El final estaba escrito, no había defensa alguna que pudiera hacer conservar a Lugo su cargo de presidente. Mucho antes del mediodía, cuando ni siquiera había amanecido y la helada nocturna cubría las puertas del Congreso, ya circulaba por los

⁷³ Stella Calloni, *Los Golpes Blandos*, nota publicada el 10 de agosto de 2008 en el blog La máquina de escribir.

pasillos el Orden del día, donde se expresaba que “una vez confirmados los votos requeridos, se procederá a declarar al acusado culpable, apartándolo de pleno derecho de su cargo”⁷⁴. El desenlace estaba claro, aunque todavía no habían llegado los senadores, ni fiscales, ni abogados defensores. Las luces en la Cámara estaban apagadas y las sillas vacías, faltaban más de siete horas para que se inicie el juicio, donde los argumentos de la defensa encontrarían poco asidero. Ya todo estaba resuelto: Lugo dejaría el Palacio de los López, se sacaría la banda y los zapatos presidenciales, trece meses antes de concluir su mandato.

No fueron necesarias las pruebas ni las garantías constitucionales para la defensa, ya que bajo el argumento de que un juicio político es político y es diferente a cualquier juicio, se justificó el accionar del tribunal. Ya en diciembre de 2009, entrevistado por Radio Nacional Argentina, Alfredo Jaeggli sostenía la `diferencia´ entre un juicio político y el juicio jurídico: “En el jurídico uno tiene que ser un delincuente, un homicida, se tiene que pillar que mató a alguien; un juicio político, son treinta senadores y cuarenta y tres diputados que dicen que esto ya no anda más, que no funciona, ¡así de fácil es!”⁷⁵, quizás por esto cinco horas fueron más que suficiente para dar por finalizado el mandato del ex Obispo.

En el Libelo Acusatorio tampoco había pruebas que comprobaran la culpabilidad de Lugo, en este documento se expresaba que “todas las causales son de pública notoriedad, por lo cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente”. Pero sí había una catarata de acusaciones, donde la Masacre de Curuguaty se llevaba el lugar estrella: “Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores”, expresaba el Libelo Acusatorio. A esto se le sumaba un acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, el Caso Ñacunday, la inseguridad en el país, las supuestas vinculaciones de Lugo con el EPP y la firma del Protocolo Ushuaia II.

Treintainueve manos en alto contra cuatro que permanecieron en lo bajo sellaron el destino del Paraguay y le dieron la bienvenida a Federico Franco. Lugo, desde la casa de gobierno, miraba la votación por televisión, preguntándose quizás si las cosas podrían haber resultado distintas para él. Mientras, las fuerzas de seguridad iban acercándose al palacio de gobierno, caminando perfectamente en fila, con la cabeza en alto, es que era esperable que los partidarios de Fernando Lugo salgan a manifestarse, por lo que había que reprimir rápidamente el foco.

Al despedirse, Lugo decía: “Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido, es su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa de manera cobarde”. Al terminar su discurso, fue por última vez a Mburuvicha Róga, recogió algunas de sus pertenencias y partió rumbo a su vivienda en Lambaré, en el Barrio de Santo Domingo, ubicada a diez kilómetros de

⁷⁴ Agencia Pública, 22 de junio de 2012, disponible en: <http://apublica.org/wp-content/uploads/2012/11/Orden-do-Dia.pdf>

⁷⁵ Entrevista al senador del Partido Liberal, Alfredo Luis Jaeggli sobre el juicio político que podría enfrentar el presidente Fernando Lugo en el programa “Carbono 14”, Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, 17 de diciembre 2009. La entrevista fue realizada por los periodistas Pedro Brieger, Eduardo Anguita y Miriam Lewin.

Asunción. Allí no estaba la guardia militar para recibirlo, sino sus vecinos, quienes lo esperaban con aplausos, congregados en la calle Durazno. La casa de paredes de piedra volvía a ser su domicilio, un viejo televisor y un sillón de cuero azul serían los compañeros de Fernando Lugo hasta que las aguas se calmen.

En Asunción, la plaza quedaba vacía y Federico Franco celebraba el triunfo, el que no había logrado alcanzar por los comicios, pero sí a través de un Congreso Colorado y Liberal. “Yo creo que Franco va a ser mucho más firme en lo que hace a respetar la propiedad privada”⁷⁶, afirmaba el presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, Luis Fretes. Con Fernando Lugo “los carperos estaban en el Palacio”, expresaba con preocupación el portavoz de los llamados “brasiguayos”, Aurio Fighetto⁷⁷. Paraguay cerraba sus puertas a las conquistas sociales, era el festejo de los grandes sectores empresarios.

⁷⁶ La Nación, 26 de junio de 2012, disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1485248-los-tres-pilares-de-franco>

⁷⁷ ABC Color, 26 de junio de 2012, disponible en: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/brasiguayos-se-reunen--hoy-con-dilma-rousseff-en-brasil-418763.html>. Se denomina “brasiguayos” a los brasileños y sus descendientes, que ocupan gran parte de las tierras más fértiles del país.

Poncho Jurúicha

La soja tiene rodeado a San Pedro, una localidad pequeña ubicada a 410 kilómetros de Asunción, donde el español, el guaraní y el portugués desdibujan las fronteras. Los enormes silos de Syngenta, Cargil y Monsanto están a lo largo de todo el camino; el monocultivo se expande a pasos agigantados, devorando todo lo que encuentra, produciendo no solo una devastación ecológica, sino también humana. Pareciera que las comunidades enteras de campesinos están a punto de ser tragadas por el latifundio.

Además de la soja, lo único que abunda en San Pedro es la pobreza. La concentración de las tierras en pocas manos, algo que parece ser el discurso de bienvenida a cualquier extranjero cuando pisa las tierras guaraníes: “El 2% de la población tienen el 90% de la tierra”, repiten los nativos. La tecnificación de los procesos productivos ha hecho que la mano de obra campesina pierda su valor. La migración hacia Asunción aparece como la única posibilidad, y así son arrancados de sus tierras para ir a colapsar los bañados que rodean la ciudad: unas cuantas construcciones precarias de chapa y bolsas, esas que alguna vez guardaron semillas y fertilizantes, que con una garúa quedan bajo el agua.

San Pedro tiene unos cuantos asentamientos campesinos, los que se han ganado y mantenido a base de la lucha, con el saldo de una o más muertes de sus compañeros en manos de sicarios brasiguayos o de la misma policía paraguaya. El enfrentamiento entre los mercaderes de la tierra y los campesinos es casi una constante en estas tierras, donde las plantaciones valen más que la vida y los desalojos violentos de las comunidades son moneda corriente. La agricultura empresarial fricciona a la familiar y el modelo sojero no deja margen a la convivencia armónica.

En ese panorama bastante desolador arribó Fernando Lugo, un 17 de abril de 1994. Con un escueto equipaje sobre su hombro se dirigió a la diócesis de la localidad, una capilla de estilo barroco construida por los franciscanos en el siglo XVII. Las sandalias hacían que sus dedos se le llenaran de tierra al caminar por las calles, las cuales recorrería durante once años y lo catapultarían a su carrera política. Allí, Lugo se convertiría en el “abanderado de los pobres”⁷⁸.

Ese mismo año, en todo Paraguay hubo 112 tomas de tierra por parte de los campesinos, de las cuales 52 ocurrieron en San Pedro, convirtiéndose así en el epicentro de los conflictos agrarios. En el medio del caos, la figura de Fernando Lugo emergía como mediadora, gestando lentamente un gran apoyo de los sectores campesinos, que veían en el obispo un referente y un vehiculizador de sus históricos reclamos. Él mismo se apodará Poncho Jurúicha, que en guaraní quiere decir boca del poncho, es decir, ni a la izquierda ni a la derecha, sino en el centro.

⁷⁸ Nombre dado por los medios de comunicación.

Ikueráima Paraguay: la catapulta política

Eran casi las nueve y media de la noche, cuando Monseñor Fernando Lugo subió al escenario para enunciar el discurso que pondría fin a una marcha que había convocado más de 40 mil personas. “Nos reunimos aquí por dos motivos: primero, para pedir la renuncia a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por haber habilitado al presidente Duarte a participar en los comicios de su partido; y segundo, para denunciar la intención del jefe de Estado de inaugurar una nueva dictadura al asumir la presidencia del coloradismo”, expresó Lugo ante una multitud. No llevaba puesta su sotana, sino un jean viejo, una campera deportiva, que cubría el chaleco antibalas, y una bandera paraguaya sobre su cuello.

Los principales partidos opositores y asociaciones civiles estuvieron presentes esa noche, pero el gran protagonista fue Lugo, quien finalizó su discurso con los aplausos de los presentes, levantando un abrazo y posando sonriente para las cámaras. Era un 29 de marzo de 2006, y en Paraguay se había desarrollado la mayor movilización desde la transición democrática. Quienes estaban allí reunidos exigían la renuncia de cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estos habían posibilitado con una medida cautelar, que el presidente Nicanor Duarte Frutos asumiera también la presidencia del Partido Colorado, pese a que la Constitución Nacional prohíbe al jefe de Estado ocupar cualquier otro cargo⁷⁹.

Un cartel con la leyenda de mentiroso, aludiendo a Nicanor, encabezó la marcha de una columna que portaba una enorme bandera paraguaya. Su gobierno, entre 2003 y 2008 se había caracterizado por tener un fuerte discurso progresista, pero con escasos cambios sociales. El ingreso de tropas norteamericanas al país, sin explicar en profundidad los motivos de dicha presencia; las exhortaciones realizadas ante los cuadros policiales y militares a que arrasasen con todos los subversivos de izquierda que formaban parte del Partido Patria Libre; y unos cuantos escándalos de corrupción en su gabinete de ministros⁸⁰, operaron durante su mandato, que buscó extender por un nuevo período intentando reformar la Constitución. La reforma no llegó a buen puerto y alteró, aún más, el clima que se vivía en las calles paraguayas, donde los ciudadanos comenzaban a manifestarse cansados de 61 años de hegemonía colorada.

De tendencia conservadora, agrarista y nacionalista, la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC) fue fundada en 1887 por veteranos de la Guerra de la Triple Alianza. Desde la segunda mitad del siglo XX gobernó ininterrumpidamente, hasta que en 2008 la Alianza Patriótica para el Cambio los desbancó del poder. Ávidos en el terreno político, supieron zigzaguear entre diferentes terrenos ideológicos. Así apoyaron durante 35 años a un dictador con máscara

⁷⁹ Artículo 237.- DE LAS INCOMPATIBILIDADES. El Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.

⁸⁰ A dos meses de asumir el gobierno, en octubre de 2003, el ministro del Interior, Roberto González, el director de Aduanas, Gustavo Volpe, y el comandante de la Policía de la Capital, Tomás Chamorro estuvieron envueltos en un escándalo por liberar un cargamento presuntamente de contrabando de un millón 373 mil 400 unidades de discos compactos pertenecientes a un ciudadano paraguayo prófugo de la justicia. Los tres fueron removidos de sus cargos por Nicanor Duarte Frutos.

democrática, como lo fue Alfredo Stroessner, quien mantuvo el Congreso, reformó la Constitución y convocó a elecciones, siempre controladas, que ganó sucesivamente. También tuvieron su representante neoliberal con Juan Carlos Wasmoey en los 90', quien terminó su gobierno con graves denuncias de corrupción. Duarte Frutos fue quien buscó unificar el poder ejerciendo la presidencia del país y del partido, quizás esto haya sido lo que aceleró aún más el ascenso de Fernando Lugo.

Aquella noche, la multitud lentamente se fue dispersando; no así el liderazgo político del obispo, quien se catapultó como el referente de los sectores que buscaban un cambio más profundo para Paraguay. Pocos meses después, miembros del movimiento Tekojoja⁸¹ le entregaron un documento refrendado por 100.000 personas, para que presentara su candidatura a la Presidencia. Lugo se acercaba cada vez más a la arena política. La noche del 17 de diciembre, el obispo no pudo dormir: caminaba de un lado a otro, nervioso, preguntándose qué debía hacer. Recurrió a Ricardo Kelly, un sacerdote irlandés que había sido su guía espiritual y la persona que lo había recibido en el seminario de la Sociedad del Verbo Divino, cuando tenía tan sólo 19 años. Luego de esa charla, Lugo tomó su decisión: ingresaría a la vida política con miras a las elecciones presidenciales de 2008.

En el día de navidad, Lugo viajó a Encarnación, ubicada a 370 kilómetros de la capital del país, para celebrar en su casa de la infancia el nacimiento del niño Jesús. Allí, sacó una mesa a la vereda, la cubrió con la bandera paraguaya y le comunicó al país su decisión: "Me han pedido invariablemente que me ponga a la cabeza de un proyecto y hoy, 25 de diciembre, oficialmente tomo la determinación de ponerme al servicio del pueblo paraguayo a través de la política". Su candidatura era un hecho.

Su propuesta electoral buscaba saldar cuatro grandes ejes: una "reforma agraria integral", que incluiría la expropiación de tierras improductivas para destinarlas a familias campesinas; la "recuperación de la soberanía energética", haciendo hincapié en que, gracias a las centrales de Itaipú y Yacyretá, Paraguay es uno de los mayores productores mundial per cápita, pero solo destina mínima parte al autoconsumo debido a la poca población y el limitado desarrollo industrial; el "acceso universal a la salud, la educación y la justicia"; y el "destierro de la corrupción y la impunidad para siempre".

Lugo no era ningún improvisado, sabía que previo a eso tenía que colgar los hábitos, ya que la Constitución paraguaya, en su artículo 235⁸² impide que un religioso sea presidente del país, por lo que su pedido de renuncia al Nuncio Apostólico ya había sido enviado. El poder ejecutivo y el Partido Colorado pusieron el grito en el cielo y denunciaron la incursión en la política del obispo; lo mismo hizo la Conferencia Episcopal, quien no solo le dio la espalda sino que también criticó duramente su candidatura. La campaña electoral ya estaba en marcha. Tenía que ser cauteloso en su discurso, algo de progresismo para quienes buscaban un cambio, pero sin vincularse con la ola de populismo latinoamericano, lo que podía desatar el pánico entre la élite paraguaya.

⁸¹ Igualdad en guaraní.

⁸² Son inhábiles para ser candidatos a Presidente de la República o Vicepresidente los ministros de cualquier religión o culto. Constitución de 1992, en su artículo 235, punto 5.

El país, la nueva catedral

–Ciudadano Fernando Lugo Méndez, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República, observar y hacer observar la Constitución y las leyes? – preguntó el presidente del Congreso, el senador Enrique González Quintana, ante una multitud en los alrededores del Congreso de la Nación.

–Sí, juro –gritó Fernando Lugo, con el mentón en alto, mientras levantaba su brazo derecho.

– Si así no lo hicieres, Dios, la patria y el pueblo paraguayo os lo demandará.

Los presentes estallaron en aplausos. Fernando Lugo sujetaba el bastón de mando y se ponía la banda presidencial, que especialmente le habían confeccionado unas monjas de claustro de la localidad ecuatoriana de Guaranda, donde había sido misionero entre 1977 y 1978. No era el primer caso de un cura latinoamericano que se quitaba la sotana para gobernar un país, el sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide se convirtió en 1991 en el primer presidente de Haití elegido democráticamente. Así, Fernando Lugo seguía sus pasos y se convertía en el segundo jefe de Estado surgido del universo religioso. En las afueras del Congreso, las Fuerzas Armadas disparaban 21 cañonazos en forma de festejo: era el 15 de agosto de 2008 y seis décadas consecutivas de gobiernos colorados quedaban atrás.

La expectativa era el clima reinante, en una población que esperaba ansiosa los cambios. La noche anterior a la asunción, Fernando Lugo se había dirigido al pueblo: “Hoy termina un Paraguay exclusivo, un Paraguay secretista, un Paraguay con fama de corrupción, hoy se inicia la historia de un Paraguay cuyas autoridades y pobladores serán implacables con los ladrones de su pueblo, con acciones que nublen la transparencia y con aquellos pocos dueños feudales de un raro país del ayer enclavado en el presente”. Parecía que comenzaban a soplar aires de cambio y se torcía el rumbo paraguayo, marcado por la exclusión y la pobreza para la mayoría y los privilegios para una minoría.

El proyecto de Lugo era amplio e incluía a sectores que a lo largo de la historia habían sido relegados. Como un guiño de confianza hacia al gobierno, la Organización Nacional Campesina de Paraguay le prometió que en los primeros 100 días no realizarían tomas de tierras, hasta que el gobierno enviara una clara señal de cuál sería la política en materia agraria. A juzgar por su discurso, el mensaje era bastante esperanzador, pero su gobierno no lograría expropiar ni una hectárea para los campesinos, sino sólo incrementar levemente los impuestos a los productores sojeros.

Los representantes más conservadores de la Alianza Patriótica para el Cambio coparon los principales ministerios, como fue el caso de la cartera de Hacienda, donde Dionisio Borda, un neoliberal ex ministro del presidente saliente Nicanor Duarte Frutos, se puso al mando. Las políticas del FMI y el Banco Mundial estuvieron a la orden del día en este ministerio. Luego, la sanción de la ley antiterrorista⁸³ en junio de 2010, complicó aún más al gobierno, ya que sectores de izquierda que eran cercanos a Lugo pusieron el grito en el cielo ante esta norma. Para equilibrar la balanza, el ex

⁸³ Ley 4024/10 “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”.

obispo entregó los ministerios sociales a representantes del progresismo, como fue el caso del Ministerio de Salud a cargo de Esperanza Martínez.

Los campesinos comenzaban a desencantarse de Fernando Lugo. Un Congreso hostil y contrario a la expropiación de las tierras en manos de los latifundistas impidió la realización de más de un proyecto, como fue el propuesto por el primer titular del Indert⁸⁴, Alberto Alderete, sobre las mensuras administrativas. Básicamente, consistía en procedimientos indagatorios que certificaban si los propietarios tenían una superficie mayor a la que acreditaban sus títulos. Esto fracasó de inmediato. Además de que no logró concretarse, Alderete terminaría apartado de sus funciones en 2010, en medio de denuncias por el intento de compra presuntamente sobrefacturada de las tierras de Ulises Teixeira, las que serían destinadas para la creación de una colonia modelo de producción agrícola para 2 mil familias campesinas. Las tierras nunca se compraron y la comunidad jamás se creó.

El medio de Aldo Zucolillo, junto con integrantes del Partido Colorado, Patria Querida y el ala del Partido Liberal que respondía al vicepresidente Federico Franco, no se conformaron con apartar a Alderete sino que buscaron que el presidente del país sea juzgado en un juicio político. El principal exponente volvería a ser Alfredo Jaeggli, con una campaña sostenida por el ABC Color, donde el tema fue tapa entre octubre y diciembre de ese año. Lugo llevaba ya dos años en su gobierno y no había habido atisbo de la reforma agraria; hay alfiles que son difíciles de derrocar y nada más que intentarlo, tendría sus serias consecuencias. Lugo no quiso o no lo dejaron, pero resulta imposible recuperar las tierras malhabidas sin tocar los intereses de los sectores dominantes.

“¡Ni un metro cuadrado de tierra pública, se recuperó! ¡Ni uno solo! Y tampoco se llegó a comprar tierras para campesinos e indígenas. Y el caso más cruel fue el caso acá de los indígenas, que fueron llevados a garrotazos, que quedaban unos seis meses esperando que se las entreguen, nomás, un pedazo de tierra. Y cada vez que se iba a comprar, salía Zucolillo con ABC a atacar: que hay corrupción, corrupción, corrupción, que hay negociados. Se dejaba eso ahí, y nunca se pudo comprar un pedazo de tierra a los campesinos”, expresó José Rodríguez, miembro de la Liga Nacional de Carperos, un movimiento campesino que creado en 2010 en torno al conflicto por las tierras de Teixeira.

“Lugo no tuvo energía para hacer la reforma agraria. No tuvo energía. No se la jugó en eso, y en otras cosas similares lo mismo. Entonces, lo bueno que tuvo Lugo, por ejemplo, es que la ministra de Salud se le ocurrió hacer la salud preventiva; se hizo. Después, a imitación de Brasil, lo de Tekoporá, que era hambre cero, se hizo. Los adultos mayores, no sé quién le dio la idea, permitió eso. O sea, él permitía, pero le faltaba coraje para abanderar una cosa fuerte”, explicó pausadamente el Pai Oliva, un sacerdote jesuita activista en el Bañado sur de Asunción, una de las zonas más pobres de la ciudad, referente también de la política paraguaya.

Lo diferente a los gobiernos anteriores era que con Lugo era común ver a los campesinos en el Palacio de los López; por primera vez este sector tenía voz y llevaban sus reclamos al presidente; se habían transformado en un actor político, en un lugar negado históricamente a este sector. Lo cierto es que sí llegaron algunas reformas,

⁸⁴ Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

como el desarrollo de la Atención Primaria de la Salud, estrategia liderada por la ministra Esperanza Martínez a través de los Equipos de Salud de la Familia (ESF) que permitieron garantizar un acceso más igualitario. Como así también la creación de escuelas en las comunidades y la expansión de un subsidio económico que se había iniciado durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que de 13 mil beneficiarios pasaron a 100 mil. “Lugo logra un vínculo muy fuerte con los campesinos durante su gobierno, por los servicios que lleva, no por las conquistas estructurales del mundo campesino”, argumentó el periodista Julio Benegas.

La actitud de Poncho Jurúicha que llevó adelante Fernando Lugo durante su gobierno, buscando conciliar los intereses campesinos y terratenientes, irreconciliables por cierto, logró algunos cambios sociales en el sector, pero no resolvió el histórico conflicto del Paraguay: la distribución de la tierra, mediante la gestión de la tan ansiada reforma agraria y la reapropiación de las tierras malhabidas. “Lo que hizo el gobierno fue facilitarle todos los trámites, lo que hizo que se desmovilizara el movimiento campesino”, argumento Benegas. El día de la Masacre de Curuguaty encontraría a las bases mucho más desarticuladas que al inicio de su gobierno. La principal pata que lo había catapultado a la presidencia tambaleaba ante el poder terrateniente, que no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro de tierra.

El padre

“Asumo todas las responsabilidades que pudieran derivar de tal hecho”, dijo en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno. De esta manera, a inicios del 2009 reconocía la paternidad de su primer hijo, Guillermo Armindo de dos años, quien nació el 4 de mayo de 2007, cinco meses después de que Lugo renunciara a su condición eclesíastica. Entre la demanda iniciada por la madre del niño, Viviana Rosalith Carrillo Cañete, y el reconocimiento de la paternidad pasaron cinco días. Lugo confirmaba el romance que había mantenido con la mujer cuando esta tenía 23 años. Los medios de comunicación estallaron ante la noticia. Se acercaba el primer aniversario de su presidencia, y no solo enfrentaba el escándalo de la paternidad, sino también un cáncer linfático.

En menos de 24 horas el diputado ovidista José López Cháves instaló la posibilidad de llevar a juicio político a Fernando Lugo por la denuncia de paternidad presentada por Carrillo. “Ha roto su compromiso eclesial por una parte, y por otra parte, con el pueblo paraguayo (...) y aquí se le va a demandar. Inclusive esto puede ser el inicio de un juicio político, porque aquí necesitamos gente con moralidad”⁸⁵, expresaba el seguidor de Lino Oviedo en una sesión extraordinaria llevada a cabo en el Congreso. Por su parte, el diputado colorado Víctor Bogado denunció que haya mantenido una relación cuando la joven tenía 16 años: “No somos nosotros los que escondemos amantes ni quienes llevamos a alumnos de colegio a sus lechos para

⁸⁵ Publicado en Perfil.com el 15 de abril de 2009, bajo el título: Problemas para Lugo: la oposición paraguaya acusa al presidente de "llevarse a la cama alumnos de colegio".

luego privar de la identidad a sus hijos”⁸⁶. No obstante, esta vez el juicio político no logró el quórum necesario.

No habían pasado ni diez días del reclamo de Carrillo, cuando Benigna Leguizamón, de 27 años, demandó al presidente por la paternidad de Lucas Fernando Leguizamón, de seis años. Lugo había conocido a Benigna cuando era obispo de la diócesis de San Pedro, en donde la joven de diecisiete años realizaba tareas de limpieza. La noticia se dio a conocer el día que Lugo cumplía un año en el cargo. El diario Última Hora la convirtió en su nota de tapa bajo el título: “Otra mujer afirma que Lugo es papá de su hijo”. La foto de Benigna ensombrecida con la partida de nacimiento en la mano, completaban la portada.

El efecto dominó continuó su curso y la denuncia número tres llegó de la mano de Damiana Hortensia Morán, de 42 años, quien había conocido a Lugo durante la campaña electoral previa a los comicios presidenciales del 20 de abril de 2008; tres exámenes de ADN ordenados por una jueza de menores, en agosto de 2011, dieron negativo. En una entrevista con The Associated Press, había relatado: “Mantuvimos una relación amorosa con Lugo en 2005 cuando yo era una trabajadora de la organización de laicos del obispado de ciudad San Lorenzo”.

La última en reclamarle al presidente fue Narcisa Delacruz de Zárate, de 42 años, quien bautizó al niño que tuvo con Lugo con el nombre de Ángel. Según Narcisa, Lugo conocía al niño desde que este tenía diez meses y mensualmente le pasaba dinero para su manutención, a través de su secretario privado, Miguel Rojas. La mujer y el presidente se habían conocido también en San Pedro, cuando esta se había separado de su marido y había quedado a cargo de sus cuatro hijos. El reconocimiento de éste se convertiría en el segundo, y llegaría mucho tiempo después.

Las sospechas de que el núcleo político y eclesiástico sabía de la existencia de los hijos de Lugo y que lo utilizaron estratégicamente cuando lo creyeron necesario, es una teoría que sostiene el Pai Oliva: “Cuando Lugo era obispo de San Pedro, de pronto lo quitan. Era obispo de San Pedro en un momento que estaba metiéndose con el campesinado un poquito más. Pero, de pronto lo quitan. Yo tuve la sospecha que tuvo ahí un chantaje del gobierno. El gobierno de Nicanor lo sabía, entonces amenazó a la Iglesia de que iba a publicar todo eso. Entonces, la Iglesia lo saca de obispo y con la excusa de que se estaba muriendo su mamá lo envía a su casa a cuidarla. Se murió la mamá, es verdad, estaba enferma; pero, ¿qué mejor cuidada que la mamá del obispo? Todas las viejecitas cuidando a la mamá del obispo, no. Ahora, después de eso se corrió más todavía. Pero después se hizo profeso para fastidiarlo”⁸⁷, afirmó.

Las sucesivas denuncias de paternidad, sumadas al tratamiento que le otorgaron los medios de comunicación y el oportunismo político que vieron los representantes de la oposición ante esta situación, fueron minando la popularidad del presidente ante la sociedad paraguaya que atónita observaba como el ex obispo iba reconociendo sus hijos. La idea de llevarse a cabo un juicio político estaba esperando cualquier excusa para ponerse en marcha. Sus compatriotas latinoamericanos Evo Morales y Hugo Chávez, también habían sufrido intentos de desestabilización en 2008 y 2002, respectivamente, pero el movimiento indígena en el primero y las barriadas de

⁸⁶ Ibídem.

⁸⁷ Entrevista al Pai Oliva.

Caracas en el segundo, donde los líderes tenían un gran apoyo popular, se movilizaron rápidamente. Lugo no contaría con la misma suerte, el movimiento campesino paulatinamente venía desencantándose del presidente que proponía cambios estructurales que no llegaban.

Injerencia externa

En 1938 un pequeño avión de la misión militar de Estados Unidos sobrevolaba el Chaco cuando divisó brillantes círculos blancos en el suelo, narra el historiador Julio José Chiavenato⁸⁸. El avión descendió para visualizar qué era eso, pero el reflejo del sol aún les impedía a los pilotos reconocerlo. Al aterrizar, el teatro de operaciones de la guerra del Chaco (1932-1935) mostraba una porción de sus consecuencias: diez mil calaveras de soldados bolivianos yacían esparcidas por todas partes.

La Standard Oil of New Jersey (luego, Exxon) había impulsado a Bolivia a obtener aquello que había perdido en la guerra con Chile, su salida al mar, con el fin de exportar los bienes expoliados, y para conquistar el territorio del Chaco donde subterráneamente correría el oro negro. Mas, en frente se encontraría con los intereses de la Royal Dutch Shell representados en Paraguay por la oligarquía extranjerizante argentina; la cual, desde la década del 20` venía ejerciendo una dependencia tácita del país vecino mediante la compra de tierras, el control del transporte fluvial, el ferrocarril y la reventa de productos traídos de Europa y de Estados Unidos. “En Bolivia, donde domina el capital norteamericano, la Standard Oil necesitaba de una salida en el río Paraguay para sus pozos de petróleo en el oriente de aquel país. Detrás del Paraguay, la compañía inglesa Royal Dutch trató de evitarlo. Esta fue la causa del conflicto que ha enfrentado al continente”⁸⁹, afirmaría Liborio Justo, hijo del entonces presidente argentino de la mentada década infame, Agustín P. Justo, quien participó de los tratados de paz una vez finalizada la contienda.

En el Chaco boreal, una región desértica de 250 mil kilómetros cuadrados ubicada en el corazón de América del Sur, fallecieron 50 mil repetes (nombre con el que los oficiales bolivianos designaban a los soldados, en su mayoría indios que pedían repetir su pobre pero para ellos, regia ración de comida) acorralados por la sed, la insolación, las enfermedades y la ineptitud de una comandancia delirante. Del lado vencedor, 40 mil pata pelada o pilas (denominación que con su escaso castellano los repetes le dieron a los soldados paraguayos que carecían de calzado) perdieron la vida capitaneados por un perspicaz coronel, José Félix Estigarribia.

La guerra calaría hondo en la relación de estos países vecinos, emparentados por sus desigualdades y pobreza. Mientras que Bolivia quedaría en peor situación que después de la guerra del Pacífico —aunque la contienda incidiría en los procesos revolucionarios de mediados del siglo XX que transformarían su régimen feudal—, Paraguay se haría dueño de 246 mil kilómetros cuadrados, ocupando territorios que desde el siglo XIX tenían jurisdicción boliviana. Asimismo, el triunfo nada cambiaría de las inequidades de la sociedad paraguaya; por el contrario, la oligarquía latifundista mantendría el status quo por medio de un nacionalismo funcional, enarbolado por militares y políticos que se disputarían el poder en una sucesión de golpes militares. Situación que culminaría con el ascenso del Partido Colorado y la tiranía de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Si uno se pierde en la conversación por unos minutos en cualquier puesto de comidas de Asunción, la memoria histórica de esta guerra fratricida brota fácilmente. Con conciencia de esto, los sectores pro norteamericanos paraguayos varias veces reflotarán un discurso belicista contra la hermana Bolivia, en función de justificar la

⁸⁸ Julio José Chiavenato, *La guerra del petróleo*, Ed. Punto de Encuentro, Buenos Aires, 2007, p. 168.

⁸⁹ *Ibidem*, p.111.

instalación de una base militar de Estados Unidos en el país. Contra esos sectores luchó el ministro de Defensa del gobierno del Frente Guasu, Luis Bareiro Spaini. Y perdió.

Ministro de Defensa en la mira

“¡Díganos, general!, ¿qué medidas están tomando ustedes en Defensa?”, le interrogaron en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados al entonces ministro de Lugo. Alto, de espalada ancha conforme a un militar de carrera, y con una nariz aguileña que se extiende en la línea recta de su mirada, Luis Bareiro Spaini explicó con su habitual gesto adusto y cortante, que desde un comienzo planificaron un proyecto de reestructuración y reorganización de las Fuerzas Armadas, un proyecto de Ley de Defensa y otro para la creación de un servicio de inteligencia. Pero, para hacer efectivos tales planes y realizar la modernización de las Fuerzas Armadas, era el Congreso quien debía apoyar la asignación del presupuesto necesario. ¿Estarían los congresistas dispuestos?

“¡De ninguna manera! ¡Ni un solo centavo, para ni un solo fusil!”, dijo uno. Porque el presupuesto debe ir a educación, a salud. Y, ¿entonces? El experimentado general había esperado esa respuesta, coherente con las prioridades del país. Pero lo que no había imaginado era lo que se vendría: “Y no hay nada que hacer, entonces tenemos que aliarnos”. ¿Cómo?, ¿aliarnos con quién? “Pues, con los americanos”. Y, ¿para qué? “Y para que instalen sus bases militares en el Chaco, para que nos defiendan de los bolivianos”.

Las asiduas interpelaciones que sufrió Bareiro Spaini en sus dos años como ministro de Defensa (2008-2010) no tuvieron mayor asidero. Su perspectiva integracionista, de explícita defensa de los organismos regionales como la Unasur, incluida la formación del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD), confrontó con los sectores oviedistas, liberales y colorados enquistados en el Congreso paraguayo, quienes desde el inicio de su gestión buscaron llevarlo a un juicio político.

El primer revés de grandes implicancias ocurrió en mayo de 2009 cuando el P-MÁS, Tekojoja, el Partido Convergencia Popular Socialista y el Partido Comunista (partidos integrantes del Frente Guasu), llevaron a cabo el “Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio” en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, en Asunción. Alrededor de dos mil jóvenes de Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay se reunieron con el objetivo de debatir los procesos de cambio en la región. Lo cual, para el senador colorado Hugo Estigarribia era “causal de juicio político para el Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Fernando Lugo”⁹⁰. La prensa, con el diario ABC Color a la cabeza, se escandalizaría frente a una bandera del Che Guevara ondeada en el encuentro, e iniciaría una campaña condenando “el uso del comando de ingeniería para actos

⁹⁰ Dichos publicados por la prensa y recogidos por Fátima Rodríguez González en *Paraguay 2012: crónica de un juicio político anunciado*, Ape Paraguay, octubre de 2012.

políticos”⁹¹. El 12 de mayo, el diputado colorado de Alto Paraná Juan Bernardo Ziett Correa realizó la presentación oficial de pedido de juicio político al presidente de la República por mal desempeño de sus funciones. Tenía los 30 votos colorados, 15 del partido UNACE y sólo le faltarían los del PLRA, aún asociados a Lugo, para alcanzar la mayoría de dos tercios. “Es cuestión de conversar y si los liberales se ponen la camiseta patriota”⁹², dejó correr en el aire de la AM 970.

En esta ocasión los votos no alcanzaron porque Lugo hizo rodar la cabeza de tres comandantes. Sin embargo, la fotografía de jóvenes de izquierda reunidos en un comando de las Fuerzas Armadas tendría un peso simbólico de peores consecuencias. La memoria irresoluta de las épocas más oscuras de Paraguay durante la dictadura stronista, se cierra en la máxima de que ser comunista o de izquierda significaba la pena de muerte. Y la ligazón de ambos elementos en un supuesto acto inconstitucional como enaltecía el discurso del ABC Color a partir de “la presencia de militares activos en actos políticos partidarios”⁹³, hizo del encuentro de jóvenes un argumento reiterado en todos los intentos de juicio político posteriores, incluido el definitivo.

El ministro Bareiro Spaini pudo desentenderse también, en parte porque cuando el escándalo salió en la prensa, se encontraba en una gira por Europa con el Comandante de Fuerzas Militares. Habían ido para asistir a una exposición de armamento con el objetivo implícito de mostrarse activos frente al imaginario peligro inminente de la invasión boliviana, y aplacar así las presiones del Congreso.

Ya en septiembre de 2006 el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Estados Unidos de querer buscar una confrontación de su país con Paraguay, en función de evitar el fortalecimiento militar boliviano con ayuda de Venezuela. “Ahora no habrá eso. Quisieran confrontarnos, quisieran llevarnos a una guerra, (pero) no habrá eso”⁹⁴, afirmó.

Tiempo atrás, el 26 de mayo de 2005 el Congreso de Paraguay había aprobado una ley que les concedía inmunidad a las tropas de EE.UU.⁹⁵ por dieciocho meses, prorrogables. Ésta permitía la “entrada en tandas de cuatrocientos soldados estadounidenses para trece operativos de entrenamiento y adoctrinamiento en temas de seguridad y defensa, junto a tareas de asistencia médica y social a los más pobres”⁹⁶. El acuerdo se selló con la visita a Asunción del jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, en agosto de ese año, y después, con la primera reunión entre un presidente de la Casa Blanca y uno del Palacio de López: George Bush y Nicanor Duarte Frutos.

Tras el convenio y posterior arribo de las tropas estadounidenses, los rumores sobre la instalación de una base militar en Paraguay saltaron a la prensa. La pista de aterrizaje Mariscal Estigarribia, ubicada en una zona poco poblada en el departamento de Boquerón, en el Chaco Boreal, a 250 Km de la frontera con Bolivia y a 500 Km de

⁹¹ Ibídem.

⁹² Ibídem.

⁹³ Ibídem.

⁹⁴ Diario Nación de Costa Rica del 11 de septiembre de 2006, disponible en www.nacion.com/ln_ee/2006/septiembre/11/ultima-la6.html.

⁹⁵ Diario Clarín del 11 de septiembre de 2005, disponible en edant.clarin.com/suplementos/zona/2005/09/11/z-03615.htm.

⁹⁶ Ibídem.

Asunción, sería el sitio perfecto. Con 3.600 metros de longitud, poseía las condiciones para el descenso de aviones de gran envergadura como los C-5 Galaxy y C-130 Hércules. Los analistas internacionales advirtieron, en consecuencia, que desde allí se podría controlar las reservas gasíferas y petrolíferas de Bolivia –a 100 Km de la frontera, en Tarija, se encuentra el pozo “Independencia I”, una de las mayores reservas mundiales de gas⁹⁷; monitorear la segunda reserva más grande de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní; desplazar rápidamente efectivos a la zona de la triple frontera, la que se buscó asociar por el gobierno de G. Bush como un nicho terrorista que guarecía a la organización Al-Qaeda⁹⁸; y cerrar por el sur el anillo de bases militares de EE.UU. desplegado en América, alrededor principalmente de Cuba, Venezuela y Brasil.

El Plan Colombia se extiende al Paraguay

El 2009 fue un año convulsionado también a nivel regional. En julio trascendió que frente al cierre de la base de Manta, en Ecuador, Washington había pergeñado un acuerdo secreto con Bogotá para la instalación de siete bases militares estadounidenses, con los subterfugios del combate contra las drogas y las FARC. A su vez, salía a la luz un documento presentado por el Pentágono en abril de ese mismo año, en el cual se trazaban las estrategias globales para el Comando de Movilidad Área, que para América del Sur planificaba “usar la base de Palanquero, en Colombia, como plataforma para controlar todo el subcontinente hasta el cabo de Hornos y para operaciones de desplazamiento rápido en eventuales acciones en África”⁹⁹.

También en 2009, tras su intento de trasladar la base militar estadounidense de Soto Cano a la zona de Mosquitia, en la costa hondureña, el presidente de Honduras Manuel Zelaya fue secuestrado en la madrugada del 28 de junio y trasladado desde la residencia oficial a la base de Soto Cano primero y más tarde a Costa Rica¹⁰⁰. Un nuevo golpe de Estado se concretaba en la región, del cual incluso la OEA actuó en consecuencia y suspendió a Honduras de la participación en el organismo¹⁰¹.

Conjuntamente con la reactivación de la IV Flota del Comando Sur luego de 58 años de inactividad, y el despliegue militar norteamericano a través de las bases denominadas Locaciones Cooperativas de Seguridad, se profundizaba la implementación de la estrategia de “mantener la presencia del Pentágono con formas innovadoras”, reflejada en el documento “Manteniendo el liderazgo global de Estados Unidos: prioridades para la Defensa del siglo XXI”¹⁰². Sobre el cual, el Jefe del Pentágono del gobierno de Barack Obama, León Panetta, indicó que “se trataba de

⁹⁷ Nota de la agencia Rodolfo Walsh del 28 de julio de 2005, disponible en www.rodolfowalsh.org/spip.php?article1243.

⁹⁸ Nota publicada en el diario Página/12 del 1 octubre de 2001, disponible en www.pagina12.com.ar/2001/01-10/01-10-24/pag18.htm.

⁹⁹ Telma Luzzani, *Territorios Vigilados*, Ed. Debate, Buenos Aires, 2012, p. 250.

¹⁰⁰ *Ibidem*, p. 153.

¹⁰¹ Comunicado de Prensa de la OEA del 5 de julio de 2009, disponible en www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-219/09.

¹⁰² Op. Cit., Telma Luzzani, 2012.

conservar las relaciones clave entre militares y de desarrollar políticas de bajo costo y reducida presencia para asegurar los objetivos de seguridad de EE.UU., con hincapié en ejercicios militares conjuntos, entre otras actividades”¹⁰³. La periodista argentina Telma Luzzani explica que dicha estrategia conforma la nueva doctrina Obama en materia de seguridad; cuyos justificativos se enmarcan en un proceso de reacción de las políticas externas de EE.UU. hacia la región, frente al cambio de época iniciado con la asunción de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela en 1998.

En Paraguay, el arribo de 500 militares estadounidense programada para el 2010, en el marco del programa denominado “Nuevos Horizontes”, era un tema urticante. Por un lado, las presiones del Congreso hacia el Ejecutivo se centraban en que el programa concebía la promocionada ayuda humanitaria: asistencia médica y odontológica en el interior del país, construcción de puestos de salud y capacitación a militares, según alegaba la Embajada de EE.UU. En ese sentido, el vicepresidente Federico Franco dijo: “No estoy a favor de cercenar o de prohibir cualquier tipo de asistencia que pueda servir para mejorar la salud del pueblo paraguayo”¹⁰⁴. Por otro lado, se tenía el antecedente negativo del acuerdo similar firmado por el gobierno de Nicanor Duarte en 2005. En definitiva, frente a las fundadas preocupaciones de los gobiernos nucleados en el Mercosur y la Unasur respecto a la avanzada de EE.UU., el presidente Fernando Lugo decidió rechazar la presencia militar: “No es un rechazo categórico. Simplemente no creemos conveniente que el Comando Sur de Estados Unidos esté presente en Paraguay con 500 efectivos para este tipo de ejercicios”¹⁰⁵, afirmó. Al recibir la notificación del gobierno, la embajadora de EE.UU. en Paraguay, Liliana Ayalde, respondió: “Esperemos que este no sea un indicio de rechazo al resto de nuestros programas. No tenemos nada que así lo indique”¹⁰⁶.

La embajadora Liliana Ayalde se refería a los otros cuantiosos convenios entre EE.UU y Paraguay, financiados por la Corporación para el Reto del Milenio (MCC) y administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), más allá de este acuerdo bilateral de “ayuda humanitaria”. Con veintiséis años de carrera en la diplomacia estadounidense, Ayalde sabía de qué hablaba; venía de operar más de 200 millones de dólares desde 2005 como directora de la misión de la USAID en Colombia¹⁰⁷, antes de su pase a la Embajada de EE.UU. en Paraguay en el año que asumió Lugo como presidente, 2008.

Ya en abril de 2009 habían aprobado la fase II del Programa Umbral, cuyo objetivo era “reducir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho en Paraguay a través de un control más efectivo de los recursos públicos mediante tareas de prevención, control y sanción de hechos de corrupción”¹⁰⁸. Con un presupuesto de 34,6 millones de dólares, la fase I se había implementado desde 2006 en pos de

¹⁰³ *Ibidem*, p. 236.

¹⁰⁴ Página/12 del 19 de septiembre de 2009, disponible en www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-132032-2009-09-19.html.

¹⁰⁵ Diario La Jornada del 9 de septiembre de 2009, disponible en www.jornada.unam.mx/2009/09/18/mundo/029n1mun.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ BASE IS, *USAID en Paraguay. La asistencia como estrategia de dominación permanente*, Asunción, Paraguay, diciembre de 2012, p. 24.

¹⁰⁸ *Ibidem*, p.159.

mejorar los índices de transparencia, justicia y libertad económica. La periodista de Agencia Pública, Natalia Viana, reveló al respecto:

“Los resultados, sin embargo, fueron un fiasco, de acuerdo con una auditoría de la propia USAID, que elaboró un documento¹⁰⁹ en el que mostraba que muchos objetivos no fueron alcanzados y que el gobierno de Nicanor Duarte Frutos no estaba muy interesado en perseguirlos. Un laboratorio forense financiado por los Estados Unidos permaneció sin uso durante dos años; un programa para aumentar la transparencia y el monitoreo de las actividades del Congreso fue abandonado “por falta de voluntad política”; la inversión en actividades aduaneras se restringió a la capital, Asunción, mientras el contrabando continuaba a todo vapor en la frontera; diez de los doce barcos donados para patrullaje fronterizo quedaron fuera de operaciones; un nuevo sistema de documentos de identidad y pasaportes, implementado y financiado por USAID, terminó generando polémica con la acusación de haber favorecido a una empresa norteamericana en el proceso de licitación”¹¹⁰.

Lo cual no imposibilitó la adjudicación de otros 30,3 millones de dólares para el Programa Umbral II, que se consignarían de acuerdo a sus seis componentes, al fortalecimiento de la capacidad investigativa del Ministerio Público, al fortalecimiento de los sistemas de control y disciplinario judicial y al Tribunal Contencioso Administrativo, al fortalecimiento de los sistemas de control del Ministerio de Salud, al fortalecimiento de la Dirección Nacional de Aduanas, al fortalecimiento de la protección a los Derechos de la Propiedad Intelectual y, por último, al fortalecimiento de la Policía Nacional¹¹¹. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional fueron las dos instituciones que más dinero recibieron.

Según el extenso estudio sobre los programas de asistencia de EE.UU. realizado por BASE IS, y comandado por el periodista Raúl Zibechi¹¹², éstos permiten el acceso a importantes volúmenes de información y bases de datos y al control de una parte del aparato estatal; en los cuales la financiación termina por ser un aspecto secundario “ante el hecho de que entes como el Ministerio Público o la Policía Nacional estén siendo asesorados, capacitados pero a la vez monitoreados y supervisados por agencias del gobierno estadounidense. Ambas instancias muy relevantes en la política de criminalización de las luchas sociales, además cuentan con asesoramiento permanente del gobierno colombiano”¹¹³.

La participación de asesores colombianos en el Ministerio del Interior se confirmó con el caso del secuestro del ganadero Fidel Zabala en octubre de 2009. Desde un primer momento la policía adjudicó el secuestro al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), mientras que la fiscalía indicó que el EPP había recibido asesoramiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)¹¹⁴. La colombianización de Paraguay estaba a las órdenes del día en todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales. El caso provocaba una gran conmoción en Paraguay, y los reclamos por la inseguridad renovaban fuerzas. Nuevamente, los opositores a Lugo aprovecharían la oportunidad para reclamar un juicio político; el

¹⁰⁹ La auditoría indicada por Agencia Pública se encuentra disponible en: www.apublica.org/wp-content/uploads/2013/02/Auditoria-Threshold-Phase-1-Qto-Casals-ganha.pdf.

¹¹⁰ Natalia Viana, *Investigación en Paraguay: el papel de los Estados Unidos en la caída de Lugo*, nota publicada y traducida por el Puerco Espín, disponible en: www.elpuercoespin.com.ar/2013/02/07/investigacion-en-paraguay-el-papel-de-los-estados-unidos-en-la-caida-de-lugo-por-natalia-viana.

¹¹¹ *Ibidem* BASE IS, p. 163.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ *Ibidem*, p. 167. Cabe destacar que USAID fue expulsada de Rusia en 2012 y de Bolivia en 2013 por ser responsable de injerencia en la política interna de estos países.

¹¹⁴ La Nación, 13 de noviembre de 2009, disponible en: www.lanacion.com.ar/1198968-lugo-moviliza-tropas-para-rescatar-a-un-estanciero.

senador Alfredo Jaeggli encabezaría la maniobra manifestando el 19 de octubre: “Es consecuencia de un gobierno que no extirpa el terrorismo, socialismo o comunismo extremo”¹¹⁵.

Distintos cables filtrados por Wikileaks de la embajada de EE.UU. en Paraguay, corroboraron que el Ministro del Interior, Rafael Filizzola, solicitó ayuda al gobierno de Uribe para la ocasión. A su vez, el embajador colombiano en Paraguay, Mauricio González, habría pedido que la asesoría de su país pase desapercibida: “él anhela que la participación colombiana se mantenga en perfil bajo porque su Embajada había recibido una amenaza del EPP (antes del secuestro) que si los colombianos se involucraban, ellos podrían tomar represalias contra los ciudadanos de Colombia en Paraguay”¹¹⁶. El estudio de BASE IS reveló además que en las “Memorias al Congreso” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se divulga que la cooperación de su país, especialmente en materia de seguridad, promovió que en la esfera regional “Paraguay ha mantenido una posición de equilibrio y ponderación frente a asuntos relacionados con Colombia, que ha contrastado con la posición asumida por otros países”¹¹⁷.

El ministro Filizzola también pidió equipamiento para escuchas telefónicas a la embajadora norteamericana, quien aunque le negó los artefactos, se expidió sobre el caso del ganadero secuestrado condenando los hechos. Liliana Ayalde tenía ya una asidua presencia en los acontecimientos de Paraguay a través de los medios de comunicación, y con diversas reuniones que mantenía con actores políticos de todos los ámbitos, incluyendo al presidente de la Nación. Otro cable filtrado por Wikileaks referido al caso Zabala, señala que el 16 de octubre se reunieron en la Embajada la familia del secuestrado y autoridades del gobierno paraguayo, quienes “contaron que están impresionados con los expertos colombianos. Todos han recibido entrenamiento y asistencia técnica en Estados Unidos bajo el Plan Colombia. FIN DE LA NOTA”¹¹⁸. Cabe destacar la presencia en esa reunión del abogado Felino Amarilla, que en el cable se menciona erróneamente como un primo de la familia, del cual se hablará más adelante.

El año 2009 finalizaría turbulento. Lugo cambió la cúpula militar aduciendo que, si bien “no existe ningún peligro de golpe de Estado, por lo menos promovido por el estamento militar”, sí habían “pequeños bolsones” de militares que podrían ser usados por la clase política¹¹⁹. Nuevamente se abría la posibilidad del juicio político; el senador colorado Juan Carlos Galarvena afirmaba que el cambio obedecía a un plan chavista. Tampoco fueron reunidos los votos necesarios.

¹¹⁵ Op. Cit., Fátima Rodríguez.

¹¹⁶ Op. Cit., p. 74.

¹¹⁷ Ibídem, p.49.

¹¹⁸ ABC Color del 29 de marzo de 2011, disponible en: www.abc.com.py/edicion-impres/politica/familia-de-zavala-no-confiaba-ni-en-lugo-ni-en-la-policia-nacional-238121.html.

¹¹⁹ Op. Cit., Fátima Rodríguez.

El verdadero objetivo; el primer juicio político

El ministro Spaini prefirió mantenerse al margen; pues, si había una colombianización de Paraguay, era porque existía un plan colombiador. Se caía de maduro. Ya lo había advertido la secretaría de Asuntos Estratégicos de Brasil, cuando dejó trascender a la prensa que no iba a permitir un desbordamiento del conflicto interno de Colombia, ya que afectaría la seguridad de ese país.

Sin embargo, a comienzos de 2010 las autoridades de las carteras de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior le enviaron un nuevo proyecto para que de su aprobación. Se trataba del programa denominado Iniciativa de la Zona Norte (IZN). Financiado por la USAID en Paraguay e implementado por la Cooperativa Agrícola de Desarrollo Internacional (ACDI) en asociación con Voluntarios en Asistencia Cooperativa de Ultramar (VOCA), dos organizaciones dedicadas a los agronegocios, el desarrollo de la empresa, los servicios financieros, el desarrollo de la comunidad y la seguridad alimentaria. Con la iniciativa, USADI-Py - ACDI/VOCA trabajarían con quince municipios del noreste del país a fin de reducir “los niveles de violencia y actividad delictiva”, por medio de la generación de oportunidades lícitas mediante la alianza con sectores ganaderos y sojeros de esas zonas. De ese modo, buscaban lograr establecer un nuevo nivel de estabilidad en las áreas objetivo¹²⁰. Dichas áreas involucraban a los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Chaco y Canindeyú, en los que con el correr del 2010 y 2011 se darían en los primeros tres mencionados, los estados de excepción.

Para no pasar por el Congreso, el programa IZN se presentó como un agregado del Acuerdo General de Cooperación Económica y Técnica firmado en septiembre de 1961, entre Washington y la dictadura de Alfredo Stroessner. Por consiguiente, el general Spaini adujo que en los tiempos actuales no se podía reflotar una cuestión de estas características, que correspondía a la época de la Doctrina de Seguridad Nacional, y con esos argumentos devolvió la misiva. Finalmente, se puso a consideración del Congreso mediante un memorándum del 27 de julio de 2010, el cual resolvió su aprobación¹²¹.

Mas, aunque sea, el ministro de Defensa continuaba con su política alineada a los principios de confianza mutua de la Unasur. Esos principios eran su principal herramienta, que utilizó como argumento durante sus constantes embates. Por lo cual, paulatinamente, el ministro se empezaba a transformar en un escollo para los sectores más reaccionarios, que en una primera instancia buscaron hacerlo partícipe voluntario o no, del plan colombiador. Pero, una vez tuvieron la certificación de que era un obstáculo, decretarían su salida del gobierno.

Ya en febrero de 2010 la prensa asunceña lo había involucrado en el pedido de instructores militares colombianos para incursiones en el terreno, con el objetivo del combate a la guerrilla. Manifestaciones que provocarían un comunicado oficial del Ministerio de Defensa fechado el 18 de febrero, calificando de incorrectas e inexactas las informaciones trascendidas. Lo que provocó la reacción del ministro del Interior y

¹²⁰ Op. Cit, BASE IS.

¹²¹ *Ibidem*.

del vicepresidente, Federico Franco, quienes sostuvieron su gratitud frente a la asistencia militar colombiana prestada¹²².

En ese mismo febrero, Bareiro Spaini escribiría su certificado de salida. El viernes 19, Liliana Ayalde oficiaría de anfitriona en un almuerzo llevado a cabo en la Embajada estadounidense, al que había sido invitado el ministro de Defensa. Sin embargo, aduciendo motivos de agenda, el general Spaini mandó en su representación al viceministro general Cecilio Pérez Bordón. En la mesa se sentaron además generales norteamericanos, un general de las Fuerzas Armadas de Paraguay, el senador colorado Hugo Estigarribia y el vicepresidente de la República, Federico Franco, quienes abiertamente discutieron los asuntos de la política paraguaya. A su vuelta, el viceministro Pérez Bordón notificó a su superior los cordiales temas de conversación: un rechazo a las actitudes del general Spaini y “la pésima gestión administrativa del Presidente Fernando Lugo que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político”¹²³.

Bareiro Spaini no tardaría en reaccionar y mostrar su cólera frente a semejante acto de intromisión. En una carta dirigida a la señora Embajadora, con copia al Comando Sur de las Fuerzas Armadas Americanas y al Pentágono, el ministro calificaría de diplomática primeriza a Ayalde por haber invitado a compartir la mesa “a personas notoriamente enfrentadas por sus ideas, actitudes y opiniones socio-políticas”, que en caso de que resultare un gesto intencional de mala fe, dañaría las relaciones de ambos países. Enunciaba al vicepresidente en su condición de “notorio y acérrimo enemigo y cuestionador del Presidente Fernando Lugo, con rencor y cólera evidentes, pretendió desmerecer, de forma sarcástica y denigrante, la función y tareas del Presidente Lugo”. Y acusaba el silencio de la embajadora respecto a las acusaciones del vicepresidente: “en la misma mesa donde estando presente V.E., no se escucharon ninguna de las palabras de conciliación y armonía que el protocolo diplomático indica”¹²⁴.

Con la enérgica carta, el general se pondría en el blanco de todas las críticas al gobierno del Frente Guasu; demasiado gesto de soberanía, que no sería perdonado.

En agosto, con la excusa del robo de tres fusiles del cuartel del Comando de Estado Mayor del Ejército en Campo Grande, Bareiro Spaini sería llevado a juicio político. En un comunicado de prensa emitido el 19 de agosto por el Ministerio de Defensa Nacional, manifestó que “por informaciones fidedignas provenientes de los mismos círculos implicados en el montaje operativo pisco-político de ciertos sectores de la oposición, la pretensión del juicio político al ministro Bareiro Spaini, es solo el anticipo y primer paso del real objetivo estratégico final: el juicio político al Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, Fernando Lugo Méndez”¹²⁵. Además, afirmaba que esos mismos sectores opositores habían sido los promotores del rechazo a la adhesión de Paraguay a la Unasur –a donde había ingresado recién al año siguiente–, en busca de aislar al país del contexto de naciones

¹²² ABC Color del 20 de febrero de 2010, disponible en: www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/franco-desautoriza-al-gral-bareiro-70927.html.

¹²³ Nota a la embajadora Liliana Ayalde, firmada por el Ministro de Defensa de Paraguay del 22 de febrero de 2010.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ Comunicado de Prensa del Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay del 19 de agosto de 2010.

sudamericanas, “obedeciendo instrucciones de poderes hegemónicos extraregionales”¹²⁶.

Con media sanción aprobada, Luis Spaini no esperó la resolución definitiva y, con el fin de no salpicarlo a Lugo, renunció.

Una historia digna de Soriano

Los primeros departamentos declarados en estado de excepción durante la era de Lugo fueron los del oriente: San Pedro, Amambay, Alto Paraná, Presidente Hayes y Concepción. Los estancieros y ganaderos nucleados en la Asociación Rural del Paraguay (ARP) venían presionando al presidente para que movilice a las Fuerzas Armadas frente a los casos de inseguridad acontecidos en la zona, en la que confluyen campesinos, ganaderos, sojeros y productores de marihuana. También allí se encontraría el EPP.

La exigencia se haría más rotunda con un comunicado de la misma ARP de abril de 2010, frente al asesinato de cuatro personas (dos peones, un capataz y un policía), perpetrado con armas automáticas de grueso calibre en la estancia “Santa Adelia”, en Arroyito, Concepción. El tiroteo sería adjudicado al EPP, y dos días más tarde Lugo tomaría el reclamo para enviar un proyecto al Congreso para declarar el estado de excepción en esos cinco departamentos. De este modo, implícitamente las facultades de la policía nacional se mostrarían rebasadas; el adiestramiento de un millar de agentes y el asesoramiento militar colombiano no habrían sido suficientes.

Con la rápida sanción del proyecto luego de unas breves modificaciones, se aprobó por 30 días al Poder Ejecutivo para ordenar la detención y el traslado de personas sin orden judicial, la posibilidad de prohibir reuniones públicas y manifestaciones. Y, lo más significativo, tal vez el secreto deseo de los terratenientes y detractores a Lugo, el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos de orden interno.

En este escenario de reclamos por inseguridad en el interior del país, presiones de los sectores propietarios de tierra y fuerte presencia militar, se sucedería un enfrentamiento entre militares y policías, digno de una historia de Osvaldo Soriano.

En la fresca madrugada del 9 de mayo, un centenar de militares arribaron al pequeño pueblo de Huguía Ñandu, próximo a donde había sido el secuestro del ganadero Fidel Zavala, a poco más de 100 Km al noreste de la ciudad de Concepción. Se había filtrado la pista de que integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo acudirían a un cumpleaños, en el pueblo. El operativo fue encabezado por el Estado Mayor, sin la participación en la planificación de funcionarios de la policía. Desde un primer momento la falta de coordinación marcaría el desenlace de la operación.

Alrededor de un centenar de militares procedió a rodear la vivienda donde se desarrollaba el festejo. Era una noche cerrada, y los uniformados no visualizaron las camionetas policiales apostadas en la cercanía del sitio. Cuando se acercaban,

¹²⁶ *Ibidem*.

empezaron a recibir disparos que provenían del edificio contiguo a donde se localizaba el objetivo. Los policías de guardia de la comisaría nº 27, próxima al cortejo de natalicio, abrieron fuego pensando de que el EPP los estaba cercando. Puesto que, al no haber recibido una notificación sobre el operativo, no era difícil de que se produzca esa confusión ya que utilizan iguales atuendos. Cuerpo a tierra, los militares devolvieron la balacera hasta conquistar el lugar y reducir a los policías.

Mientras tanto, si la pista era válida, los guerrilleros que estarían soplando las velitas, escaparon porque el único resultado de la maniobra fueron algunos agujeros de balas impregnados en las camionetas policiales, y el recrudecimiento de las históricas desavenencias entre militares y policías.

Del hecho se dijo también que la policía local con el tiroteo habría alertado a los miembros del EPP para que se escaparan. O, incluso, de que en realidad habrían sido dos operativos en simultáneo; en el que en el segundo, se habría rodeado a un prostíbulo de la zona, “Machito”, donde los policías habrían abierto fuego producto de su estado etílico, y para respaldar a otros dos oficiales que se encontraban dentro¹²⁷.

En definitiva, la irónica situación comprometió a ambas instituciones. Los mismos medios comerciales que celebran la participación, el asesoramiento y el monitoreo de fuerzas extranjeras sobre las propias, se harían eco una vez más del desprestigio de los comandos directivos. Aunque el hecho probablemente lo mereciera, el discurso de los medios que consecuentemente omiten los trasfondos estructurales de las problemáticas del interior paraguayo, filtran la sospecha de que este tipo de deslustre a las fuerzas de seguridad es su propósito. Pareciera un mecanismo similar al de los gobiernos neoliberales cuando buscaron deshacerse de las empresas estatales, incluso de las que tenían reprobados éxitos. Como más claro se ve, en la intención de retornar a un posible conflicto bélico con Bolivia, donde primero se planteó la amenaza exterior, para luego mostrar las falencias internas, y así tener vía libre para pedir ayuda al norte.

¹²⁷ ABC Color del 10 de mayo de 2010, disponible en: www.abc.com.py/nacionales/policias-en-prostibulo-iniciaron-episodio-en-hugua-nandu-101067.html.

Montando el escenario

“Merecen la pena de muerte”¹²⁸, pronunció el abogado de la querrela Enrique Bacchetta, devenido en senador por el Partido Colorado, en el juicio que condenó a los seis dirigentes campesinos por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau. Era el 11 de julio de 2012, el mismo día en que Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Gustavo Lezcano, Simeón Bordón y Carlos Espínola debieron aceptar los 35 años de cárcel que le fueron impuestos por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. La prisión de Tacumbú, en las afueras de Asunción fue el lugar designado. Ya llevaban cinco años y 10 meses privados de su libertad, pese a que la Constitución paraguaya establece que ninguna persona procesada deberá superar el tiempo de prisión preventiva a la condena mínima¹²⁹, que en este caso era de cinco años. Poco importó la ley a los representantes del poder judicial del país, que en consecuencia violó la Carta Magna y demostró la fragilidad de la democracia paraguaya.

“¿EPP? ¿Qué es el EPP? Le ponen a campesinos diciendo que son del EPP, ustedes no saben quiénes son ellos, ¡Mezclan todo!”¹³⁰, gritaba Marcela Rodríguez, hija del acusado Roque Rodríguez, el dirigente máximo del Movimiento Agrario y Popular. El resto de los condenados pertenecían al Partido Patria Libre, de tendencia marxista-leninista, que fue constituido legalmente de cara a las elecciones generales del 2003, al que la Fiscalía Antisecuestro atribuyó el asesinato de Cecilia Cubas, ocurrido en 2005. Los seis campesinos, como se los comenzaría a conocer mediáticamente, estaban acusados de haber participado en la reunión de punto final, realizada el 13 de enero del 2005 en Caaguazú, donde se habría decidido la ejecución de Cecilia Cubas Grau.

La joven había sido secuestrada el 21 de septiembre de 2004, alrededor de las siete de la tarde cuando estaba por ingresar a su vivienda, en el barrio Laguna Grande, de San Lorenzo. Interceptada por dos autos que balearon su camioneta en el motor y las ruedas, fue imposible cualquier tipo de escapatoria. En un primer momento, todo indicaba que se trataba de un secuestro extorsivo; según el ex secretario privado de Cubas Grau, Luis Fernando Canillas, los secuestradores se habían puesto en contacto telefónico la misma noche en que la joven había sido secuestrada.

Varios miles de dólares fue el dinero que su padre, quien gobernó el país entre agosto de 1998 y marzo de 1999 y tuvo que exiliarse en Brasil a causa del “Marzo Paraguayo”, pagó en forma de rescate. Pero nunca recibió respuesta de los captores. Solo tuvo noticias de su hija cuando los forenses encontraron el cuerpo en una fosa en avanzado estado de descomposición, el 16 de febrero de 2005; Cecilia había muerto entre 60 y 90 días antes de ser hallada. El motivo: asfixia, a lo que la autopsia agregó que estaba con vida cuando fue tirada en el pozo que la encontraron, en la localidad de Ñemby, a pocos kilómetros de Asunción.

¹²⁸ Duelo verbal entre Bacchetta y familiares. 11 de Julio de 2012, ABC Color.

<http://www.abc.com.py/nacionales/duelo-verbal-entre-bacchetta-y-familiares-424989.html>

¹²⁹ CAPÍTULO II DE LA LIBERTAD. Artículo 19 - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo.

¹³⁰ Duelo verbal entre Bacchetta y familiares. 11 de Julio de 2012, ABC Color.

<http://www.abc.com.py/nacionales/duelo-verbal-entre-bacchetta-y-familiares-424989.html>

La noticia del hallazgo del cadáver desató una tormenta mediática que trascendería las fronteras paraguayas. Rápidamente, quien era presidente en ese entonces, Nicanor Duarte Frutos, aseguró en cadena nacional: “No escapan. Que sepan estos delincuentes que el pueblo está unido para hacerles frente”. La respuesta inmediata era necesaria en un gobierno que comenzaba a tambalearse. La idea de un enemigo común y la teoría conspirativa sobre una posible guerrilla fueron adquiriendo fuerza. Por su parte, la revista Colombiana La Semana publicó en su tapa de febrero de 2005¹³¹, una foto de Cecilia bajo el título “Prueba reina”, donde hacía alusión a una posible conexión entre las FARC colombianas y el EPP paraguayo.

La acusación de los seis campesinos se basó en un único testigo: Dionisio Cristóbal Olazar, quien aseguró haber pertenecido al EPP, quizás solo sea una casualidad que lo haya hecho luego de que la fiscalía ofreciera como recompensa 300 millones de guaraníes a quien brindara información sobre los implicados en el caso. Su salto a la fama fue en diciembre de 2009, en una entrevista televisiva para el Canal 13 de Paraguay, en el programa Algo Anda Mal. Robusto, con una boina verde y una tupida barba blanca contó que ocupó un alto cargo en el Partido Patria Libre, del cual habría surgido el EPP como un brazo armado, hasta que, durante el secuestro de Cecilia Cubas, decidió pasar información al entonces comandante de la Policía, Humberto Núñez. A este le manifestó que Vera, Cardozo, Acosta, Lezcano, Bordón y Rodríguez participaron de la “reunión de punto final”, mientras que Espínola habría actuado en la captura de la joven. Este testimonio jamás fue avalado con pruebas confirmatorias; al contrario, sus afirmaciones fueron rebatidas por Regina Rodas, en cuya casa se realizó la mencionada reunión. La declaración de Rodas no fue tomada en cuenta, como así tampoco su denuncia contra la Fiscalía, la que según ella le había ofrecido medio millón de dólares para que declarara que el testimonio de Olazar era verdad. A lo cual se negó.

En un primer momento, el juez Pedro Mayor Martínez determinó falta de mérito para juzgar a los campesinos, ya que no había otra prueba que la declaración de Olazar. Pese a ello, concedores de la justicia paraguaya, de sus tejes y manejes, decidieron partir hacia Argentina buscando asilo político. Allí lo único que encontraron fue el encierro. Por pedido del gobierno paraguayo, tres fueron detenidos en la misma oficina del CEPARE (Comité para la Elegibilidad de Refugiados de Argentina), otros dos en su casa de Florencio Varela y el último cerca de su lugar de trabajo, con helicópteros y una transmisión en vivo para Crónica TV. Luego, fueron enviados a la cárcel donde permanecieron dos años, que la justicia paraguaya no les reconocería.

Estando presos, les llegó la confirmación de que Argentina rechazaba darles asilo político. “Queremos poner a conocimiento de la opinión pública que no conocimos, no secuestramos y menos hemos matado a la señorita Cecilia Cubas, nuestro pecado fue haber participado el 13 de enero del 2005 de una reunión de la conducción del Partido Patria Libre (izquierda) - un testigo falso pagado Dionisio Olazar hizo que la Fiscalía nos incluyera primero por omisión de aviso y con la misma declaración nos acusaron posteriormente de homicidio y secuestro, excusa perfecta para militarizar el campo, más persecución a organizaciones campesinas dirigida todo esto por marines norteamericanos”¹³², escribieron los Seis Campesinos desde los

¹³¹ <http://www.semana.com/portada/articulo/prueba-reina/71022-3>.

¹³² Carta Abierta de los paraguayos presos por el caso Cecilia Cubas (Buenos Aires, 4/7/2006)

muros de Marcos Paz, en Buenos Aires. Finalmente, fueron extraditados a Paraguay el 2 de diciembre del 2008, donde un mega despliegue del grupo Aerotáctico los estaba esperando. A partir de allí, Tacumbú se convertiría en su hogar.

El tribunal solo logró comprobar que los nombres de los Seis Campesinos aparecían en la agenda de Osmar Martínez, quien había sido condenado anteriormente por el mismo hecho. Ese fue el motivo para dictar su condena de 35 años de prisión y afirmar que habían participado del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Grau. Poco importó que la joven había sido asesinada a fines de diciembre del 2004, y que Olazar afirmaba que la reunión donde se decidió su muerte había sido el 13 de enero del 2005. Para resolver la incongruencia, la justicia cambió la fecha de muerte de Cecilia y todo cuadró perfectamente. Tiempo después, salieron a la luz unas fotos del Fiscal del juicio, Rogelio Ortúzar, en las que aparecía portando un fusil M-16, una pistola al cinto y pantalones de combate, posando en medio de una matanza de campesinos ocurrida en mayo del 2007, en la localidad de Minga Guazú. Hoy Ortúzar continúa siendo fiscal en Asunción y los Seis Campesinos presos en Tacumbú.

El Ejército del Pueblo Paraguayo

“Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta forma...”, decían los panfletos encontrados la noche del 12 de marzo de 2008, en la Estancia Santa Herminia del productor sojero brasileño, Naborth Both, al sur del departamento de Concepción, a 470 kilómetros de Asunción. El EPP hacía su aparición mediática, mientras el galpón donde se llevaba a cabo la producción ardía entre las llamas. Los campesinos de la comunidad Kuruzú de Hierro, desde 2006 venían reclamando por el vertido de plaguicidas, ya que el sojal se encontraba frente a sus viviendas y empezaban a sufrir las consecuencias.

Both, sin dudar, acusó a quienes venían llevando adelante el reclamo. Inmediatamente sus nombres fueron asociados a guerrilla y terrorismo. Por su parte, los campesinos comenzaron a barajar la hipótesis de que podrían haber sido los mismos dueños de la estancia los que provocaron el incendio, como una manera de desacreditarlos y desviar el eje del conflicto. Y efectivamente, el eje del conflicto cambió: la barrera forestal que el empresario debía construir para separar las viviendas del sojal, quedó en un segundo plano, por lo que las fumigaciones continuaron perjudicando a los campesinos. Lo que sí se hizo fue crear una comisaría muy bien equipada y con cuarenta efectivos de la Policía Nacional. Lo importante, ahora, era combatir al supuesto grupo armado.

“El EPP, del que nadie conoce nada, parece el tipo de organización fantasma con que se puede crear artificialmente cualquier argumento para descontrolar un país pequeño como Paraguay. Nadie conoce su cabeza política y, sobre todo, la pregunta que nos hacemos todos es quién puede maniobrar en un territorio tan chico como el Chaco Paraguayo y súper intervenido por paramilitares a las órdenes de los capataces

sojeros y por la propia oficialidad paraguaya, que está rastrillando hasta el último confín”¹³³, afirma la periodista Stella Calloni, aludiendo a las cinco provincias que en abril de 2010 fueron militarizadas bajo un Estado de Excepción: Concepción, San Pedro, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraná. Paradójicamente, dos de estos departamentos, Concepción y San Pedro, han sido víctimas de la mayor matanza de campesinos desde el fin de la dictadura de Stroessner, exceptuando Curuguaty¹³⁴. Así fue que se militarizó más de medio país para perseguir a este supuesto grupo, cuyo número de integrantes varía entre diez y cien personas, según quien lo afirme.

Al EPP se lo acusa de haber secuestrado a más de un magnate del país, como así también de alzarse con importantes sumas de dinero pedidas como rescate para liberar a los prisioneros; además se los vincula con más de un ataque a comisarías y una treintena de asesinatos. Nada probado fehacientemente hasta entonces. Según los medios de comunicación, sus integrantes habitan en zonas boscosas de difícil acceso y mantienen vínculos con la FARC¹³⁵. “Es un comodín que impulsa la derecha mediática y la derecha política para colocar lo que les conviene, para desmovilizar a los sectores populares y movilizar a la policía y al ejército y a la fiscalía en torno a un objetivo concreto, y es que los sectores campesinos dejen de molestar y se entregue todo el país a la soja, a los narco, a lo que sea; a los agronegocios en general”, explica el periodista chileno Pelao Carvallo, integrante de la Articulación Curuguaty, al ser consultado sobre la existencia del EPP.

A Fernando Lugo más de una vez se lo vinculó con este supuesto grupo armado, alegando que les brindaba protección. El ABC Color tuvo un papel preponderante en esta campaña mediática. En su tapa del 27 de julio de 2010, tituló: “Gente del EPP, con Lugo y el canciller de Chávez”. El título iba acompañado con dos fotos donde Nicolás Maduro y Lugo aparecían por separado con Adriano Muños, hermano de Sonia Muños, quien estaba presa y procesada por el secuestro en 2008, del ganadero Luis Lindstron. Hasta su vicepresidente, Federico Franco, afirmó la existencia de relaciones entre Lugo y el EPP. Finalmente, se comprobó que las fotos habían sido sacadas mucho antes de que Lugo asumiera la presidencia, cuando entregó becas a jóvenes para ir a Venezuela. A pesar de ello, y a que Adriano Muños no contaba con ningún antecedente penal que diera prueba de su participación en el grupo armado, el terror mediático estaba generado y la figura de Fernando Lugo vinculada al EPP, a Venezuela y al bolivarianismo, palabras que generan una profunda irritación en la elite paraguaya.

Mucho se habla de EPP en el Paraguay, pero poco de la eliminación física de campesinos organizados. El informe Chokokue, realizado por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), lleva un subtítulo que describe la situación del campesinado paraguayo: “El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino”. Este informe denuncia que en casi 25 años de democracia (1989 - 2013) fueron asesinados y desaparecidos 115 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas, en el marco de la lucha por las tierras y en ataques organizados contra comunidades rurales para quedarse con sus pocas hectáreas. “Este plan sistemático se articula entre terratenientes e intereses corporativos ligados a algunos sectores del modelo del agronegocio que, aliados con líderes políticos

¹³³ Stella Calloni, *Paraguay: bajo amenaza de golpe de Estado*, 2009.

¹³⁴ Op. Cit., Informe Chokokue.

¹³⁵ EPP repite "a rajatabla" modelo de las FARC. Paraguay.com. 08 de Septiembre, 2014.

tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad. Particularmente están comprometidos en este plan las instituciones de seguridad y de justicia del Estado: el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, cuyas actuaciones ilegales gozan del respaldo explícito del sistema político”, denuncia el informe.

Un tiro en las piernas, otro en el estómago y el letal en la cabeza. Así asesinaron a Vidal Vega en la madrugada del sábado 1 de diciembre de 2012 en la puerta de su casa, frente a su mujer y sus hijos, en la comunidad de Yvypytã, bien cerca de donde ocurrió la Masacre de Curuguaty. Nadie pudo ver las caras de aquellos sicarios en motocicleta; a la oscuridad de la noche se sumaba que los atacantes estaban enmascarados. Vidal Vega no era cualquier campesino, sino un testigo clave en la causa por la masacre, además de desempeñarse como secretario de la Comisión Sin Tierra Naranjaty. El 15 de junio de 2012 casualmente no se encontraba en la toma, pero él era quien llevaba adelante la cuestión legal y quien, luego de ocurrida la masacre, bregó por continuar resistiendo. Pero seis meses después lo mataron y sus reclamos quedaron en el aire. “Cuando mataron a Vidal Vega, borrarón toda la memoria de la lucha por la recuperación de Marina Kue, el saber campesino acumulado acerca de la situación legal del inmueble y la capacidad de articular las demandas a favor de la reversión de esas tierras al territorio campesino”, expresa el informe Chokokue.

Está “claro como el agua que fue una posición política para derrumbar al presidente Lugo”¹³⁶, había dicho Vidal Vega días antes de su muerte, haciendo alusión a la Masacre de Curuguaty. Fue en una entrevista que coincidió con la visita de Amnistía Internacional para investigar la causa, donde en guaraní, quien el Pai Oliva considera la víctima número 18 de la masacre, expresó: “Cómo se explica la matanza si se dice que se tienen policías especialistas para abordar situaciones de ese tipo, y sabiendo que solamente 55 personas estaban en la ocupación de las tierras de Marina Kue. Cómo se explica la masacre si se dice que la policía actuó con informaciones de inteligencia, tanto en el ámbito político como policial”¹³⁷. El fiscal José Zarza, quien investiga la muerte de Vidal Vega, afirmó que el ataque que le arrebató la vida se trató de un ajuste de cuentas y detuvo a Pánfilo Franco Toledo, quien esa madrugada estaba arreglando su moto en la ruta y vestía similar a los atacantes. No obstante, la esposa de Vega, sus compañeros campesinos y distintas organizaciones de derechos humanos rechazaron firmemente esta versión, y consideraron que el asesinato se debe a su participación activa en el caso Curuguaty.

En el momento de su asesinato, Vidal Vega gestionaba 500 hectáreas para campesinos sin tierras, algo común en Paraguay donde entre 1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000 hectáreas, lo que se conoce como tierras malhabidas. Con una economía basada netamente en la producción agrícola, los campesinos reivindican sus derechos contra el avance sojero y conviven con sicarios, policías, empresarios, un poder judicial que les da la espalda y hasta quizás con el Ejército del Pueblo Paraguayo, este supuesto grupo armado que la derecha identifica con la izquierda, mientras que la izquierda dice que es un invento del gobierno y los

¹³⁶ Entrevista realizada el 6 de noviembre de 2012. Publicada en www.paraguayresiste.com.

¹³⁷ *Ibidem*.

medios. ¿Existirá realmente o será que algunos sectores están interesados en generarlo para justificar otros intereses?

La vida en Tacumbú

Su fachada prolija, ordenada, pintada perfectamente de blanco y crema no permite imaginar lo que allí dentro ocurre. El sol no logra filtrar ningún rayo, las escasas ventanas están tapiadas con madera y adentro todo es oscuridad, con un frío que penetra los huesos en invierno y un calor que dificulta la respiración en verano. En lo alto flamea una bandera paraguaya delante de las palabras: “Penitenciaria Nacional”, entre los gruesos cables que forman parte del tendido eléctrico. Es la cárcel de Tacumbú, ubicada en las afueras de Asunción. Fundada en 1956 por el dictador Alfredo Stroessner, fue pensada originalmente para albergar a 800 personas privadas de la libertad, aunque hoy alberga a cerca de 4 mil. Pese a que el 3 de enero de 2011, quien fue ministro de Justicia y Trabajo de Fernando Lugo, Humberto Blasco, anunciaba a la prensa que se cerraría definitivamente, eso no ocurrió y al día de hoy continúa funcionando.

Separados por una gruesa reja y una calle de tierra, hay unos cuantos puestos armados con maderas donde alquilan polleras, de distintos colores, gastados de tanto uso. En Tacumbú está prohibido que las mujeres ingresen con pantalón, sí o sí deben vestir polleras largas. Así que más de una doña improvisó un lugar donde alquila, por no más de cinco mil guaraníes, el equivalente a un dólar, la vestimenta reglamentaria de las mujeres que visitan el penal. Una sábana hace de probador, sostenida por unos hilos atados a un palo de madera. Tampoco faltan quienes por unos pocos guaraníes guardan los objetos que no pueden ingresarse y además están los que venden comestibles, para que las familias compren y les lleven a sus hijos, esposos y padres presos.

Para entrar al penal, los hombres hacen fila a la derecha y las mujeres a la izquierda. La requisita obligatoria incluye sacarse las zapatillas y las medias, un cacheo por una oficial femenina para las mujeres y uno masculino para los hombres. Entonces, se pasa a una mesa donde la gente se amontona para que dos policías reciban el documento de identidad, que quedará allí hasta la salida, que deberá ser antes de las tres de la tarde, hora límite para volver a atravesar los muros de Tacumbú. Luego, en el lado interno de la muñeca es colocado un sello con la palabra “visita”, el que se recomienda no borrar: ese sello diferencia a los que viven fuera de los que viven dentro; es el garante de la libertad. Al dar dos o tres pasos, más de cien internos se acercan y en una mezcla de español y guaraní ofrecen sus servicios para guiar a los visitantes dentro de los laberínticos pasillos de la cárcel, o para llamar a los presos que reciben visitas. Así se ganan la vida algunos de los detenidos.

Al traspasar una nueva reja, aparecen a cada lado celdas atestadas de personas, jóvenes en su mayoría. Las manos atraviesan los oscuros barrotes, que se extienden como buscando ayuda. Tacumbú es una bomba de tiempo a punto de estallar y si algo se parece es al mismísimo infierno; quizás sea una casualidad que su nombre en

guaraní signifique “calor que explota”, o quizás haga referencia a la sobrepoblación y el hacinamiento que allí se vive, donde quienes no tienen un lugar se los conoce como pasilleros: duermen por ahí a la intemperie en algún colchón improvisado con un pedazo de cartón o su propia ropa, la que tampoco abunda. Para ellos no hay pabellón, no hay cama, no hay comida, no hay nada. Deambulan por los pasillos, improvisan fogatas con latas que ofician de ollas, para calentar un pedazo de tortilla, la comida por excelencia de los pobres paraguayos. Allí, cada cual se cuida a sí mismo y el crack suele ser una buena compañía para vivir ajeno a aquella realidad agobiante.

En Tacumbú todo tiene un precio y la cárcel funciona como un gran mercado negro. Los pasilleros duermen allí porque no tienen dinero para comprar su espacio; ocuparon el lugar que en algún momento se utilizó para la recreación, e hicieron de eso su hábitat. Pero no todos viven de la misma forma, los narcotraficantes son un clan privilegiado: compraron un espacio donde construyeron su lugar con varias comodidades: televisión por cable, aire acondicionado, cocina eléctrica y hasta algunos tienen sus propios teléfonos celulares. Son el grupo vip de los detenidos. Es que la estratificación social que se vive en los muros afuera se traslada dentro del penal, donde los ricos narcotraficantes compran sus privilegios, los de clase media una celda, que tienen capacidad para dos personas y viven hasta ocho, y los más pobres quedan a la buena de Dios en los pasillos. En Tacumbú, los pasilleros no sólo están privados de su libertad, sino también de comida, salud, higiene y seguridad.

Sin luz ni ventilación, con humedad, así viven la mayoría de los presos de Tacumbú, quienes con suerte reciben un plato al día de puchero, porotos o guiso. Los 365 días del año el menú es el mismo, aunque el presupuesto habla de ensaladas, pescado y hasta un postre, nada de eso atraviesa los muros; el dinero que está destinado para aquello va a parar a otros bolsillos y la comida en Tacumbú escasea. Tampoco es que el presupuesto sea generoso, porque hasta fines 2013 cada preso contaba con un dólar cincuenta para ser alimentado en las tres comidas diarias¹³⁸. Las condiciones en la cocina del penal no son mucho más alentadoras, donde la carne se acumula en el piso y un cajón de zanahorias podridas será utilizado para armar el almuerzo. Los mismos internos le llaman “el tacho” a la comida que se sirve en el penal, en unos platos sucios sin cuchara, tenedor o cuchillo, por lo que deben usar las manos para alimentarse. Incluso muchas veces las botellas de plástico cortadas hacen de plato entre quienes hacen la fila para recibir su ración diaria. El olor constante a cloaca y las moscas sobrevolando completan el panorama. Por eso dentro de la cárcel proliferan las cantinas donde muchos de los presos venden comida. Así hicieron Agustín y Roque, dos de los seis campesinos, que en un rincón de Tacumbú montaron una especie de kiosko donde ofrecen encendedores, chicles, papas y harina de mandioca.

Los baños no son mucho mejores, casi 400 pasilleros tienen que compartir seis letrinas y seis duchas de agua fría, donde la humedad parece comerse las paredes, lo que lo vuelve un ambiente propenso para la propagación de enfermedades. Sumado al hacinamiento, da como resultado un combo explosivo. Los internos deben cuidar su salud casi como a su vida, porque en caso de enfermarse tan solo hay ocho camas disponibles para los casi 4 mil presos, y de más está decir que tienen un costo. Pero, ¿a

¹³⁸ Datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay. Informe Anual 2013.

qué se debe la sobrepoblación carcelaria? Primero a que en este penal viven el 46 por ciento de los presos del país, y segundo a que de estos únicamente el 21 por ciento tiene una condena dictada, mientras el 79 por ciento está procesado aguardando entre los pasillos una sentencia¹³⁹. Inclusive, muchos de los internos que allí habitan no llegaron por cometer algún delito, sino por un grave problema de adicción a las drogas. La lentitud y la desidia del sistema judicial paraguayo se evidencian en todo su esplendor porque los expedientes pueden dormir durante años en algún cajón de la fiscalía, y los presos pueden pasar meses sin conocer a su defensor público. “Es un sistema de justicia muy discutido; absolutamente todos los paraguayos sabemos de las falencias que hay en el poder judicial, todos los ciudadanos sabemos cómo se maneja la Justicia, que hay muchísima corrupción, que está muy politizado”, explica el abogado Vicente Morales, quien defiende a los campesinos acusados de la Masacre de Curuguaty.

Entre esos pasillos de la cárcel fue que los Seis Campesinos se cruzaron con Rubén Villalba, líder de la toma de las tierras de Marina Kue, quien está allí desde octubre de 2012 acusado de ser el instigador de la Masacre de Curuguaty y de asesinar al subcomisario Erven Lovera, jefe del Grupo Especial de Operaciones. Había varias cuestiones en común entre ellos: todos son campesinos, todos defendían sus tierras del avasallamiento de los sojales, todos sufrieron la persecución de los terratenientes y sus sicarios, todos vieron caer a más de un compañero, todos son presos políticos y todos terminaron en un rincón olvidado de Asunción llamado Tacumbú, desde donde siguen luchando.

Rubén Villalba, el enemigo común

La bala le rozó el lado izquierdo de la cabeza y le desgarró la piel, Rubén cayó entre los pastizales casi inconsciente. Así y todo logró atender la llamada de la radio Fe y Alegría, donde contó que había campesinos heridos y que él también lo estaba. Es, por lo menos lo que alcanzó a decir antes de cortar el teléfono y hacer que el estudio quedara en absoluto silencio. Rubén se sumergió en un sueño profundo mientras, ese 15 de junio de 2012, la balacera continuaba. Lo habían dado por muerto, pero la historia para Rubén sería otra porque logró resistir toda la noche con la herida abierta, volando de fiebre y con una lluvia que lo hundían en el más absoluto frío. Al día siguiente, salió del campo para llegar a un monte en Britez Cue, bien cerca de la zona de Curuguaty donde había sido la masacre.

Allí una enfermera lo curaría, ocho días después, en un Centro de Salud de la zona; la herida comenzaba a agusanarse y su visión había disminuido producto del disparo recibido. Luego, se recluiría en una casita de madera durante tres meses, hasta que en octubre fue detenido por la policía en un mega operativo que incluyó veintidós hombres armados y unas cuantas fotografías que mostraban a los triunfantes policías apresando al campesino. Las mismas que al día siguiente coparían las tapas de los

¹³⁹ *Ibidem*.

diarios nacionales. “Aní che jukáti”¹⁴⁰ fue lo único que llegó a decir Rubén, con el cuerpo en el piso y los policías rodeándolo antes de ser esposado.

La captura de Villalba se había convertido en una prioridad para el gobierno de Federico Franco. De ser una víctima, ya que en un primer momento se creyó que había muerto, no solo por su comunicación con Fe y Alegría, sino también porque su cédula de identidad fue hallada entre los caídos de Curuguaty, pasó a ser la persona más buscada en todo el territorio paraguayo. La prensa lo presentaba como el instigador de la masacre, y su cara se viralizó por todo el país. El mismísimo Franco, que se encontraba en Nueva York aquel día, no quiso ausentarse de las celebraciones: “Buen trabajo de la Policía Nacional con la captura de Rubén Villalba. Qué la justicia continúe el trabajo. Este caso es prioridad”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Desde entonces Rubén pasaría sus días en Tacumbú, donde no se daría por vencido y desde aquella celda se las rebuscaría para continuar luchando. Fue así que en abril de 2013 inició su primera huelga de hambre que duró 56 días, a la que se sumó su compañero Néstor Castro y más adelante los demás detenidos por la Masacre de Curuguaty. Reclamaban la prisión domiciliaria para nueve de los presos, entre ellos dos mujeres que estaban embarazadas, quienes lograrían la concesión. A inicios de 2014 volverían a implementar este método, consiguiendo la prisión domiciliaria para todos los que aún quedaban detenidos por esta causa. Pero la justicia no se la haría fácil a Rubén, y entre los viejos archivos reflotarían dos causas que lo mandarían nuevamente tras los muros de Tacumbú, donde vive todavía.

Invasión de inmueble en la colonia “Naciente”, es uno de los cargos que tiene que afrontar, aunque el mismo fiscal de la causa solicitó durante el proceso y la audiencia preliminar el sobreseimiento provisional. Pero el poder judicial se muestra reticente a desvincularlo del hecho, y Villalba continúa a la espera. Como si fuera poco, también se lo vincula con el caso “Pindo” ocurrido en 2008, donde un grupo de pobladores interceptó y detuvo a un auto de la fiscalía, que iba a la zona por una denuncia realizada por un propietario de un inmueble que lindaba con la comunidad campesina. Y Rubén, sin mediar prueba alguna, está acusado de ser quien lideraba el grupo. “El podercito local se dio cuenta de ese detalle, de que uno de los líderes era realmente de armas de tomar, que ya había resistido un desalojo policial”, expresa el periodista Julio Benegas en relación a las acusaciones que pesan sobre Villalba, quien antes de Curuguaty había liderado exitosamente dieciséis ocupaciones, donde en más de una ocasión hasta habían tomado tereré con los policías encargados del operativo.

Carlos Goiburú, el juez que ordenó que Rubén continué preso, es el mismo que en el año 2005 le concedió la usucapión a la familia Riquelme sobre las tierras en que aún eran ocupadas por la Marina, y también quien ordenó el desalojo y saqueo de la Comunidad Indígena Ava Guarani “Yva Poty” en noviembre de 2012 para beneficiar al terrateniente brasileño Ferreira de Souza. Este último, incluyó la quema total de las casas y escuelas de la comunidad que, hasta ese momento, se autoabastecía por completo. Después llegaron las disculpas correspondientes del caso, pero el daño ya estaba generado y la comunidad destruida.

Ahora, Rubén vive en el pabellón evangelista, ceba tranquilo un mate forrado con la cara del “Che” Guevara, de quien se declara admirador y cuenta con inocultable

¹⁴⁰ En guaraní, no me maten.

orgullo su militancia campesina, la organización de las ocupaciones, la lucha contra las fumigaciones y por la recuperación de las tierras. Remonta los orígenes de su militancia a su paso por el servicio militar obligatorio, donde siendo un adolescente tuvo que participar de desalojos campesinos durante la dictadura de Stroessner. Rubén no aguantó mucho siendo parte de la violencia que se ejercía contra los suyos, y desertó. Volver a su pueblo no era una opción, así que no le quedó otra que emigrar hacia Asunción donde trabajó de lo mismo que trabajan todos los campesinos que llegan a la ciudad: de vendedor ambulante. Fue allí donde decidió volver y luchar por la recuperación de la tierra. En Paraguay, los campesinos tienen dos opciones de vida: arrancados de sus tierras emigran a la ciudad a colapsar los bañados y vivir en la extrema pobreza o se quedan en las tierras, luchando, intentando recuperarlas aunque eso implique dar la vida.

Rubén habla pausado, la voz se le quiebra cuando recuerda aquella mañana del 15 de junio; su mirada se pierde en algún rincón de su memoria, reviviendo una y otra vez esas escenas de las que nunca imaginó ser parte. Su mujer Raquel y su hijo Derlis, quien lleva ese nombre en honor al secretario general de la juventud del Partido Comunista durante la dictadura, se encontraban en el campamento. Habían llegado hacía una semana para acompañarlos en la toma de las tierras, en las que también participaron otras mujeres con sus niños. Hoy Derlis tiene serios problemas respiratorios a causa de los gases lacrimógenos que se utilizaron aquel día, cuando apenas tenía tres meses.

“A mí no me importa que me condenen, quiero ganar la lucha”¹⁴¹, dice Rubén con una profunda convicción. Sabe que la pulseada con la justicia no será sencilla. A cargo de las investigaciones está el fiscal Jalil Rachid, hijo del ex presidente del Partido Colorado Bader Rachid, quien fue amigo personal de Blas N. Riquelme, también presidente del Partido Colorado y usurpador de las tierras de Marina Kue. Ambos grandes beneficiados de la dictadura stronista. “El fiscal amenaza públicamente en los medios de comunicación, abiertamente, de que cualquiera que se acerque... bueno, lo dice así: si estuvo ahí, por algo debe ser. Así que eso significa que lo voy a procesar, como procesó a 54 personas que estaban en esas listas”¹⁴², expresa el abogado Vicente Morales al afirmar que no existe un sistema de protección de testigos. La lista a la que se refiere Morales había sido confeccionada por el campesino Néstor Castro, a quien un disparo policial le destrozó la mandíbula aquel 15 de junio. Un día antes de la masacre había anotado en un papel los nombres de quienes ocupaban el terreno, para así pedir víveres a la Secretaría de Emergencia Social. Todos ellos fueron imputados en la causa, aunque muchos ni si quiera se encontraban en el lugar. Castro nunca pensó que esa lista sería usada como evidencia de la fiscalía en contra de sus compañeros.

Las acusaciones a los campesinos estuvieron plagadas de irregularidades, además de que no se realizaron las autopsias correspondientes, se escondieron los casquillos de las armas de alto calibre que no pertenecen a las escopetas de caza de los campesinos¹⁴³, ningún policía fue procesado, porque según el fiscal los sesenta campesinos “emboscaron” a los trescientos cincuenta policías. Estos son solo algunos ejemplos que muestran a las claras un proceso viciado, dejando de lado que se los

¹⁴¹ Entrevista a Rubén Villalba.

¹⁴² Entrevista a Vicente Morales.

¹⁴³ Informe de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, 2012.

acusa de invasión de inmueble siendo que las tierras pertenecen al Estado. Las únicas pruebas presentadas por la fiscalía en la audiencia preliminar fueron cocos, corta uñas, honditas, botellas de gaseosa, cinturones, papel higiénico, un carné de afiliación al Partido Colorado, un tornillo, entre otros objetos de características similares. Si bien esto ha sido motivo de burla, en la justicia paraguaya alcanza para condenar a trece personas.

Dos meses después de ocurrida la Masacre de Curuguaty moría Blas N. Riquelme, a los 83 años, por una complicación cerebrovascular. Con gloria y honores lo velaron y homenajearon en la sede del Partido Colorado con todos los referentes de la cúpula partidaria, entre los que no faltaron Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. Dieron tres días de duelo y la bandera permaneció izada a media asta. También le rindieron honores en el Congreso Nacional, el mismo que destituyó a Fernando Lugo.

La Antesala

Decir tierra malhabida, así, todo junto, no era lo mismo en el 2004 que unos treinta años antes. Aún en período dictatorial, significaba para el campesino mucho más que el término para designar a las tierras apropiadas de forma indebida, repartidas por Stroessner entre las elites. Tierra malhabida connotaba la pobreza, la desigualdad, la violencia y el miedo, instituidos en una de las más largas dictaduras de Sudamérica. Y con el correr del tiempo, la deforestación, la quema y las fumigaciones aéreas; el modelo del latifundio y la producción a gran escala que amenazan a la agricultura familiar.

Pero en 2004, el antropólogo Gregg Hetherington¹⁴⁴ señala que la expresión tuvo un quiebre a partir de un informe del entonces diputado del Partido Liberal, Efraín Alegre. El documento que revelaba la apropiación ilegal desde 1950 de más de 1,5 millones de hectáreas de tierra, tuvo una amplia repercusión en la vida política paraguaya. Sin embargo, su sentido no contenía los motivos expresados por el campesino. Sino que, en su calidad de informe técnico y objetivo, se mostró como la denuncia “por excelencia de la política anti-corrupción”, para impulsar la autoridad moral de su partido.

En cincuenta años los gobiernos colorados, a través del Instituto de Bienestar Rural (IRB), “piedra angular del clientelismo stronista”¹⁴⁵, habían distribuido 11,9 millones de hectáreas; de las cuales, 1,5 millones fueron cedidas violando el Estatuto Agrario.

Asimismo, el documento tuvo inesperadas consecuencias. Con la crítica institucionalista sobre la distribución de terrenos, una nueva concepción sobre la tierra malhabida se imponía en el imaginario colectivo. El ABC Color popularizó la interpretación de que si el IRB había repartido casi doce millones de hectáreas sin procedimientos adecuados, era en realidad un fracaso no solo del instituto sino además de toda la reforma agraria. No importaba si los beneficiarios habían sido los amigos del poder o campesinos sin tierra; quedaba de manifiesto que ninguna de las herramientas de distribución eran posibles. A su vez, la propiedad privada adquirida de manera lícita, era inviolable.

También en el interior de los movimientos campesinos, la mirada institucionalista tendría sus repercusiones, y las dos grandes organizaciones entrarían en disputa. Mientras la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) insistía en el reclamo sobre las tierras ilegales, la Federación Nacional Campesina (FNC) aducía que lo relevante era el tamaño de las propiedades, declarando que cualquiera mayor a tres mil hectáreas podría ser ocupada.

El esclarecedor documento impulsaba a las corrientes campesinas a entrar en los circuitos de la democracia liberal; aunque “en la medida en que abandonaban las estrategias que violaban la ley, también renunciaban a cualquier influencia que pudieran tener sobre el contenido de esa ley”¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Gregg Hetherington, *Tierra Malhabida y el engaño de la institucionalidad*, en Revista NOVAPOLIS, Nº 5, abril-octubre de 2012.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

Durante las movilizaciones de agosto y septiembre de 2004, que culminarían con el Paro Cívico iniciado el 16 de noviembre, la tendencia legalista se vería como la triunfante. Las importantes demostraciones de fuerza y organización, serían canalizadas dentro de los ámbitos de protesta formales. En el campamento montado en las afueras de la ciudad de Caaguazú, los líderes moderados ganarían la pulseada de no cortar las rutas. El grueso operativo policial montado próximo al campamento, negociaba los límites de las acciones campesinas –por ej., regulando las marchas–, legitimándolas dentro del marco de la legalidad. Así, la lógica burocrática del Estado pudo contener las demandas, y el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se vio fortalecido, mostrándose capaz de mantener el orden.

Claro que la derrota de esos años del movimiento campesino no se debió solo a un debate discursivo. El cierre de la apertura a la discusión de proyectos de expropiación de tierras, iniciada en el periodo siguiente a la caída de Stroessner, se manifestó con una fuerte represión al sector. Cuadrillas de militares salieron a custodiar el interior paraguayo, y más de dos millares de personas fueron procesadas. Pero la traducción del término tierras malhabidas a un castellano propio de los sectores urbanos, enaltecido por el Partido Liberal como expresión de un sistema institucional corrompido, se reflejará en el modo de cómo la administración de Fernando Lugo encararía la problemática de la distribución de tierras.

En 2008, por primera vez los sectores campesinos apoyaron la vía electoral, a la figura de ese cura que arbitraba en una de las zonas más conflictivas del país. Lugo encarnaba la posibilidad de concretar ese dilatado deseo de reforma agraria. Y si ese deseo venía en forma de leyes de propiedad, las organizaciones campesinas estaban dispuestas a esperar por sus resultados.

Dos años duró el convencimiento en esa posibilidad. Aún con los recaudos de Aldo Alderete por ‘no ideologizar la reforma’, su alejamiento del Indert demostraría que los sectores nucleados en los gremios de la producción no estaban dispuestos a dar ni un centímetro de sus tierras malhabidas. Para ese entonces, los dirigentes de las organizaciones campesinas tradicionales daban cuenta de una cierta atrofia para movilizarse. Mas, ya no convencerían a las bases de no accionar, con el argumento de que sería un descrédito para Lugo y en consecuencia para el logro de la reforma.

Nace la Liga Nacional de Carperos

Frente a la estación de ferrocarril, en el centro de la plaza Uruguaya de Asunción, se alza la estatua de aproximadamente cinco metros del General José Gervasio Artigas. Mira al horizonte con un gesto de presentación, con su brazo derecho extendido hacia atrás, en cuya mano sostiene un sombrero de ala ancha. Los rayos de sol que se filtran entre las frondosas copas de unos lapachos rosas, le imprimen un tono conmovedor. Allí, en el centro mismo de la plaza, durante el 2010 fueron encontrándose los líderes campesinos que en representación de las comisiones vecinales gestionaban la adquisición de tierras en el INDERT.

Y entre tereré y tereré, <vos, ¿de dónde sos?>, <yo, de Caazapá>, <y, ¿vos?>, <yo, de San Pedro, y, ¿vos?>, <de Concepción, ¿y, vos?>, <de Alto Paraná, ¿y, vos?>, <Caaguazú>, <de Guairá, ¿vos?>, y <yo, del Chaco>. “Y, ¿qué? ¿Nos dejaron todos?”, preguntó uno. <Yo soy MCNOC>, <yo, OLT>, <Federación>: “Nos dejaron todos”, resolvieron¹⁴⁷.

Poco a poco fueron aglutinándose para ver en el Indert qué ocurría con sus expedientes. En representación ya no de una comisión vecinal, se presentaban en nombre de varias comisiones de distintos departamentos. De ese encuentro y esta coordinación se constituyó la Liga Nacional de Carperos, que agrupaba a 193 comisiones vecinales, de entre 18 y 2.800 censados, conformando alrededor de 50 mil adherentes¹⁴⁸.

Además de los reclamos tradicionales por el acceso a la tierra, discutían el gravamen a la exportación de soja y el modo de volcarlo a la producción cooperativa. Impuestos de un 20 y 30 por ciento. En la mirada de algunos líderes, había que presionar con ocupaciones dirigidas y bien planificadas. “Lugo va a decir a mí me están forzando, vamos a darles a los campesinos un poco y vos que tenés diez mil, dale tres mil y te quedas con siete. Era esa la historia. Vamos a empujar”¹⁴⁹. La versión de que el presidente tenía lapicera no encontraba más afiliados.

La primera ocupación que realizaron como Liga Nacional de Carperos fue en las tierras de Teixeira, que derivaría en la operación efectuada contra el presidente del Indert, y su consecuente apartamiento de la institución. Dos años más tarde, concentrarían a 8 mil carperos en un campamento en Ñacunday, Alto Paraná.

Las tierras ocupadas por los carperos tenían un peso simbólico per se. Se trataban de tierras recuperadas por el Estado a los herederos de Domingo Barthe, un francés que había constituido uno de los más grandes yerbales de las primeras décadas del siglo XX. En un juicio que culminó en 1953, se constató que las tierras adquiridas por Barthe para la explotación de los mensú, eran en realidad del Estado, por lo que se anularon todas las escrituras realizadas desde 1888. Sin embargo, haciendo caso omiso, las transferencias de las tierras por parte de la heredera Silvia Barthe, continuaron. Pasaron a un fideicomiso al Banco de Asunción, quien vendió a la empresa Gulf and Western American Corporation y esta a Agriex Sucursal Paraguay¹⁵⁰.

De este modo, se explica también el elevado porcentaje de sobre registros de propiedades, la falta de documentaciones, el hecho de que aparezcan fincas de dos, tres y cuatro pisos, la discordancia entre los títulos de propiedad y los registros catastrales. Como se dice, los grandes terratenientes estaban flojos de papeles. Por eso, el proyecto del Indert de llevar a cabo mensuras para constatar los excedentes que no aparezcan en los documentos de los supuestos propietarios, les generaría urticaria.

En 2008, la comisión vecinal de Santa Lucía se había enterado del excedente de la zona de Ñacunday, por lo que inició los trámites en el Indert. Luego del estudio del entramado de juicios, transferencias y documentaciones, el instituto comenzó a ubicar

¹⁴⁷ Entrevista a José Rodríguez.

¹⁴⁸ Ramón Fogel, *El movimiento de los carperos*, en Revista NOVAPOLIS, Nº 5, abril-octubre de 2012.

¹⁴⁹ Entrevista a José Rodríguez.

¹⁵⁰ Op. Cit., Ramón Fogel.

los siete yerbales que pertenecían al Estado. Pero nuevos actores se encontrarían para disputárselas. El último comprador de las tierras, a la Agriex Sucursal Paraguay, no sería un simple productor.

El rey de la soja

El rey de la soja tiene el pelo enteramente blanco, usa anteojos fotosensibles sin marco y camisas con los botones de las mangas siempre prendidos. Si la temperatura lo permitiera, Tranquilo Favero seguro se pondría los chalecos de nylon tan típicos de los productores del sur de Brasil o de los chacareros de las pampas húmedas. Mas, su poderoso imperio agropecuario, construido a base de la compra de tierras paraguayas a precios irrisorios, lo distinguen del resto. Sobre todo, por ser el pionero en entrar a Paraguay las maquinarias necesarias para la producción agraria a gran escala, en especial de la soja.

Defensor del orden fomentado por la dictadura de Stroessner, arribó a las tierras guaraníes a fines de los 60` con el propósito de promover el progreso paraguayo a partir de la mecanización del campo. Encomiable tarea la de alimentar al mundo y hacer productivas las tierras rojizas; nadie más atento a sembrar esperanza donde antes no la había. Objetivo que con empeño lo llevó a ser el principal productor de soja transgénica del Paraguay.

En una entrevista de 2008, Favero afirmaba poseer tierras en trece de los diecisiete departamentos¹⁵¹. A razón de un dólar la hectárea se había hecho de más de 40 mil¹⁵², en las que durante ese mismo año alcanzó a producir alrededor de 200 mil toneladas de granos. Todo un ejemplo de empresario próspero, se transformó en el ícono de los llamados brasiguayos.

El boom del oro verde acontecido desde mediados de los años noventa, produjo la expansión del cultivo de soja a un promedio de 125 mil hectáreas por año¹⁵³. Solamente hasta el 2006, la superficie ocupada por la oleaginosa creció más de un millón y medio de hectáreas; de las cuales, un estudio coordinado por Javiera Rulli¹⁵⁴ indica que aproximadamente la mitad pertenecían a familias campesinas. La tierra, su objeto de dignidad, de posibilidad de tener pareja y formar familia –así como el salario al ciudadano–, le fue arrebatada al campesino por medio del desalojo, el alquiler o la compra a precio vil. Gran parte de la responsabilidad de ese arrebato se le concedió a los migrantes brasileros, que como Tranquilo Favero llegaron al país para la producción de la soja transgénica.

7, 7 millones de hectáreas, alrededor del 19 por ciento del territorio paraguayo y el 32 por ciento del total de las tierras cultivables, se encuentran en manos de

¹⁵¹ ABC Color del 1 de noviembre de 2008, disponible en: www.abc.com.py/edicion-impres/politica/quien-es-tranquilo-favero-1116784.html.

¹⁵² 40 mil según el mismo afirmó en la entrevista con ABC Color, **aunque en 2013 otras fuentes le adjudicaron más de 140 mil hectáreas de su propiedad.**

¹⁵³ BASE IS, *Repúblicas unidas de la soja*, estudio coordinado por Javiera Rulli, 2007.

¹⁵⁴ *Ibidem.*

extranjeros. El 62 por ciento, 4,8 millones de hectáreas, pertenecen a brasileños¹⁵⁵. Lo cual provoca no solo un proceso de migración interna, o más bien de expulsión del campesinado, sino también un problema de soberanía nacional. Allí por donde ingresaron los brasileños y avanzó la soja, se instalaron iglesias y escuelas de habla portuguesa, al igual que las radios y televisoras.

Actualmente, el grupo encabezado por Favero se conforma por nueve empresas de procesamiento y distribución de semillas, elaboración e importación de agroquímicos, financiamiento de la producción, provisión de maquinarias y combustible, y hasta un puerto privado sobre el río Paraná¹⁵⁶. Además de las 55 mil hectáreas que su empresa Agrotoro S.A. adquirió a la Agriex Sucursal Paraguay.

Es decir que los carperos no se enfrentaban solo al principal productor del país, al rey de la soja. Él mismo representaba a los más poderosos intereses que confluyen en torno a la tierra. A los brasiguayos que solo en Alto Paraná acaparan el 55 por ciento de las fincas mayores a mil hectáreas. A las exportadoras, en el que en un ranking de volúmenes exportados el Grupo Favero se encontraba solo detrás de Cargill, ADM, Bunge, Noble y Louis Dreyfus¹⁵⁷. A los millones de dólares recaudados anualmente por Monsanto en concepto de regalías por las semillas de soja transgénica y el herbicida Roundup –de aquí la relevancia de propiciar los derechos a la propiedad intelectual–. En definitiva, a los latifundistas y las trasnacionales, que generan el 28 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y apenas contribuyen al 2 por ciento de los ingresos fiscales del país¹⁵⁸.

“Lo que cohesiona el poder económico en este país es la tierra (...), la que unifica a Monsanto, al ganadero, al sojero, al narco, es la tierra”¹⁵⁹, explica el periodista Julio Benegas. Y agrega que si esos sectores de poder concentrado tenían algún resquemor por el gobierno de Lugo, no era porque éste sea un mal administrador para los negocios del sector: “tenían miedo de que las fuerzas sociales campesinas se fortalecieran y le disputaran políticamente el timón”¹⁶⁰.

Los sucesos de Ñacunday

Desde Puerto Iguazú uno puede hacer cincuenta minutos en auto en dirección sur hasta Puerto Esperanza. De allí, cruzar el río Paraná en balsa y así llegar a Ñacunday. Probablemente sea más sencillo que ir desde Ciudad del Este ya que, tras algunos días de lluvias, los caminos se vuelven poco menos que inaccesibles.

¹⁵⁵ Nota de Maurice Lemoine publicada en Le Monde Diplomatique Cono Sur, y reproducida en www.ea.com.py/v2/el-reino-del-latifundio/.

¹⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁵⁷ Informes de Investigación OXFAM, *El espejismo de la soja*, agosto de 2013, disponible en: www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/rr-soy-mirage-corporate-social-responsibility-paraguay-290813-es.pdf.

¹⁵⁸ Op. cit., Maurice Lemoine.

¹⁵⁹ Entrevista a Julio Benegas.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

Hasta la llegada de los carperos, Ñacunday presentaba una población de 8 mil habitantes y una extensión de 85 mil hectáreas, de las cuales 35.244 las ocupa el Grupo Favero¹⁶¹. Casi la mitad del distrito lo usufructúa el rey de la soja. Lo que la distingue, sin embargo, es la cada vez menos espesa reserva natural del parque Ñacunday; pues, la tala indiscriminada viene achicando las dos mil hectáreas de profusa vegetación.

En abril de 2011, unas seiscientas familias acamparon en la cabeza de una parcela de doce mil hectáreas, que estaban arrendadas a productores brasileños. Tras un informe sobre la mensura de la finca 4.036 de la hacienda “El Espigón” de Tranquilo Favero, los carperos ingresaron al sitio e impidieron a los productores realizar la cosecha de los cultivos. Creían que habían detectado unas dos mil hectáreas de tierras excedentes, de tierras del Estado.

La Fiscalía Zonal de Iruña, a cargo de María del Carmen Meza, le reclamaría al juez Marcos Martínez que accione el desalojo de inmediato. Pero como se estaba llevando a cabo el proceso de mensura judicial para determinar la legalidad de los títulos de propiedad, el desalojo debería esperar unas cuantas semanas más.

Los productores brasiguayos no se quedarían de brazos cruzados, y presionarían llevando a cabo un tractorazo. Alrededor de doscientas cosechadoras, sembradoras y fumigadoras conformarían una caravana hasta concentrarse en el cruce de la ruta a Otaño y el ramal a Santa Rosa de Monday. En los techos de las maquinarias llevaban las consignas de “Paz, Seguridad y Trabajo”, desplegadas junto a banderas paraguayas. Buscaban desprenderse del mote de brasiguayos.

El expediente abierto fue remitido al juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Iruña, a cargo de Hugolino Bogado, quien dictó una medida de no innovar para que la policía no actuara sobre los carperos, hasta arribar a alguna resolución. Los brasiguayos contestaron apelando el amparo con el apoyo de los intendentes de Santa Rita, Santa Rosa de Monday y Ñacunday; por lo que medida fue levantada. A la par, Fernando Lugo mandaba a la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE), a cargo del subjefe Erven Lovera, para controlar la situación mientras el INDERT y el Poder Judicial dirimían la titularidad de las tierras.

La situación se tensionó aún más cuando funcionarios del instituto de desarrollo de la tierra comenzaron con el relevo y la actualización de datos, exigiéndoles a los ocupantes de los terrenos que en un plazo de 48 horas debían presentar los títulos de propiedad. De otra manera, tendrían otras 24 horas para desalojar los sitios.

Casi dos meses después, el oficio judicial llevaría la firma del juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Rita, Rafael Jacobo. En las primeras heladas de invierno, mil efectivos policiales de la FOPE y de la montada fueron los encargados de efectuar el desalojo. Pacíficamente, los carperos se trasladarían a los límites de las tierras en cuestión, con la promesa de las autoridades de que se resolvería la situación.

Concretado el desalojo, los productores brasiguayos levantaron la concentración de maquinarias que permanecían a un costado de la ruta. Además, con

¹⁶¹ Diario Última Hora del 13 de marzo de 2013, disponible en: www.ultimahora.com/favero-ocupa-41-nacunday-uno-los-distritos-mas-pobres-del-sur-n607039.html.

el apoyo del coloradismo local, pedirían la renuncia de los mandos del Indert, en quienes veían a los enemigos del `sector productivo`. Paradójicamente, para estos productores la verificación de la legalidad de los títulos significaba la desestabilización social¹⁶².

Igualmente, a la mensura de la finca 4.036 se agregaba un pedido del Indert a la Corte Suprema para la aprobación de un procedimiento de mensura sobre las 257.904 hectáreas ubicadas en San Joaquín, Caaguazú, Alto Paraná e Irala, que corresponderían a las tierras de Barthe. Cuando recién el INDERT haría el requerimiento, en la mañana del 15 de septiembre se llevaría a cabo un episodio de singular naturaleza, ilustrativo de las connivencias entre los sectores terratenientes y judiciales. A solicitud de la fiscal Raquel Brítez, el juez José Delmás Aguiar emitió una orden de allanamiento a realizarse en las oficinas del Indert, con objeto de buscar el expediente de la mensura judicial a las tierras del Grupo Favero, en Ñacunday. La fiscal, acompañada de policías y de los abogados del rey de la soja, durante dos horas requisó infructuosamente el instituto de desarrollo rural. El expediente había sido remitido al juzgado de Hugolino Bogado, por lo que no se hallaba allí. La demostración de fuerzas era ridícula: “el asesor jurídico del Indert, Bernardo Insaurralde, manifestó que el juez de Iruña confirmó que los abogados de Favero sabían desde ayer por la mañana que los documentos estaban en su poder”¹⁶³, informaba el periódico Última Hora.

Mientras tanto, en Ñacunday los carperos se habían aglomerado bajo los tendidos de alta tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Como un fideo fino, acamparon a lo largo de entre cuatro y seis kilómetros. La idea de algunos dirigentes era que el conflicto tome dimensiones internacionales, que sea un caso ejemplo. De todos lados llegaban familias de campesinos sin tierra, o incluso de aquellos que tenían y que se sumaban a la causa por convicción. Como se dijo, se trataba de un tema de desigualdades y despojo, de modelos agrarios enfrentados, pero también de soberanía nacional. De hecho, muchas de las tierras en cuestión estaban próximas al río Paraná, y la ley prohíbe que un extranjero se haga dueño de esas tierras de frontera. Además, el replanteamiento de la mensura a pedido del Indert le ofrecería un nuevo impulso, con la sospecha de que las tierras de Favero podrían ser los yerbales de Barthe, es decir, del Estado según la resolución de mediados del siglo XX.

Para comienzos de 2012, más de 8 mil carperos se habían instalado bajo los tendidos de la ANDE. Parecía un pueblo dentro de otro pueblo. Tenían un tránsito copioso entre los campesinos que se quedaban en las carpas y los que iban a changuear a Ciudad del Este para traer alimentos y dinero. Varios de los conocidos mesiteros o de los moto taxistas de la ciudad capitalina, se encontraban en la lucha por las tierras de Ñacunday. Se quedaban por tres o cuatro días en Ciudad del Este, y luego retornaban al campamento. Por grupos se iban alternando. Además, en una movida del Ministerio de Educación se colocaron carpas escuela para darle acceso a la educación a los miles de niños que se encontraban en el campamento. En conjunto con una medida similar del Ministerio de Salud, el Estado se hacía presente en el sitio, lo que era ampliamente rechazado por los brasiguayos y los medios de comunicación.

¹⁶² Op. Cit., Ramón Fogel.

¹⁶³ Diario Última Hora del 16 de septiembre de 2011, disponible en: www.ultimahora.com/favero-reacciona-y-la-fiscalia-allana-las-oficinas-del-indert-n463904.html.

Hace tiempo el tema de los carperos en Ñacunday venía siendo noticia en la mayoría de los medios asunceños. El presidente de la comisión vecinal de Santa Lucía y uno de los líderes de los carperos en Ñacunday, Victoriano López, estaba siendo flanqueado por todos los medios. Era la principal voz del conflicto, y en su alocución siempre buscaba hacer énfasis en la cuestión de soberanía: recuperar las tierras de Tranquilo Favero era una causa nacional. A su vez, manifestaría polémicas declaraciones en torno al sostén de la lucha, diciendo que campesinas iban a prostituirse al lado argentino para traer dinero y poder para pagar sus pasajes a Asunción.

Con el calor del verano también subió la temperatura del conflicto. “¡Juicio político al presidente Fernando Lugo!”, reclamaron durante una asamblea convocada por la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Santa Rosa, que concentró a cinco mil productores de la región. El grito en el cielo se debía al trabajo de amojonamiento iniciado por la Dirección del Servicio Geográfico Militar. Técnicos de la dirección, junto a militares y dirigentes carperos, venían colocando mojones para delimitar la franja de seguridad fronteriza. Los brasiguayos denunciaron una suerte de complot entre militares y carperos, en la cual suponían que mediante las tareas de amojonamiento las fuerzas de seguridad les estaban facilitando las coordenadas a los campesinos para detectar las tierras excedentes. Para ese entonces, Tranquilo Favero había podido frenar el proceso de mensura judicial sobre las tierras que usufructuaba; el mismo juez Jacobo ordenaría la suspensión.

Para fines de enero, otro dirigente carpero de Ñacunday afirmaba que si en un plazo de diez días el gobierno no daba respuestas al conflicto, llevarían a cabo invasiones masivas en un territorio igual a 67 mil hectáreas. Los brasiguayos pedían la renuncia del ministro del Interior, de Defensa, del titular del Indert y el juicio político a Fernando Lugo. “Hay peligro inminente de una confrontación violenta y será responsabilidad del presidente de la República y del ministro del Interior lo que acontezca”¹⁶⁴, declaró el senador liberal Efraín Alegre.

Más adelante se sabrá a partir de cables filtrados por Wikileaks a la agencia de Inteligencia Stratford, y publicados por Santiago O’Donnell¹⁶⁵, que “al gobierno brasileño le preocupa mucho la supuesta incapacidad del gobierno paraguayo para controlar las tomas de los campesinos sin tierra”. Por lo que estaba dispuesto a actuar en consecuencia, además del refuerzo de 35 millones de dólares que había destinado para fortificar la policía fronteriza.

En ese marco, el 13 de febrero de 2012 Tranquilo Favero consiguió una nueva orden de desalojo. Aparentemente, para los funcionarios judiciales los terrenos por debajo de los cables de alta tensión de la ANDE, también correspondían al empresario sojero.

El operativo requería de una planificación cuidadosa. No era fácil mover a 8 mil personas. El Ejecutivo buscaba rápidamente alternativas; el ministro del Interior, Rafael Filizzola, el jefe de Gabinete, López Perito, y el procurador General de la

¹⁶⁴ Paraguay.com del 27 de enero de 2012, disponible en: www.paraguay.com/nacionales/filizzola-dara-explicaciones-hoy-sobre-el-caso-nacunday-79309.

¹⁶⁵ Página/12 del 11 de marzo de 2012, disponible en: www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-189336-2012-03-11.html.

República, Enrique García, discutían las posibles soluciones en el Palacio de López. Hasta que arribaron a la posibilidad de que el Estado brindara 30 mil hectáreas en Alto Vera, Yacaré Cue-Cedrales y en Italiano Cue-Cedrales, próximas a Ñacunday. La oferta elevada contemplaba la conformación de una comisión técnica para revisar en el Indert tierras para repartir, y un censo de los carperos instalados. De este modo, lograron dilatar el desalojo. Aunque, también, comenzarían los desencuentros hacia el interior del gabinete lugista.

El titular del Indert, Manuel Barreto, manifestaría que esos terrenos no estaban disponibles, porque ya habían sido distribuidos. Lo acusarían, entonces, de haber arrendado fraudulentamente las tierras a productores brasileños. Y, días más tarde, decretarían la intervención del instituto. El senador Sixto Pereira del Partido Tekojoja, integrante del Frente, diría que se estaba realizando el procedimiento a las apuradas, deslizando que el jefe de Gabinete buscaba posicionarse para las elecciones venideras.

En la tarde del lunes 20 de febrero, el dirigente Victoriano López decía que aún no había recibido la propuesta, pero adelantaba su reticencia para reubicarse. “Tierra pública que está en Ñacunday es lo que yo pido al Estado. Esas tierras que ellos están queriendo dar no voy a poder aceptar; si van a dar las tierras reivindicadas, tienen que dar las 157.000 hectáreas, yo no voy a aceptar”¹⁶⁶.

Las posibilidades se iban cerrando, siendo que el ministro del Interior poseía en sus manos la orden de desalojo a efectivizarse. Lugar que pensaban para trasladar a los carperos, lugar que ya estaba ocupado. El asesor jurídico de la presidencia, e interventor del Indert, Emilio Camacho dirá luego: “Vamos a estudiar si hay algo para Paraguay todavía en los feudos de Favero, porque hasta el río Paraná parece que es de él”¹⁶⁷.

Sin muchos más sitios a donde llevar a los carperos, con una inminente orden de desalojo, el panorama era absolutamente adverso. El deseo de efectivizar la distribución de tierras para campesinos, en un caso donde habían logrado poner en jaque el carácter fraudulento de las propiedades en ligazón a un tema de soberanía – de modo que en parte se morigeraban las culpas a los terratenientes locales–, se diluía. Un último lugar parecía viable: el parque nacional Ñacunday.

El conflicto se enturbiaría aún más. El dirigente de La Liga Nacional de Carperos, José Rodríguez, de perfil profesional y boina revolucionaria, hacía de nexo entre los dirigentes de Ñacunday y la plana mayor del gobierno de Lugo. Participaba de hecho de varias de las reuniones con el jefe de Gabinete, el ministro del Interior y el Procurador. Fue él quien primero leyó las propuestas del gobierno, y quien dijo descubrir una movida desestabilizadora en Ñacunday.

Según su versión, apenas terminó de leer la propuesta, telefoneó a Ñacunday para que la evaluaran: “mete, nomás”¹⁶⁸, afirmó que le dijeron. Por lo cual, al día siguiente comenzarían con los trabajos de traslado; el equipo del gabinete nacional se disponía para ello. Más tarde, cerca de las nueve de la noche, Victoriano López lo llamó para decirle que no, que los carperos no aceptaban la propuesta. Aparentemente, se

¹⁶⁶ ABC Color del 20 de febrero de 2012, disponible en: www.abc.com.py/nacionales/favero-tiene-que-estar-en-la-carcel-dice-carpero-368491.html.

¹⁶⁷ ÚltimaHora del 1 de marzo de 2012, disponible en: www.ultimahora.com/camacho-ironiza-favero-n507602.html.

¹⁶⁸ Entrevista a José Rodríguez.

habían reunido en asamblea cerca de las ocho de la noche, en la cual habían decidido que no se moverían del lugar, “ni al parque ni a ninguna parte”¹⁶⁹. Que venga el desalojo, que estaban preparados para defenderse.

En consecuencia, a las seis de la mañana del día siguiente se llevaría a cabo el desalojo.

Cerca de la una de la mañana, –continúa Rodríguez– volvió a llamar a otro dirigente de Ñacunday para convencerlos de la propuesta: no irían a resignar el resto de las hectáreas, pero “para que esté tranquila la gente y pueda trabajar ya, mientras seguimos peleando por lo otro; es un paso transitorio”, le dijo. “Pero, nosotros... yo no sé nada”, le respondieron. “¿Cómo que es que no sabés nada? Si él me dijo que hoy se reunieron a las ocho y resolvieron que no querían”¹⁷⁰. Según le habrían contestado, Victoriano a las cuatro de la tarde salió volando y creyeron que como iba a haber desalojo el tipo se corrió.

¿Por qué le estaba mintiendo?, pensó Rodríguez, y llamó a otro dirigente. Nuevamente, le afirmaron la versión de que Victoriano se había ido temprano y que la asamblea nunca había existido.

En el transcurso de la noche, habría recibido dos informaciones más que cerrarían la historia. Y atar cabos es sencillo, dice. Un contacto en el mercado negro le avisó que entre frontera se habían vendido veinte fusiles Ak-47, varias pistolas Mini Uzi y escopetas. Todo ese armamento habría sido destinado al campamento de los carperos, y por eso este contacto se lo informaba. A la vez, a las cuatro de la mañana lo llamó un amigo diciéndole que el día anterior en casa del gobernador de Alto Paraná, Nelson Aguinagalde, se habían reunido dos árabes y allegados a Horacio Cartes y a Lino Oviedo. Para José Rodríguez se estaba incubando una masacre, y eso fue lo que le dijo a las cinco de la mañana al ministro Filizzola para que frene el desalojo. Que inventara alguna excusa de que faltaba algún secretario de la Niñez, de la Mujer o de Derechos Humanos para respetar los protocolos adecuados.

La historia de difícil probatoria no salió en la prensa. Ningún medio se haría eco de que entre los 8 mil carperos se habrían infiltrado matones y tiradores con armas automáticas para dispararle a la policía, e infiltrados dentro de la policía para responder masacrando a la gente, como aducía José Rodríguez. Lo cierto fue que Filizzola dilató el desalojo argumentando que se estaba trabajando en el proceso previo, respecto a los protocolos que deben tenerse en cuenta. Ciertamente también fue el cambio de la tarde a la noche, de la intensidad en la actitud de Victoriano López respecto de la propuesta: “O Ñacunday o nada. Con machetes vamos a enfrentarnos. Si quieren guerra, guerra habrá”¹⁷¹, afirmó.

Días más tarde, los carperos se reubicaron en el sitio propuesto, en el Parque Nacional Ñacunday.

A su vez, recibirían otro revés del Poder Judicial. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le remitía el caso del Indert sobre mensura al juez de Santa Rita

¹⁶⁹ *Ibíd.*

¹⁷⁰ *Ibíd.*

¹⁷¹ Diario ÚltimaHora del 21 de febrero de 2012, disponible en: www.ultimahora.com/carperos-rechazan-oferta-y-dicen-que-se-enfrentaran-machetes-n505180.html.

Rafael Jacobo, quien había firmado el oficio para el primer desalojo. Los mismos funcionarios de gobierno dejaban correr que por vías judiciales no se iba a llegar buen puerto; las redes del rey eran bien sólidas. Incluso, el gobernador de San Pedro, José "Pakova" Ledesma, afín a los movimientos campesinos y a quienes estos podrían oír, declaró que lo habían querido sobornar con tres millones de dólares y veinte mil hectáreas de tierras para hacer que los carperos se retiraran. Según el gobernador, habría pedido 50 mil hectáreas para los campesinos y ningún guaraní. La contraoferta: cinco millones de dólares y las mismas hectáreas. Lo cual fue rechazado, alegando que no vendería ni su conciencia ni sus años de lucha¹⁷².

El 29 de febrero del año bisiesto, el jefe de Gabinete, López Perito, atestiguó a la prensa: "Nosotros tuvimos información confiable de que se había llevado armas a un grupo del campamento (de carperos), que estaba bajo el tendido eléctrico. No pudimos constatar hasta ahora, es difícil ese hecho, pero sí teníamos esa información"¹⁷³. También indicó, tras la intervención del INDERT, que en los papeles figuraban que Paraguay tenía 130 mil kilómetros cuadrados de más, y que la Dirección de Catastro registraba que había disponibles 530 mil kilómetros cuadrados por lo que "se estaría hablando de un país de dos pisos"¹⁷⁴.

"Nuestra lucha por la tierra está queriendo ser utilizada con fines políticos", le habría advertido José Rodríguez al presidente Lugo. "Ningún gobierno aguanta una masacre de civiles por una cuestión social; no aguantó De La Rúa, no aguantó Sánchez de Lozada, acá no aguantó Cubas Grau: siempre tumba gobiernos"¹⁷⁵. Faltaban poco más de tres meses para la Masacre de Curuguaty.

El 2 de marzo, el periódico Última Hora citaba las declaraciones del presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, al informar que los productores no descartaban un nuevo tractorazo: *el país entra en un "vale todo, donde lo que va a imperar es la ley del mbarete (del más fuerte)"*¹⁷⁶.

¹⁷² Diario Última Hora del 26 de febrero de 2012, disponible en: www.ultimahora.com/pakova-ledesma-denuncio-que-productores-quisieron-sobornarlo-n506308.html.

¹⁷³ Diario Última Hora del 1 de marzo de 2012, disponible en: www.ultimahora.com/el-ejecutivo-sabia-que-carperos-disponian-armas-fuego-n507605.html.

¹⁷⁴ Diario Última Hora del 1 de marzo de 2012, disponible en: www.ultimahora.com/lopez-perito-dice-que-paraguay-tiene-2-pisos-n507597.html.

¹⁷⁵ Entrevista a José Rodríguez.

¹⁷⁶ Última Hora del 2 de marzo, disponible en: www.ultimahora.com/amenazan-un-nuevo-tractorazo-n507875.html.

Invasores

De cabellera negra tupida, con una corbata roja a rayas y un traje elegante gris, el robusto diputado colorado Oscar Tuma leía la acusación al presidente Fernando Lugo, golpeando cada tanto con su dedo índice el estrado y con su mano izquierda aferrada a la madera que protegía sus papeles. En el Congreso, un auditorio mayoritariamente afín lo escuchaba. Eran más de las seis y media de la tarde del 21 de junio de 2012 cuando afirmó: “No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados el 15 de junio del presente año, que costó la vida de diecisiete ciudadanos paraguayos, entre policías y campesinos, recae en el presidente de la República Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia dieron lugar a los hechos acaecidos de conocimiento públicos; los cuales, no necesitan ser probados por ser justamente hechos públicos y notorios”.

La humillación a las fuerzas públicas y a la policía nacional, su instigación a la invasión de bienes privados en Ñacunday, su complicidad con el EPP, el atentado contra la soberanía nacional, su descarada marcha contra las instituciones y la vida de diecisiete paraguayos eran responsabilidad del presidente de la República Fernando Lugo. Todo quedaba probado porque eran hechos de conocimiento público y notorio. Porque la ciudadanía estaba enterada de los eventos. Porque la habían informado de los mismos. Lugo era culpable porque los medios de comunicación masiva lo habían manifestado.

En estos términos, la defensa del acusado en las escasas dos horas otorgadas, debía contraponer más de 10 mil horas de noticieros televisivos y radiales, millones de caracteres escritos y, por qué no, más de medio siglo de nacionalismo berreta y extranjerización material y simbólica. Como un folletín de barrio reprochando a algún nobel de la paz.

La defensa optó por lo jurídicamente razonable, y objetó la falta de debido proceso. Las incongruencias esgrimidas y las payasescas argumentaciones. El abogado Adolfo Ferreiro denunció el mamarracho jurídico, y ejemplificó: “el hecho de que ocurra un accidente de tránsito puede ser público y notorio, pero no omite la necesidad de probarlo en juicio para establecer las responsabilidades, lo que es de pública notoriedad es si es año nuevo o navidad, o de día o de noche”.

Sin pruebas que rebatir, ya que el propio libelo acusatorio decía que habían sido omitidas por ser de pública notoriedad, la defensa refutó un guión preestablecido en el gran teatro del juicio político. Incluso, Ferreiro calificaba de burla mayor la guía de actividades repartida durante el proceso, en la que en su punto d, decía que “se procederá a declarar culpable al acusado y se lo separará del pleno derecho de su cargo”¹⁷⁷.

Los tecnicismos jurídicos, la aplicabilidad de las leyes del Estado de Derecho no iban a aguantar el avieso alegato de que eran los votos los que valían para echarlo a Lugo; también la disputa discursiva estaba perdida hace mucho tiempo atrás. Los verdaderos invasores de la tierra, del aire y de la democracia habían cerrado las puertas del mundo significativo.

¹⁷⁷ Declaración de Adolfo Ferreiro durante el espacio de defensa brindado el 22 de junio de 2012.

Los dueños de la tierra, del aire y sus medios

Dicen que cuando su padre lo retaba se daba tales rabietas que empezaba a golpear su cabeza contra la pared. De ahí que se hizo de una cabeza dura que le valió el apodo de “acero” Zuccolillo¹⁷⁸. Hijo de un acaudalado inmigrante italiano, Aldo Zuccolillo Moscarada creó en 1967 el primer tabloide a color de Paraguay, que se convertiría en el principal medio periodístico del país: el ABC Color. Le había arrebatado la idea a Miguel Giralt, un hombre cercano a Stroessner y a quien el dictador quería como director del diario.

Ferviente defensor del stronismo, el ABC Color expresaría una línea editorial conforme a los intereses estadounidenses en la región, patrocinando no sólo a la dictadura del Supremo sino también a las simultáneas dictaduras acaecidas en Sudamérica. Por lo menos mientras duró el apogeo de la figura de Stroessner, ya que cuando avanzada la década del 80` este empezaría a declinar, el poderío económico logrado en aquellos años lo utilizaría para lavar la imagen de otrora personalidades stronistas, además de la de sus propios negociados¹⁷⁹. De este modo, concluida la dictadura, forjó su propia historia mostrándose como un paladín de la democracia y un defensor de la libertad de expresión.

Al igual que otros tantos dueños de grandes empresas periodísticas, Zuccolillo diversificó sus sociedades comerciales en rubros distantes al periodismo durante el período dictatorial, convirtiéndose en uno de los hombres más forrados del país. Hoy en día, es dueño del shopping Mariscal López, la constructora Atlas, la Inmobiliaria del Este S.A., la cual posee miles de hectáreas en todo el territorio paraguayo, principalmente urbano. Su vinculación con Cargill Paraguay quedó demostrada cuando en 2007 construyeron un puerto granelero en Zeballos Cue, a veinte minutos del centro de Asunción.

Héctor Cristaldo, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), es parte del staff del Grupo Zuccolillo, encabezado por Acero Zuccolillo¹⁸⁰. Según el periodista Idilio Méndez Grimaldi, Cristaldo tuvo una participación como director de la importante inmobiliaria; es decir, que era empleado de Zuccolillo.

La UGP nació en 2005, luego de la gran derrota del sector campesino, con el objetivo de actuar en defensa del respeto a la propiedad privada, la vigencia de la libertad de mercado, la libertad de competencia y la austeridad fiscal, según indica en su página oficial¹⁸¹. Nuclea a las más importantes cámaras exportadoras y comercializadoras de granos, fertilizantes y federaciones de productores; mayoría de las cuales fueron seleccionadas por la USAID para la implementación de las distintas acciones de la Iniciativa de la Zona Norte (IZN) en los departamentos de San Pedro y Canindeyú, en torno a los tópicos de `soberanía alimentaria`, `diversificación agrícola` y la búsqueda de `estabilidad social y económica`.

¹⁷⁸ Documental de Telesur de junio de 2013, *Expediente Zuccolillo*, disponible en: www.youtube.com/watch?v=X7uZ8oZQNFY.

¹⁷⁹ Ibídem: entrevista al sociólogo Diego Segovia.

¹⁸⁰ Idilio Méndez Grimaldi en su artículo *Monsanto golpea a Paraguay*, replicado en varios medios de comunicación.

¹⁸¹ www.ugp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2.

En conjunto con la Asociación Rural del Paraguay (ARP), fueron las dos principales organizaciones del autodenominado 'sector productivo' que arremetieron contra el gobierno de Lugo en los distintos conflictos por la tierra. Su estrecha relación con el ABC Color se manifestó en las operaciones llevadas a cabo por el periódico al titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal de Semillas (SENAVE), Miguel Lovera, en octubre de 2011. El citado periodista dio cuenta de que cuando Lovera decidió no inscribir en los registros cultivares a la semilla de algodón transgénico Bollgard BT, producida por Monsanto, comenzó la campaña mediática del diario en pos de su destitución en el cargo por corrupción y nepotismo¹⁸². La semilla había sido liberada por el ministro de Agricultura y Ganadería, el liberal Enzo Cardozo. El encargado del SENAVE, sin embargo, se amparó en que tanto la Secretaría de Ambiente como el Ministerio de Salud no habían dado su dictamen, carteras cuyos titulares también se volverían blanco de los ataques de Zuccolillo. La denuncia, sigue Lovera, la había realizado la supuesta sindicalista Silvia Martínez, quien era esposa de Roberto Cáceres, "representante de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por Syngenta, otra transnacional, todas socias de la UGP"¹⁸³.

Nueve días antes de la Masacre de Curuguaty, el 6 de junio de 2012, el sector productivo convocaba a un nuevo tractorazo masivo, en el que llevarían miles de máquinas hasta Asunción el 25 de ese mes, en reclamo de la habilitación del algodón transgénico, la inseguridad jurídica y con el pedido de apartamiento del titular del SENAVE. "No puede ser que en nuestro país se niegue a los productores la tecnología disponible en la región, para ser competitivos"¹⁸⁴, afirmaba el dirigente de la UGP, Ramón Sánchez. El ingeniero Héctor Cristaldo hacía mención de la inseguridad jurídica que se vivía en el campo en relación a las resoluciones judiciales que no se cumplían por 'caprichos' del ministro del Interior, Filizzola¹⁸⁵ (hacía tan sólo poco más de un mes que Filizzola había buscado retrasar la orden de desalojo a los 8 mil carperos de Ñacunday).

De modo que el ABC color y las dos grandes organizaciones del sector productivo (UGP y ARP), actuaron de manera coordinada y estratégica para menoscabar al gobierno del Frente Guasu. Poder de fuego mediático contra las más comprometidas figuras del ejecutivo y la movilización de las fuerzas del sector productivo serían las herramientas para disciplinar la gobernanza: parte del modelo de la desestabilización chilena durante el gobierno de la Unidad Popular.

Hasta aquí, un diario de derecha en conjunción con el sector productivo, ambos cuidadores celosos de los intereses de las transnacionales del agro. Pero cuando se analiza el mapa de medios paraguayos, en el que el 98 por ciento del espectro radioeléctrico lo poseen medios comerciales¹⁸⁶, se comprenden los accionares de los mismos y su rol durante el gobierno de Lugo.

¹⁸² Op. Cit., Méndez Grimaldi.

¹⁸³ Idilio Méndez Grimaldi, Monsanto golpea en Paraguay, disponible en: www.rebellion.org/docs/151721.pdf.

¹⁸⁴ ABC Color, 6 de junio de 2012, disponible en: www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/la-ugp-da-pleno-apoyo-al-tractorazo-410678.html.

¹⁸⁵ La Nación, 6 de junio de 2012, disponible en: www.lanacion.com.py/articulo/74784-senado-archiva-el-desbloqueo-total-y-desata-la-indignacion-.html.

¹⁸⁶ Soifer y Mayor, artículo *El golpe mediático en Paraguay*, disponible en: www.rebellion.org/noticia.php?id=152288.

La señal Telefuturo, el periódico Última Hora, Radio Estación 40, Radio Monumental, Servicio Digitales, Central Informativa Multimédios, Talismán y Artes Gráficas son las empresas mediáticas de otro de los hombres más adinerados de Paraguay, Antonio J. Vierci¹⁸⁷. Su grupo empresarial posee dos cadenas de supermercados con treinta y seis establecimientos, Stock y Superseis; diecisiete restaurantes de su concesión de Burger King; las concesiones también de Champs Elyseés, HC Collections, Baby Cottons; inversiones en las compañías Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Inmobiliario, CIA Bienes y Raíces, Plutón S.A. y Corcovado S.A.; en Embutidos Frans, Yerbatera Campesino, Planta de Pastas; en la industria del café, jugos y cañas; las distribuidoras de alimento y tecnología Centro de Distribución San Antonio, Agencia de Perú, AJ Vierci Bolivia, Grupo Vierci Chile, Laser Import S.A., AV S.A. Pepsi, A.J. Boston S.A., AJ S.A.¹⁸⁸.

Si bien no expresa una política partidaria marcada, el poderoso Grupo Vierci actuó a través de sus medios –siendo el diario Última Hora uno de los principales competidores del ABC Color– en sintonía discursiva con el diario de Zuccolillo. Destacadamente, durante la veintena de sucesos por los cuales se reclamó el juicio político a Lugo. Aunque los medios de Vierci ofrecen espacios a algunos periodistas críticos, como las columnas que Miguel H. López publicaba en Última Hora, la línea editorial de sus empresas estuvo en convergencia con la de Zuccolillo.

El panorama de medios hegemónicos lo completan: el diario La Nación y diario Crónica, Radio AM 970 y FM Montecarlo del Grupo Osvaldo Domínguez Dibb, antiguo presidente del club Olimpia, es dueño también de una tabacalera y una cadena de hoteles; Diario Popular, Radio Uno AM, Radio Popular FM del Grupo Multimedia, pertenecen al ex presidente Juan Carlos Wasmosy; Canal 2, Radio Fm Ovedira del Grupo Red Guaraní, de Arnolo Wiens, ligado a Horacio Cartes; Canal 9 (CNT) y Canal 5 (Paravisión) del mexicano Ángel “El fantasma” González; las FM Canal 100 y Latina y la AM 780 de MEGA cadena de comunicación; el holding de radios de la familia Rubin: Ñanduty, Rock and Pop, Radio Concert; y Canal 13 y sus repetidoras, radio AM y FM Cardinal, propiedad del Grupo Chena, recientemente adquiridas por Christian Chena, quien venía de la compra y venta de dominios puntocom¹⁸⁹. Todos fueron adherentes a la idea de que la destitución de Lugo y la asunción de Federico Franco habían sido en el marco de una transición democrática.

Entonces, los cinco hechos que motivaron la acusación a Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones, y que no fueron probados durante el juicio porque eran de pública notoriedad, habían quedado sujetos a lo que estos grupos propietarios de medios de comunicación habían considerado sobre los hechos mismos. La gran porción de la sociedad paraguaya que no había participado de esos eventos o enterado a través de algún vínculo directo, se había anoticiado a partir de los medios de comunicación. En términos prácticos, considerando una encuesta de 2008 del Sindicato de Periodistas de Paraguay en la que más de la mitad de los periodistas declaró haber sido censurados y el 90 por ciento admitió haber practicado la

¹⁸⁷ Julia Varela y Federico Larsen, *El trabajo periodístico en Paraguay: el golpe de Estado de 2012 y los modos de resistencia al discurso hegemónico*, en Revista Oficio Terrestre Nº 29, 2014, FPyCS, UNLP.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

autocensura¹⁹⁰, el diputado Oscar Tuma sustentaba la acusación para destituir a un presidente de la República en lo que una decena de dueños de medios masivos habían elegido decir respecto a esos cinco hechos. Dicho de otro modo, el mal desempeño de un presidente votado democráticamente era probado por la elección discursiva de esos propietarios de medios; dueños de campos, inmobiliarias, tabacaleras, un ex presidente, dos multimillonarios, un extranjero probaron la destitución de un presidente.

La espiral

La linealidad esgrimida precedentemente es en realidad la consumación de un proceso de desgate que se ha intentado contar. La espiral es el nombre que el sociólogo belga Armand Mattelart le puso al documental que describía el plan desestabilizador perpetrado por la CIA y la extrema derecha chilena contra el presidente Salvador Allende: “Una espiral ascendente hacia la explosión”, enunciaba. En ese entonces, el esquema de guerra psicológica era el principal mecanismo que utilizaba la CIA para la manipulación y la desinformación, el cual se hallaba en el Manual para Operaciones Psicológicas del ejército de Estados Unidos¹⁹¹. Introducir propaganda adecuada en los medios de difusión locales, diseminación de informaciones destinadas a contrarrestar la propaganda anti norteamericana, apropiación de periódicos, financiamiento a periodistas y empresas periodísticas, recolección de información sobre el gobierno y movimientos políticos de izquierda eran parte de ese esquema. La periodista Stella Calloni cita a Fred Landis, a quien le correspondió la tarea de analizar los periódicos latinoamericanos en el marco de un estudio sobre las operaciones secretas de la CIA en Chile, que el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. había encomendado: para la cooptación de un medio “lo primero que hacen es promover a los propietarios de los periódicos a la Junta Directiva de la Inter American Press Association (...), reservorio para las operaciones de la CIA”¹⁹². En este mecanismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) constituyó un papel central ya que nucleaba a los más importantes medios impresos de América; la cual, tras poco menos de una década desde su nacimiento en 1943, sería cooptada por los “oficiales de los servicios estadounidenses de inteligencia, Jules Dubois y Joshua Powers, lo que convirtió virtualmente a la organización en filial de la CIA”¹⁹³. A partir de allí, “la historia de la SIP es la historia de los golpes de estado contra los gobiernos constitucionales en los que estuvo involucrada”¹⁹⁴. Desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 hasta el apoyo al golpe a Hugo Chávez en abril de 2002, el organismo sirvió para reclamar por la libertad de expresión a los gobiernos populares contrarios a los intereses de EE.UU. y omitir el sinnúmero de atropellos contra los trabajadores de prensa y las violaciones de los derechos humanos, incluidas las desapariciones de periodistas durante las dictaduras del Cono Sur. Entre sus

¹⁹⁰ *Ibíd.*

¹⁹¹ Stella Calloni, *Evo en la mira: CIA y DEA en Bolivia*, Ed. Punto de Encuentro, 2013, Bs. As., pág. 290.

¹⁹² *Ibíd.*, p. 291.

¹⁹³ *Ibíd.*, p. 294.

¹⁹⁴ *Ibíd.*, p.295.

máximos dirigentes contó con el ex director de prensa de la última dictadura uruguaya, Daniel Arbilla; con el director del principal diario de Chile, El Mercurio, sindicado por Mattelart como “el verdadero constructor del intelectual colectivo opositor”¹⁹⁵ durante el gobierno de Allende –del cual se comprobó que recibió financiamiento directo de la CIA. Y, también, con los paraguayos Aldo Zuccolillo Moscarada y Alejandro Domínguez Dibb, hijo del dueño del Grupo Dibb.

En un principio, el gobierno de Lugo había recibido el visto bueno de Zuccolillo, tal como lo hizo luego con Horacio Cartes, patrocinándolo. Tal vez porque significaba la ruptura de la hegemonía colorada tras 61 años de gobierno; quizá porque había que oxigenar a los partidos tradicionales, como creían varios dirigentes que Lugo había llegado con el apoyo de la embajada estadounidense con el fin ulterior de despacharlo; quizá por su condición eclesiástica. Lo cierto que el dueño del ABC Color lo invitaría, incluso, a la reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa llevada a cabo en Asunción el 3 de marzo de 2009. Allí, el mandatario daría un discurso tranquilizador para los dueños de empresas periodísticas. Tras agradecer la invitación de Acero y de Alejandro Dibb, y declarar que no podía “avaluar la hipocresía de quienes aducen ejercer el poder prescindiendo de la opinión de los medios”¹⁹⁶, afirmó que su gobierno no tenía en su agenda “proyecto alguno de legislación reguladora del ejercicio de la prensa”¹⁹⁷. Sin embargo, la obrada relación duraría poco.

Mientras que los primeros intentos de realizar un juicio político habían venido de los políticos opositores ligados al ex presidente Nicanor Duarte Frutos y al mismo Lino Oviedo, dos semanas después de la reunión en la SIP entraría a jugar fuerte la conjunción del ABC Color con el sector productivo con el caso de los sesameros. Desde los primeros días de marzo se venían originando distintas movilizaciones campesinas en Caaguazú, Alto Paraná y San Pedro en las cuales los productores de sésamo reclamaban un subsidio del Estado, el precio de 8 mil guaraníes por kilo para su producción y la ayuda del Estado para su comercialización, excluyendo a las grandes empresas acopiadoras¹⁹⁸. Se estimaba que los productores tenían 30 mil toneladas para liquidar, que las empresas privadas buscaban adquirir a solo 3 mil guaraníes por kilo, siendo que había habido una sequía y la propagación de un hongo que habían afectado el rinde. En consecuencia, el gobierno dispuso de un subsidio de 40 mil millones de guaraníes para ser distribuidos por la fundación Tesai Reka Paraguay entre los sesameros. Medida que fue criticada por la UGP, que empezaría a presionar para su impugnación aduciendo que no se podían otorgar tales cifras a personas que cortaban rutas, lo que sería ir en contra de los agricultores “que trabajan de sol a sol para mejorar la situación de sus familias”¹⁹⁹. A la par, el ABC Color apuntaría contra el dirigente campesino Elvio Benítez, cuya organización sería beneficiaria de los subsidios, acusándolo de despilfarrar un crédito otorgado en 2001²⁰⁰. En esa ocasión, según la nota publicada, como obispo de San Pedro Lugo habría sido quien dio el aval para el

¹⁹⁵ Entrevista a Armand Mattelart, disponible en: www.cubadebate.cu/noticias/2014/03/03/armand-mattelart-hay-un-plan-del-pentagono-para-derrocar-a-maduro/#.VDyah5R5Pfl.

¹⁹⁶ Discurso del presidente Fernando Lugo en la SIP, 3 de marzo de 2009, disponible en: www.sipiapa.org/asamblea/discurso-del-presidente-fernando-lugo/.

¹⁹⁷ *Ibíd.*

¹⁹⁸ *Op. Cit.*, Fátima Rodríguez, p. 9.

¹⁹⁹ *Ibíd.*, p. 11.

²⁰⁰ ABC Color, 19 de marzo de 2009, disponible en: www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/elvio-benitez-despilfarro-500000-y-ahora-administrara-us-8-millones-1156399.html.

crédito, por lo que quedaba pegado al supuesto caso de manejo discrecional e ilícito de los recursos. En conclusión: "Gobierno de Lugo privilegia a grupo de polémico dirigente campesino de San Pedro"²⁰¹. La imagen del líder campesino se vería afectada al punto que unos meses después, durante la interpelación al entonces titular del Indert, los diputados echarían a Benítez de la sesión sin otro motivo que su figura de "polémico dirigente". Por su parte, el ministro de Agricultura Vera Bejarano y el vicepresidente Federico Franco se desmarcarían de la intención de entregar el subsidio que ayudaría a romper con el monopolio de las siete empresas de acopio del sésamo, entre otras cosas porque no podía dirigirse solo a la población de San Pedro, pese a la sequía acontecida en la región.

"Corren rumores de que el general y líder de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), Lino Oviedo, junto al ex presidente Nicanor Duarte Frutos buscarían destituir a Fernando Lugo con un juicio político dentro del Parlamento", envió la embajadora Ayalde hacia los Estados Unidos el 28 de marzo²⁰². Ayalde hacía referencia a los "tiburones políticos" que estaban esperando el traspie de Lugo para destituirlo, y alertaba que además de "las luchas políticas internas, la corrupción y la percepción de que su propio estilo de liderazgo es ineficaz, Lugo ahora debe también preocuparse de hacer un paso mal que podía ser el último"²⁰³.

Por el momento, entonces, la alianza capitaneada por Zuccolillo marcaría la cancha. A sabiendas de que el sector político opositor estaba a la espera de reunir los votos, es decir, de romper la alianza de Lugo con el PRLA, el ABC Color con el sector productivo intervendrían para disciplinar al gobierno. El corte de rutas para exigir este tipo de reclamos significaba un chantaje, no así los tractorazos que impulsarían más tarde. Mientras Lugo sostuviera su gestión de acuerdo a la conservación de sus intereses, siendo que en el mismo mes de abril aprobó la implementación del Plan Umbral II, las demandas de paternidad se utilizarían solo para seguir instalando el clima de ingobernabilidad, de descalificación y de la posibilidad de llevarse a cabo un Juicio Político en caso de algún traspie mayor.

Y el yerro llegó en mayo cuando en el Campamento Latinoamericanos de Jóvenes por el Cambio, en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, ondearían una bandera del Che Guevara. La política macartista esgrimida por el ABC Color desde su nacimiento se revelaría en toda su esencia: Lugo estaba pisoteando la Constitución Nacional. El profundo miedo engendrado en la sociedad paraguaya al término comunismo, canalizado ahora en la figura de un Chávez dictatorial y en su oprobiosa idea de un socialismo del Siglo XXI, marcaría la agenda. A la vez, el periódico amplificaba el reclamo de los autoproclamados "sintechos", que pedirían en una gran movilización planificada para el 12 de mayo, el fin del "gobierno fallido" ya que no había cumplido con sus promesas electorales, "como la reducción del precio del combustible y electricidad"²⁰⁴. La movilización que desde un principio se anunció que tendría "componentes de violencia"²⁰⁵, siquiera consiguió llenar la plaza del Congreso

²⁰¹ *Ibíd.*

²⁰² Cable filtrado por Wikileaks, disponible en: wikileaks.org/cable/2009/03/09ASUNCION189.html.

²⁰³ *Ibíd.*

²⁰⁴ Nota del ABC Color en Op. Cit., Fátima Rodríguez.

²⁰⁵ *Ibíd.*, Fátima Rodríguez.

y la ilusión de quienes buscaban darle fin al gobierno por medio del caos callejero, se desvanecería.

El octubre rojo se dio luego de que Fernando Lugo decidiera rechazar el arribo de los 500 militares estadounidenses programada para 2010. No sólo que resistía un acuerdo con Estados Unidos sino que lo hacía en nombre de no generar controversias en el seno de las relaciones sudamericanas. De modo que la decisión reflejaba el peso de la UNASUR en la política exterior de Paraguay y del sector que, justamente, se acababa de reunir en Bariloche frente a la instalación de siete bases militares estadounidenses en Colombia. En este marco, el discurso macartista del ABC Color cumplía una triple función: hacia la sociedad paraguaya, retrotraía los hechos políticos a un contexto de Guerra Fría, en el cual el bolivarianismo era el peligro incipiente, lo que significaría el retorno a las épocas más oscuras; hacia el gobierno, la amenaza de que en caso de que una profundización real de sus políticas hacia unas de tendencia socialista sería decretar la salida de Lugo; y hacia el norte, el convencimiento de que efectivamente el liderazgo vacilante de Lugo no era sino una pantalla para adentrar paulatinamente a Paraguay en el ALBA. En un cable del 22 de octubre de 2009, la embajadora Ayalde decía: “Es claro que él quiere mantener estrechas relaciones con los Estados Unidos con el fin de equilibrar la política y las percepciones y pueden haberse preocupado de que su rechazo del ejercicio Nuevos Horizontes puede haber dañado seriamente nuestras relaciones bilaterales. Las verdaderas intenciones de Lugo, sin embargo, no son claras. Seguimos teniendo dudas sobre si él tiene un plan para Paraguay o si un vacío de liderazgo le ha permitido convertirse en parte del plan de alguien más”²⁰⁶.

El 12 de noviembre un avión Hércules venezolano efectuó una escala técnica en el aeropuerto Silvio Pettrossi. La intromisión del comandante Chávez quedaba certificada. Aún cuando el mismo día había hecho una escala también un avión de las Fuerzas Armadas de EE.UU., según declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata. La opción por el Juicio Político se tornaba manifiesta. Los diarios nucleados en la SIP no darían más rodeos: “Lo que se dice hoy en la calle, en Paraguay, es que ya no se discute si se hará o no el Juicio Político contra Fernando Lugo, sino simplemente cuándo será”, publicaría La Nación²⁰⁷. El diario de Acero, editorializó:

“Más allá del gran bochorno gubernamental implícito en el enigmático incidente, lo que debe preocupar a la ciudadanía no es tanto que en esta ocasión hayan ingresado secretamente a nuestro país dos militares venezolanos con algún propósito "non sancto", sino cuántos de ellos –militares y civiles– pudieron haber ya ingresado de la misma manera, con la obvia complicidad de funcionarios del gobierno de Fernando Lugo, para tareas encubiertas de proselitismo político "bolivariano" marxista, (...) cabe recordar que cuando Salvador Allende asumió la presidencia de Chile, una de sus primeras medidas de gobierno fue importar clandestinamente gran cantidad de armas de Cuba para equipar a sus partidarios para las luchas callejeras, como las ya anunciadas aquí por los partidarios del presidente Fernando Lugo. (...) En su frenético afán por implantar en su país el modelo marxista-castrista, y ante la firmeza institucional de las fuerzas armadas chilenas, Allende buscó subvertir la estructura militar existente, alentando a un grupo de suboficiales en 1971 para dar un golpe cuartelero contra el comando en jefe de la Armada. A diferencia de lo que aquí está consiguiendo el presidente Fernando Lugo sin mayor costo político, en el final Allende no pudo doblegar a las fuerzas armadas chilenas, tradicionalmente institucionales. Los militares chilenos no eran golpistas; fue la oposición que los actos del presidente Allende provocaron en el seno de la sociedad chilena lo que finalmente impulsó el golpe militar de 1973. Igual cosa podría suceder en nuestro país si el presidente Lugo se empeña en imponer al pueblo paraguayo un modelo político autoritario, extraño a su identidad republicana, semejante al que quiso imponer en Chile Salvador Allende. Lugo asumió el gobierno con el 40,9 de los votos aunque los de su movimiento y otros de izquierda totalizaron menos del 3 por ciento, pero este

²⁰⁶ Wikileaks, disponible en: wikileaks.org/cable/2009/10/09ASUNCION617.html.

²⁰⁷ Op. Cit., BASE IS.

mandato ciudadano no le resulta suficiente para cambiar un sistema de gobierno por la vía democrática. Él lo sabe; por eso busca atajos de violencia y fuerza mediante el apoyo y los petrodólares de su mentor Hugo Chávez”²⁰⁸.

El verdadero constructor del intelectual colectivo opositor, el ABC Color presagiaba el escenario más oscuro y, cínicamente, responsabilizaba al gobierno de Lugo en caso de que gestase un proyecto político que no responda al sector dominante. Igual línea que las afirmaciones de Héctor Cristaldo publicadas en Última Hora: “lo que va a imperar es la ley del mbarete”²⁰⁹. Propagaba su propio miedo a un cambio del estatus quo: el terrorismo mediático disciplinante auguraba el peor escenario.

La objetividad conservadora

Armand Mattelart explica que durante el período de ruptura que significó el gobierno de la Unidad Popular en Chile, “cuando la burguesía se da cuenta de que la balanza entre clases no se inclina a su favor, su `instinto de preservación de clase` juega un rol predominante y no duda en abandonar los principios sagrados de su propia legalidad y objetividad, transformando los medios masivos de comunicación en un arma para recuperar su poder perdido”²¹⁰. En consecuencia, indica que siendo incapaces de generar consenso para su proyecto contrarrevolucionario, utilizan a los medios para organizar a aquellos que estaban insatisfechos con el gobierno. Ya no apuntan sus mensajes al ciudadano medio, aquel que se utiliza de referencia en la comunicación de masas, sino que apuntan a sectores específicos de la población para “avanzar sobre terrenos que normalmente pertenecen al arsenal de fuerzas de izquierda e imitar sus métodos (huelgas, demostraciones callejeras, movilizaciones de base, agitación de masas, etc.)”²¹¹. De modo que cubren, acompañan y estimulan lo que denomina los frentes de masas, como fueron el sindicato de camioneros, el colegio de médicos y las asociaciones comerciales en huelga. “Si en 1969 este periódico (El Mercurio) presumía de ser, por sus contenidos, sobriedad y seriedad, el Times de América Latina, en 1973 se había transformado en un auténtico panfleto político y en un afiche de campaña”²¹².

Esta mutación de las estrategias comunicacionales de los medios en periodos en los cuales los sectores dominantes no ostentan el poder político, se percibe en el accionar de los medios hegemónicos durante los gobiernos populares y anti neoliberales de América Latina. Los mismos medios que legitimaron los gobiernos dictatoriales de las décadas del 70`y 80`, a través de sus verdades objetivas, y sentenciaron el final de las ideologías durante los gobiernos neoliberales, informando con eufemismos las bondades de las privatizaciones de los servicios elementales y las

²⁰⁸ ABC Color, 22 de noviembre de 2009, disponible en: www.abc.com.py/articulos/sucia-maniobra-bolivariana-que-perjudica-a-las-fuerzas-armadas-41970.html.

²⁰⁹ Última Hora del 2 de marzo, disponible en: www.ultimahora.com/amenazan-un-nuevo-tractorazo-n507875.html.

²¹⁰ Armand Mattelart, *Para un análisis de clase de la comunicación: introducción a comunicación y lucha de clases 1*, 1ª ed., Bs. As., Ed. Cooperativa El Río Suena, 2010, p. 89.

²¹¹ *Ibidem*, p. 90.

²¹² *Ibidem*, p. 90.

exitosas empresas estatales, proclaman ahora discursos panfletarios y de barricada, desdibujan la separación rígida de los géneros periodísticos y homogenizan los diferentes estilos que utilizaban de acuerdo al grupo social que se dirigían. El oyente, espectador o lector de estos medios, consumirá un único y homogéneo discurso que desde arriba hacia abajo le será brindado por las propulsoras, por excelencia, de sentido.

Por eso, para Mattelart es indispensable analizar “las fluctuaciones en las alianzas de clase que determinan los objetivos y los destinatarios de los medios masivos”²¹³. Pues, en el caso paraguayo, la centralidad que tiene la tierra en los fenómenos de todo orden, clarifican y traslucen los intereses atravesados en los discursos que hegemonizan los medios masivos. Al respecto, el sociólogo Tomás Palau afirmó:

“Sea por los latifundios de antaño devenidos en campos sojeros, sea por los actuales latifundios ganaderos, el país no dejó de ser marcado por la herencia feudal, oligárquica y conservadora que lo marcó desde la guerra de la Triple Alianza. La tierra –en mucha mayor medida que en otros países de la región- sigue siendo el elemento mediador para la obtención de los símbolos de status social, de acumulación, de riqueza, y en consecuencia, de ejercicio del poder político. No es casual que la derecha política y el poder real (el económico) unifiquen sus acciones más que nunca durante la gestión Lugo para la defensa de los intereses de los latifundistas. De ellos derivan, todavía, la hegemonía política y la acumulación capitalista de riquezas”²¹⁴.

Y esa alianza que unificó sus acciones de manera coordinada y estratégica, buscó construirse como un bloque sin fisuras, disponiendo de la gran porción de los medios de comunicación masiva, para poder continuar con su proceso de acumulación –el que de algún modo vieron amenazado–. La amenaza, asimismo, no vendría de Fernando Lugo explícitamente, sino de la posibilidad que éste representaba en tanto cercanía con las fuerzas campesinas y con los gobiernos integracionistas. En consecuencia, hacia esos sectores serían apuntados los cañones demonizándolos, con el objetivo de que su propio miedo a verse perjudicados en su proceso de acumulación de riquezas, se trasladara al conjunto de la sociedad.

Si bien los medios masivos de Paraguay no lograron aglutinar y exacerbar las demandas de distintos sectores inconformes con el gobierno de Lugo, en un grupo social que se movilizara en su rechazo en pos de alcanzar una fractura institucional, se debió a que desde un primer momento, desde el inicio de su mandato, la táctica para destituir al presidente sería la del Juicio Político: descansando en el nuevo elemento incorporado en la Constitución de 1992, cuya intención fue la de democratizar la organización del Estado, la alianza solo buscó alcanzar los dos tercios para echar a Lugo.

La puerta de efectivizar un golpe de Estado con el aval de instituciones democráticas ya había sido abierta en la región con el golpe al presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Allí, el director de las operaciones de la contra nicaragüense desde la embajada de EE.UU. en Honduras, John Negro Ponte, sumó a su currículum la organización de un nuevo golpe de Estado, reuniéndose a poco menos de un mes de llevarse a cabo, con los principales actores del mismo: el general Romeo Vásquez Velásquez, a quien Zelaya quiso destituir de su cargo por insubordinación y la Corte Suprema volvió a restituir; Roberto Micheletti, líder del congreso y futuro presidente

²¹³ *Ibidem*, p. 91.

²¹⁴ En Codehupy (2012), *Yvypóra Derecho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2012*, Asunción, p. 236.

de facto; el asesor personal de Micheletti, Billy Joya Améndola, “quien en los años 80 había sido uno de los principales dirigentes del Batallón de Inteligencia 3-36, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos y fundador de los escuadrones de la muerte ‘Lince’ y ‘Cobra’”²¹⁵; con la Iglesia Católica, la Confraternidad de las Iglesias Evangélicas, con los propietarios de medios de comunicación y con el comisionado nacional de derechos humanos, Ramón Custodio²¹⁶. Al igual que en Paraguay, en este caso el golpe estuvo precedido por una crisis entre los poderes del Estado. Tras su intento de hacer una consulta popular para llamar a una asamblea constituyente que reformase la Constitución, Zelaya sería calificado de traidor a la patria por la Corte Suprema de Justicia, que ordenaría su secuestro el mismo día que se había convocado la consulta, y el Congreso nombraría en su lugar al líder del Poder Legislativo, Micheletti. Tan solo tres años acontecieron de este antecedente para que la nueva modalidad de golpes de Estado volviera a blandirse.

Sin embargo, ante la no consecución de un grupo social numeroso que se identificara con las consignas del sector y se movilizara al respecto, más allá de los tractorazos urgidos por el mismo grupo desestabilizador, el reducido colectivo propietarios de medios de comunicación que ostentan casi la totalidad del espacio aéreo por donde circulan las comunicaciones, encabezados por el constructor ideológico opositor, sentenciaron al campesino como invasor y al bolivarianismo como la barbarie refritada. El cerco impuesto a tales nociones no daría la posibilidad de la repregunta sobre la propiedad de la tierra que los campesinos reclamaban, en consecuencia, tampoco sobre los supuestos pedidos de desalojo de Marina Kue. El enfrentamiento, como adujo el ABC Color, había sido entre “policías e invasores”²¹⁷, como ya se venía machacando, fuertemente, desde el conflicto en Ñacunday. Al igual que las conexiones de los campesinos con el EPP y de este con la FARC. El avión venezolano que aterrizó en el aeropuerto paraguayo, así como el campesino que exigía tierras para vivir, eran los invasores de su objetividad conservadora.

La Tv Pública y la resistencia

El micrófono se abre. “Contra los corruptos y enemigos del pueblo, ¡viva el Paraguay!”, vocifera un joven en el centro de la plaza de Armas. Es mayo de 2012, falta menos de un mes para el golpe y la reciente Televisión Pública empieza a funcionar con vitalidad. Con esfuerzo y sin apoyo del Congreso, la TV del Estado se había hecho camino con informes sobre los movimientos sociales, la réplica de un mini documental sobre los pueblos originarios argentinos –brindado por canal Encuentro– y, sobre todo, con su micrófono abierto. Tan solo con una cámara y un micrófono, les ofrecían su lugar en la pantalla a los vecinos de las distintas barriadas. De igual modo, habían concurrido a la plaza en la que una manifestación calificaba a los diputados de chorros

²¹⁵ Op. Cit., Telma Luzzani, p. 152.

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ ABC Color, 15 de junio de 2012, disponible en: www.abc.com.py/nacionales/policias-fueron-abatidos-con-perdigones-414662.html.

y a los senadores de ratas. Pues, por medio de dos proyectos habían pretendido aumentar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral en 215 mil millones de guaraníes, de los cuales 150 mil millones se destinarían para salarios de funcionarios que realicen registros en el padrón oficial, lo que era visto como una iniciativa para financiar a operadores políticos de los partidos tradicionales de cara a las elecciones del año siguiente. Finalmente, los proyectos serían desestimados pero el antecedente del descontento de las clases medias asunceñas transmitido abiertamente, quedaría registrado.

Dos semanas más tarde, el director de la TV Pública, Marcelo Martinessi, se encontraba reunido con el presidente de la República para firmar un acuerdo para la implementación de cinco repetidoras, lo que significaría un crecimiento sustancial. Hasta entonces su alcance era bastante limitado, ya que las frecuencias de mejor rango habían sido todas licitadas por canales privados. Quienes quisieran ver el canal público debían hacer un arreglo especial en su receptor para poder captar la señal; las desventajas eran formidables. Entonces, quien solo había asistido tres veces desde su creación al canal –a contrapartida de las versiones que habían presagiado el canal como la voz oficial del gobierno–, fue llamado por su asistente: “Fernando Lugo, teléfono”²¹⁸, le dijeron. El presidente dejó la reunión y ya no volvió, era el 15 de junio de 2012 y desde Curuguaty llegaban las confusas noticias del asesinato de policías y campesinos. Y a la semana el golpe.

“Entonces salimos todos los compañeros de TV Pública, por primera vez usamos la pantalla, y ustedes pueden ver eso en Youtube, leímos en guaraní y en castellano un testimonio diciendo que hasta ahí podíamos ser responsables del canal, que a partir de ahora no sabíamos lo que iba a pasar y, básicamente, no podíamos hacernos cargo de lo que pasara con esa pantalla. Y unas horas después llega un señor, y se arma toda una cuestión con la policía, que quería saber si se iba a seguir transmitiendo micrófono abierto, que era el espacio que le estábamos dando a la ciudadanía”²¹⁹, relata Martinessi sobre la irrupción de Federico Franco también en la TV Pública, como siguiendo algún manual sobre golpismo.

Paulatinamente, la resistencia que se había llevado a cabo en la plaza empezó a concentrarse en la puerta del edificio de la Televisión Pública. Como no tenían el equipo necesario para transmitir en directo desde la plaza, y tampoco nadie le quiso alquilar uno, el director del canal había decidido abrir el micrófono en la puerta, con un cable que iba hasta el interior del edificio. Durante el domingo 24 y el lunes 25 de junio, dirigentes políticos, sociales, de derechos humanos y músicos desfilarían por allí, proclamando discursos en contra del gobierno golpista. Incluso Lugo daría un discurso bastante más fuerte que el que había ofrecido al momento de ser destituido.

Con el correr de los primeros tres días, la resistencia que se había agolpado en las puertas del canal tras el atropello a la democracia, y en consecuencia del símbolo más evidente de que Franco era un déspota, es decir, el atropello a la Radio Nacional y a la Televisión Pública, la efervescencia de la concentración se iría diluyendo. El periodista Pelao Carvalho lo explica de la siguiente manera:

²¹⁸ Op. cit., Larsen y Varela, entrevista a Marcelo Martinessi.

²¹⁹ *Ibidem*.

“Se encerró en una cuadra cuando en ese momento había la posibilidad de expandir esa sensación hacia otros lugares de la ciudad. No se hicieron otros cortes. Ninguna calle fue cortada además de esa. Entonces, digamos, hubo una concentración que fue necesaria en un momento, los primeros dos, tres días fue necesaria, pero luego esa concentración fue un autobloqueo. En vez de expandir la situación, se concentró en un lugar. Que era un lugar que, pues, claro, servía desde afuera; la televisión transmitía lo que ahí estaba pasando, pero no pasaba nada más en ninguna otra parte. O sea, había un temor muy grande, y ahí estaba ese temor, donde se confundía ser pacíficos con no hacer nada. O sea, hagamos aquí nomás. (...) No sé cómo decirlo, pero digamos que la fuerza de eso se agotó en sí misma”²²⁰.

“¿Alcanza con invertir los signos de los mensajes para destruir el carácter de clase de los aparatos de comunicación?”²²¹, se preguntaba Mattelart. “¿Es factible poner contenidos y visiones de mundo favorables a los proyectos revolucionarios en formas narrativas que fueron diseñadas para perpetuar un orden que está contra de esos proyectos?”²²². Como estas crónicas, los medios operan sentidos sobre sus lectores/espectadores. Esa unicidad del mensaje fue acompañada por el ritmo ciudadano, la derrota de la esperanza al gobierno de Lugo. Numerosos periodistas, incluso, reafirmaron las voces de los patrones. Los medios comunitarios lejos estuvieron del alcance de las grandes corporaciones mediáticas y su capacidad de hegemonizar un discurso. El orden y la normalidad en la transición de gobierno proclamada por las tapas de todos los diarios asunceños, fue reafirmada con el movimiento cotidiano de la ciudad; los hombres y mujeres tomando el micro para ir a sus trabajos, como de costumbre; el tránsito cotidiano de las calles; la entrada y salida de los colegios atestada de chicos.

El final corrobora la tesis de los más escépticos; el gobierno de centro izquierda concluyó servilmente para los fines más espurios de dilatar el avance de la lucha de las unidades populares. Poco ha podido hacer para transformar las realidades más injustas. El poder fáctico, el de los dueños de la tierra y de todo, no se ha transformado ni un ápice. La integración latinoamericana retrocede un paso, es golpeada. La unión de Venezuela al MERCOSUR, en Paraguay será vista como otro atropello de los mismos países que han destruido el sueño de la prosperidad guaraní, tan cerca de efectivizarse en aquellos lejanos años del siglo XIX.

La autoafirmación del orden de ciertos sectores no se explica sino como producto de una sociedad adentrada en el terror por largas décadas; sin embargo, el miedo paralizante que se utilizó para disciplinar a las sociedades latinoamericanas, agotó sus reservas. No hay enemigos invencibles ni imperialismos sin fisuras que, como todos, se terminan. El sector productivo, esa correa de transmisión que es la oligarquía paraguaya vislumbró en su accionar su miedo lacerante ante la posibilidad de una transformación, y es porque ésta existió. Una lección aprehendida que refuerza la voluntad transformadora de la sociedad paraguaya, la que cada vez crea más vasos comunicantes entre los sectores campesinos, históricamente combativos, con los movimientos de cambio de la ciudad.

²²⁰ Entrevista a Pelao Carvallo.

²²¹ Op. Cit., Mattelart, p. 96.

²²² *Ibidem*.

Neoliberalismo tardío

“Ni me arrepiento ni me avergüenzo de haber obtenido la presidencia en esas condiciones”²²³, afirmó Federico Franco en su gira por España en abril de 2013, cuando llevaba poco más de nueve meses al mando del Paraguay, tras la destitución de Fernando Lugo. Los roces entre el presidente y su vice habían surgido desde los inicios, incluso antes de formada la Alianza Patriótica para el Cambio, articulación que los catapultaría a la victoria política. El liberal puso el grito en el cielo cuando en 2007, durante la etapa preelectoral, sus compañeros de partido votaron por acompañar a Lugo en la vicepresidencia descalificando, de esta forma, su propuesta que pretendía que el liberalismo presentara candidato propio. Franco veía así derrotadas sus aspiraciones presidenciales, y la alianza tendría como único punto en común poner fin a los 61 años de gobierno colorado: el nuevo partido se asemejaba más a un matrimonio forzado que a un proyecto político.

Desde un inicio, la prioridad que el presidente le otorgó a los colectivos luguistas y a las corrientes liberales que discrepaban con Franco, para ocupar cargos en la administración estatal generó malestar en el vicepresidente. Blas Llano en Justicia y Trabajo, Efraín Alegre en Obras Públicas y Comunicaciones, Cándido Vera Bejarano en Agricultura y Ganadería y Martín Heisecke Rivarola en Industria y Comercio, fueron los representantes del liberalismo en el nuevo gobierno. Ninguno de los cuatro pertenecía a la facción de Federico Franco. La prensa comenzó a hacerse eco de este tira y afloje entre el presidente y su vice, y a fines del primer periodo de gobierno el diario Última Hora tituló: “Lugo y Federico cierran el año con elevado pico de tensión”²²⁴. Por su parte, Franco tampoco se quedó atrás y junto a sus amigos parlamentarios votaría sistemáticamente en contra de los proyectos presentados por Lugo. Además comenzaría a aliarse con el ex presidente Nicanor Duarte Frutos y el general Lino Oviedo, líder del partido Unace, de quienes se rumoreaba que tramaban derrocar a Lugo, incluso antes de que este asuma la presidencia. Diecisiete días después de estar en el poder, el ex obispo los denunciaría por “intenciones golpistas”²²⁵.

Siempre a la sombra, aunque constantemente anunciando a la prensa que estaba perfectamente listo para ocupar el cargo de presidente en caso de que este fuera destituido, Federico Franco no perdió oportunidad para intentar llevar a juicio político a su compañero de fórmula. Incluso, en junio de 2012, minutos antes de que el presidente comenzara a ser juzgado por el congreso paraguayo, dio su último batacazo al declarar: “No estuve de acuerdo con el presidente Lugo en muchas de sus decisiones de gobierno porque fui electo, igual que él, el 20 de abril de 2008 para administrar al país pero él me ha ignorado”²²⁶. Finalmente, el 25 de junio de 2012, sus planes presidenciales se concretarían y lograría ponerse la banda tricolor cruzando su pecho. A partir de ahora, Franco estaba acreditado como el nuevo mandatario paraguayo hasta agosto de 2013, fecha en la que Fernando Lugo debía concluir su período presidencial.

El nuevo Gobierno vendría con cambios y nuevas incorporaciones en el gabinete: Carmelo Caballero (PLRA) se pondría al frente del Ministerio del Interior, quien el 7 de septiembre se reuniría solo con las viudas de los policías muertos en Curuguaty, excluyendo a los familiares de los campesinos que habían sido asesinados y dejando ver a las claras la postura del actual gobierno en cuanto a la cuestión campesina; José Félix Fernández

²²³ Para Federico Franco, muerte de Chávez fue un "milagro". Infobae América. 3 de abril de 2013.

²²⁴ Última Hora, domingo 21 de diciembre de 2008.

²²⁵ Conferencia de prensa televisiva de Fernando Lugo, 1 de septiembre de 2008.

²²⁶ Declaraciones de Federico Franco. 21 de junio de 2012.

Estigarribia (PLRA) asumiría el mando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre denuncias por la apropiación ilegal de 6.000 hectáreas de tierras²²⁷ ; María Liz García de Arnold (UNACE) sería la titular en el Ministerio Defensa, cuyas medidas consistieron en reforzar las fuerzas militares para combatir al enemigo interno, el EPP, y al externo, el eje bolivariano; Horacio Galeano Perrone (Movimiento Tetã Pyahu), un experto en asuntos militares, se constituiría como el nuevo Ministro de Educación; María Lorena Segovia Azucas (PLRA) en Justicia y Trabajo, donde una de las primeras medidas consistió en avalar el despido de casi 200 huelguistas de la empresa española Prosegur; Antonio Arbo Sosa (independiente) en Salud Pública, un hombre fuertemente vinculado al sector privado de la medicina; y Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) en Obras Públicas, quien terminó su mandato envuelto en un escándalo de corrupción²²⁸. Solo habían pasado diez días de la masacre ocurrida en las tierras de Marina Kue cuando todo estaba perfectamente ordenado para recomenzar.

“Hace pocos días llorábamos la muerte de muchos compatriotas en la zona de Curuguaty. La mejor manera de honrar las muertes de estos compatriotas, oficiales de la policía y ciudadanos civiles paraguayos, es iniciando el verdadero desarrollo rural sostenible con énfasis en la agricultura familiar para que el próximo gobierno tenga un censo y un catastro que pueda seguir los planes”, había expresado Franco en su discurso de asunción; sabido es en Paraguay que la reforma agraria ha formado parte de todas las plataformas políticas, pero ninguna ha tenido la verdadera intención de llevarla a cabo. Franco no fue la excepción, pese a sus anuncios con bombos y platillos de que finalmente realizaría la reforma, en menos de tres meses en el poder ignoró y violó el tratado internacional de Cartagena²²⁹, que rige sobre la seguridad alimentaria en el caso de los organismos genéticamente modificados y autorizó por decreto el ingreso de algodón transgénico y su siembra sin respetar las normas de seguridad en su producción ni el riesgo de contaminación. Esta determinación lo llevaría a ser catalogado como “presidente transgénico”. Las multinacionales Cargill y Monsanto se regocijaban mientras el ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, anunciaba: “Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a disposición de todos los productores”²³⁰.

“Federico el Breve”, como sería llamado por distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, no solo habló de Curuguaty en la noche que asumió la presidencia; también anunció que combatiría el nepotismo de la función pública, pero seguidamente nombró a su cuñada Mirtha Vergara, esposa del senador Julio César Franco, consejera de la Binacional Itaipú, dejando que su promesa se desvanezca en el aire. La

²²⁷ Investigación realizada por El Servicio Jurídico Integral Para el Desarrollo Agrario (Seija). A la hija del ministro, Marta Elvira Fernández Lloret, le fueron adjudicadas unas 3.208 hectáreas en Fuerte Olimpo (por Resolución Nº 538 del IBR), aunque por ese entonces la joven estaba viviendo en España y trabajaba en la Fundación de la Infanta Cristina. También la esposa del canciller, María Teresa Lloret de Fernández, fue beneficiada con tierras destinadas a la Reforma Agraria, ya que unas 3.000 hectáreas le fueron adjudicadas en la zona del Chaco.

²²⁸ El ministro Enrique Salyn Buzarquis fue denunciado por la contratación directa de una empresa italiana para una consultoría internacional sobre el área vial y de infraestructura, siendo que los estudios ya habían sido realizados. Además la empresa vinculada a ANAS S.P.A. (Anas International Enterprise S.P.A.) cobró el dinero pero nunca presentó el trabajo.

²²⁹ El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica es un instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados producto de la biotecnología moderna. Fue aprobado en febrero de 1999 en Cartagena, Colombia y puesto en funcionamiento a partir del 20 de enero del 2000 en Montreal, Canadá.

²³⁰ Anuncio del ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, 3 de octubre de 2012

represa siempre le había quitado el sueño, principalmente porque durante el mandato de Fernando Lugo este puso al frente a Mateo Balmelli, su rival en las internas y primarias de 2007, quien llamó públicamente al vicepresidente: "Fraude-rico Franco", ya que lo acusó de ganarle con ayuda de maniobras fraudulentas. En ese momento a Franco no le quedó otra que aceptar la decisión del ex obispo, pero no sin consecuencias políticas: la brecha entre ambos comenzaría a ser insoslayable.

No fue su cuñada la única en disfrutar de los beneficios de pertenecer al clan Franco, ya que según el informe del sitio web Paraguay Resiste, 27 familiares del presidente comenzaron a trabajar en importantes cargos públicos acompañados de un jugoso salario, luego de que este asumiera las riendas del país²³¹. Uno de los más polémicos fue el nombramiento de su primo, Víctor Rivarola, como titular de la Secretaría de Acción Social (SAS), quien a pocos meses de asumir fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores por echar injustificadamente a más de 350 personas e intentar partidizar los programas que allí se desarrollaban²³². Como si esto fuera poco, los ánimos se crisparon aún más cuando en octubre de 2012, el hijo del presidente, Iván Franco, celebró su matrimonio en Mburuvicha Róga²³³, y aunque Franco convocó a una cadena nacional para justificarse, donde argumentó que la boda sería pagada por su familia sin usar dinero del Estado, los reclamos y las pancartas llegaron hasta la puerta de la residencia presidencial para protestar contra un evento que rozaba lo monárquico. "Nos dieron este regalito"²³⁴, había afirmado el hijo del presidente al diario Última Hora, días antes de celebrarse el matrimonio.

Del Atlántico al Pacífico

A inicios de 2013, el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy esperaba a Federico Franco con los brazos abiertos, y no era para menos, los demás integrantes del Mercosur, entre ellos Argentina y Brasil se habían dado el tupé de expropiar empresas de dicha nacionalidad. La poca injerencia española en la política latinoamericana no le dejaba otra alternativa que aliarse a países aislados de los gobiernos integracionistas del continente, como se convertiría el Paraguay tras la destitución de Lugo, donde Unasur y Mercosur le habían dado la espalda a tan solo siete días de que Franco asumiera la presidencia. El nuevo mandatario paraguayo comprendió rápidamente el guiño de ojo de Rajoy y en uno de los programas más vistos de la TV española invitó a los empresarios de la "madre patria" a invertir en Paraguay: "vine dispuesto a seducir, a encantar al empresariado español"²³⁵. A lo

²³¹ "Federico Franco, Su Conocido Nepotismo Refleja Numerosos Parientes En Cargos Públicos". Informe publicado en el sitio web Paraguay Resiste.

²³² A través de la incorporación de operadores políticos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), como facilitadores comunitarios.

²³³ Casa del jefe en guaraní.

²³⁴ "Hijo de Franco usará Mburuvicha Róga para casarse". Publicada el 14 de septiembre de 2012 en el diario Última Hora.

²³⁵ Entrevista al presidente de Paraguay, Federico Franco, en Los Desayunos, 02 de abril de 2013.

que luego agregaría: "Paraguay no es una marca muy conocida, Paraguay es una potencia (...)236", comparando de esta manera el país con una empresa. El rumbo paraguayo giraba cada vez más hacia la derecha.

El unánime rechazo de los presidentes latinoamericanos, que llevó incluso a que retiren sus embajadores de las tierras paraguayas, daba cuenta de la fragilidad institucional en la que el país comenzaba a estar inmerso. El Mercosur emitió un comunicado donde expresó que la destitución de Fernando Lugo fue "una ruptura del orden democrático"²³⁷ donde "no se respetó el debido proceso"²³⁸, y de esta manera sancionó a Paraguay hasta abril del 2013, fecha en que se realizarían las nuevas elecciones. Amparados en el Protocolo de Ushuaia I sobre Compromiso Democrático, acordado en 1998, los integrantes del bloque regional apartaron diplomáticamente al país gobernado por Franco, pero sin aplicarle penas económicas.

En su paso por el país ibérico, el presidente golpista tampoco ahorró en calificativos para el ex mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien había fallecido hacía un mes, acusándolo de haber actuado como instigador de una supuesta "sublevación" de las Fuerzas Armadas ocurridas el fatídico 22 de junio, cuando Fernando Lugo fuera depuesto. "Es un milagro que el señor Chávez desapareciera de la faz de la tierra porque le hizo mucho daño a mi país"²³⁹, expresó el entonces presidente paraguayo, quien no se cansaría de vincular al gobierno de Caracas con el supuesto EPP y las FARC colombianas. Seguramente su homónimo español se hubiera sentido muy orgulloso de él.

La conflictiva relación Paraguay – Venezuela data desde la presidencia de Nicanor Duarte Frutos. El bolivarianismo como emblema del comunismo es de temer en las tierras guaraníes, quizás por ello, el Congreso paraguayo actuó como un fortín amurallado y sucesivamente trabó la entrada del país al Mercosur. En este cuadro de situación, un dato no menor resultan las denuncias realizadas por Hugo Chávez contra senadores paraguayos, a quienes acusó de pedirles dinero a cambio de aprobar el ingreso de Venezuela al bloque regional: "Nos pedían dinero a nosotros para permitirnos entrar al Mercosur. Le dije a Nicolás: 'pero mándalos largo al cipote' (lejos). Son unas mafias de verdad, unas verdaderas mafias pidiendo dinero"²⁴⁰. Quien solicitaba la coima no era otro que el senador de Unace, Jorge Oviedo Matto, quien está vinculado a números casos de corrupción por la venta de tierras sobrefacturadas al Estado. Pedía nada más ni nada menos que 12 millones de dólares. Al negarse el comandante venezolano, el antichavismo se recrudeció en el Congreso paraguayo y los argumentos de la Guerra Fría reflataron, apareciendo Paraguay, con Federico Franco a la cabeza, como el país capaz de derrotar al socialismo del siglo XXI.

"Nos tocó frenar el avance autoritario de la región y apuntalar la democracia de manera firme y tenaz"²⁴¹, había declarado Franco, a poco de finalizar su mandato el 1 de julio de 2013, en su discurso en la sala bicameral del Parlamento, mientras los miembros juraban en sus cargos. No contento con eso, Franco se refirió en términos de "persecución implacable"²⁴² al apartamiento del Paraguay por parte del Mercosur. El país guaraní iría

²³⁶ Entrevista al presidente de Paraguay, Federico Franco, en Los Desayunos 02 abr 2013

²³⁷ "Cumbre de Mendoza", realizada entre los días 26 al 29 de junio de 2012

²³⁸ "Ibidem."

²³⁹ Para Federico Franco, muerte de Chávez fue un "milagro". Infobae América. 3 de abril de 2013.

²⁴⁰ "Confirman denuncias de Chávez sobre corrupción en senado paraguayo", en teleSUR, 9 de julio de 2012.

²⁴¹ Último informe de gestión de Federico Franco ante el Congreso, 1 de julio de 2013.

²⁴² Ibidem.

virando su rumbo del Atlántico al Pacífico, y al año siguiente celebraría su incorporación como observador a la Alianza del Pacífico, el grupo económico nacido en 2011 de la mano del presidente neoliberal peruano, Alan García e integrado por Chile, Colombia, Perú y México. Esta especie de nuevo ALCA propone, entre otras cosas, la privatización de los servicios básicos, respondiendo fielmente a todos los pedidos enviados desde Washington y apuntando a desestabilizar los bloques regionales de América Latina como así también a China, a quien buscan dejar fuera del tablero de la geopolítica mundial.

Finalmente, en una reunión especial en Brasilia celebrada el 31 de julio de 2012, el Mercosur permitió el ingreso de Venezuela como miembro pleno, ya que hasta el momento el único escollo para su incorporación lo representaba el Congreso de Paraguay. Salido este del bloque político-económico no había motivo para que Venezuela no formara parte. El gobierno estadounidense de Barack Obama perdía una importante pulseada, ya que su principal objetivo en el “patio trasero” había sido aislar a Venezuela del resto de los gobiernos latinoamericanos.

Río Tinto Alcan

“Él gobernó para un grupo de poderosos. Eso fue lo que pasó. Eso es un poco la síntesis de todo”²⁴³, explica el periodista José María Quevedo, autor del informe de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) sobre la Masacre de Curuguaty. Las garras neoliberales estaban sobre Paraguay, donde los grandes favorecidos serían los sojeros, los empresarios, los ganaderos y las empresas multinacionales en detrimento de los sectores campesinos y obreros. La contratación del economista estadounidense, Jeffrey Sachs, como asesor de la presidencia en septiembre de 2012 era otro claro signo de que el neoliberalismo estaba pisando fuerte en suelo paraguayo. En 1985, el chico boy había aconsejado a Bolivia ante la crisis que enfrentaba, utilizar la terapia del shock donde los remedios no serían otros que la privatización de las minas y del petróleo, la baja masiva de los salarios, y del empleo, acompañado de una excepcional apertura económica y una reducción de los gastos públicos. El viejo modelo se replicaría en Paraguay, a lo que se sumaría que el economista estaría a la cabeza de la negociación con la multinacional Río Tinto Alcan, interesada en instalar una fundidora de aluminio en el país. “Se avanza, así, en la concreción de una planta de aluminio que llevará a precio regalado nuestra energía hidroeléctrica, empaquetada en forma de lingotes de aluminio”²⁴⁴, expresaba el parlamentario del Mercosur y secretario de Relaciones Exteriores del Frente Guasu, Ricardo Canese.

Durante la presidencia de Lugo, las negociaciones habían sido interrumpidas por las pretensiones que la mega minera tenía para con el Paraguay, pero ni lerdo ni perezoso, al segundo día de estar en el poder Franco reabrió las negociaciones y les ofreció que la energía sea subsidiada por el Estado, de esta forma los paraguayos se harían cargo de costear los gastos de una empresa que ganaba miles de millones de dólares al año. Ese era el

²⁴³ Entrevista José María Quevedo.

²⁴⁴ Con RTA, *¿qué sentido tiene abrir negociaciones?*, escrita por Ricardo Canese, Ex coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, del 24 de septiembre de 2012.

objetivo central de la multinacional, que siempre había estado interesada en la energía producida por la hidroeléctrica Binacional Itaipú, que está considerada como la segunda mayor del mundo, y exigía nada menos que un contrato hasta el 2035. La celeridad de este proceso hizo que los paraguayos lancen una campaña llamada “No al golpe de Río Tinto Alcan”, vinculando a la minera con el golpe de estado efectuado a Fernando Lugo. De más está decir que ninguno de los estudios de impacto ambiental correspondientes fueron hechos y tampoco importó los procesos judiciales en otros países, en los que estaba involucrada la empresa canadiense: Estados Unidos, Canadá, Nueva Guinea, Papua y la República Popular China.

Finalmente, en diciembre de 2012 Franco puso su firma en un preacuerdo, sellando así los destinos del Paraguay, en una negociación que más de uno calificó de ser a las apuradas y a puertas cerradas. Poco importaron estas acusaciones a Federico Franco, quien desde los inicios había manifestado su interés personal en la multinacional y ahora, con su firma en el documento se sentaba a la mesa, expectante, buscando sacar la mejor tajada de un negocio que atentaba contra la soberanía nacional. Pero su sucesor, Horacio Cartes, si bien en un primer momento se manifestó a favor de la presencia de la minera en el país, finalmente la rechazó negándole el subsidio energético, lo que lo acercó al Frente Guasu y hasta le valió una conversación cara a cara con el presidente depuesto, aunque previamente este había afirmado que no se reuniría con quienes habían votado a favor de su expulsión del poder. La reunión desconcertó a la izquierda paraguaya que miraba atónita cómo el ex obispo se sentaba a negociar con uno de los actores que había acusado de ser el responsable de su destitución. Pese a esto, el 17 de mayo de 2013 Fernando Lugo recibió en su casa de Lambaré al nuevo presidente electo, llegando a afirmar que las agendas del Partido Colorado y el Frente Guasu coincidían.

Incluso el senador Julio Velázquez, uno de los más cercanos a Horacio Cartes, aseveró: "Nosotros vamos a buscar la gobernabilidad y creo que como equipo político, mirando un poco el futuro, la ventaja con el Frente Guasu es que, siendo nosotros 19 y ellos 5, tenemos ya una mayoría cómoda para que se puedan llevar adelante los proyectos país"²⁴⁵, es que el nuevo gobierno no había logrado mayoría en el Congreso y la alianza con los luguistas resultaba clave para garantizar que sus proyectos llegasen a buen puerto. La reincorporación de Paraguay a los bloques regionales Unasur y Mercosur eran de vital interés para Cartes, quien recibía de las manos de su antecesor un país antiregionalista, nadando a contracorriente de sus vecinos.

Federico Franco, representante del Partido Liberal Radical Auténtico, dejaba la presidencia traicionando las bases y la historia del partido que lo había llevado al poder. El mismo que se había consolidado como un importante foco de resistencia a la sangrienta dictadura de Stroessner ahora era un fiel servidor de las elites empresarias y los intereses foráneos. “Acá no hay golpe”²⁴⁶, había asegurado el día en que asumió el mando del país, mas dejaba el poder bajo la calificación de golpista y corrupto. “Se va, se va Frauderico, se val el golpista ladrón”, sonaba por las calles de Asunción el día en que Franco se despedía de la presidencia.

²⁴⁵ “Cartes inició tratativas con FG con el objetivo de lograr gobernabilidad”, publicado en Última Hora el 7 de mayo de 2013.

²⁴⁶ Discurso de asunción de Federico Franco.

La era Cartes

“Él no es un colorado, el compró al partido, alquiló al partido, y cuando armó el nuevo gabinete lo comprobó”²⁴⁷, expresa el sociólogo Ramón Fogel al referirse al nuevo presidente paraguayo, Horacio Cartes, quien fue elegido el 21 de abril de 2013 con el 45, 91 % de los votos, y pasó a ejercer el mando del país a partir de agosto del mismo año. El empresario de 56 años devenido en político se convertiría en el primer presidente en ser electo sin haber emitido un voto en toda su vida. Hasta el momento su perfil estaba por fuera del mundo político, pero su presencia sería de vital importancia en el Partido Colorado si deseaban volver al poder, no por el carisma o la popularidad política de Cartes, un sujeto casi desconocido en este ámbito, sino por sus millones de dólares que podían costear cómodamente la campaña.

Si a la alianza entre Lugo y Franco podía comparársela con un matrimonio forzado, a la realizada entre Horacio Cartes y el Partido Colorado puede comparársela con un acuerdo individualista entre dos sectores de la oligarquía que no tienen nada en común más allá de ganar las elecciones y el mutuo beneficio económico, el proyecto político era nuevamente el gran ausente. “Soy capaz de poner plata de mi bolsillo para gobernar sin que los políticos me molesten”²⁴⁸, había enunciado el empresario días antes de las elecciones, mostrando sus ansias de poder absoluto y distanciándose hasta de los políticos de su propio partido, confundiendo al Estado con una de sus empresas, a las que puede manejar a su gusto y piacere y donde los trabajadores tiene estrictamente prohibida la organización sindical. Su slogan de campaña era “el nuevo rumbo paraguayo”, y claro que lo sería: Paraguay empezaría a ser gobernada como una factoría privada.

“Inquieto por el curso político del país bajo el gobierno izquierdista-liberal filochavista”²⁴⁹, como afirma él mismo en su página web, se sumó al Partido Colorado en 2009, desde donde formó un nuevo movimiento llamado “Honor Colorado”, cuyo nombre lleva sus iniciales. Un año y medio después la agrupación modificó su reglamento interno, donde anuló la cláusula que establecía que para presentarse como candidato a presidente sus miembros debían haber militado en el movimiento durante 10 años; fue así que con este cambio hecho a su medida, Cartes, pudo postularse únicamente con cuatro años de afiliación. El empresario que pasó de ser un repartidor de cigarrillos a inicios de los años 90` a multimillonario y dueño de un grupo empresario que lleva su apellido, formó desde allí su nuevo gabinete: un grupo de tecnócratas de visión netamente empresarial, formados en Estados Unidos y bastante lejanos del mundo político, que ni siquiera hablaban guaraní, una de las dos lenguas oficiales del Paraguay. Parecía que el empresario ya casi ni recordaba el partido que lo había llevado al poder.

Durante la campaña electoral contrató como su mano derecha a Francisco Javier Cuadra, ex vocero del dictador chileno Augusto Pinochet, quien además operaba como planificador estratégico de las empresas de Cartes desde hacía más de 15 años. Incluso, Cuadra había arribado al país días antes de la destitución de Fernando Lugo, para rápidamente comenzar a asesorar a quien en ese entonces era precandidato a las elecciones

²⁴⁷ Entrevista a Ramón Fogel.

²⁴⁸ El narcopresidente de Paraguay. Tiempo Argentino. 24 de abril de 2013.

²⁴⁹ www.honorcolorado.com.py

de 2013. Así comenzaba a jugar un rol clave en la política nacional una persona que era acusada de criminal y de más de un delito de corrupción, entre ellos, el desvío de fondos de gastos reservados del Gobierno chileno hacia los Estados Unidos. Para consolidar el equipo, Cartes sumó al ecuatoriano Roberto Izurieta, experto en marketing político, quien cumplía iguales funciones que Cuadra durante el gobierno del neoliberal Jamil Mahua, presidente que a fines de mayo de este año fue condenado a 12 años de prisión por malversación de fondos públicos. Tanto Cuadra como Izurieta dirigirían desde las sombras los hilos del nuevo rumbo paraguayo.

Parecía que las agujas del reloj en el país guaraní iban hacía atrás, hacia una época que se empeñaba en seguir viva. Fue así que durante su primer discurso como presidente, Horacio Cartes sostuvo que los grupos armados “no van a marcar la hoja de ruta”, y una clara muestra de que hablaba bien en serio fue el nombramiento de Eladio Loizaga como ministro de Relaciones Exteriores, quien había formado parte del gobierno del dictador Alfredo Stroessner e incluso había participado en 1966, de la Liga Anticomunista Mundial, que avaló la aplicación del Plan Cóndor en América Latina: la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para la persecución de disidentes políticos durante la década del 70`. La línea rectora de Loizaga no sería otra que la de introducir al país en la Alianza para el Pacífico y de esta manera debilitar los bloques integracionistas regionales. Como si con esto no bastara, Cartes intentó poner al nieto del dictador, Alfredo "Goli" Stroessner, como embajador ante las Naciones Unidas, pero la presión popular hizo que el nuevo presidente tenga que dejar de lado estas pretensiones.

Las vinculaciones de Horacio Cartes con Alfredo Stroessner provenían de su padre, el que había formado parte del círculo del dictador. Durante estos años, el joven Horacio se sumó a la casa de cambio Humaitá donde comenzaría a amasar su primera fortuna. De 1985 data la primera denuncia en su contra, por la creación de empresas fantasmas para simular importaciones, ya que en ese momento regía una medida oficial de fomento a la actividad agrícola, que permitía la compra de maquinaria e insumos al tipo de cambio oficial de 240 guaraníes, cuando el paralelo era casi el doble. La ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil, fue el lugar elegido por el nuevo empresario para estar lejos del alcance de la justicia y allí comenzó a vincularse con Fahd Jamil, un libanés naturalizado brasileño, que tenía un largo prontuario por tráfico de drogas, lavado de dinero y evasión fiscal. Incluso, el apodado “Rey de la frontera” en una entrevista por Radio Amambay en abril de 2013 se refirió a Cartes, y dijo: “(...) mirando su pasado, su capacidad para manejar sus empresas, le será mucho más fácil manejar el país”²⁵⁰. El narcotraficante más temido de la Triple Frontera elogiaba al nuevo presidente paraguayo, que se sentaba cómodamente en el sillón de los López dispuesto a generar ganancias para llenar los bolsillos de la clase acomodada de Paraguay y defender los intereses foráneos.

Es que si por algo era conocido Horacio Cartes era por las denuncias en su contra que iban desde tráfico de drogas hasta lavado de dinero. De hecho, el primer informe de la Interpol sobre sus maniobras data de 1988. Parece que sus más de 20 empresas no habían generado sus ganancias dentro del marco de la ley, prueba de aquello es que en el año 2000 la Secretaría Nacional Antidrogas encontró en su estancia Nueva Esperanza, ubicada en la zona de Cerro Kuatiá en Amambay, una aeronave con matrícula brasileña con un cargamento de 20.100 kilos de cocaína cristalizada y 343.850 kilos de marihuana prensada.

²⁵⁰ Entrevista realizada a Fahd Jamil Georges en radio Amambay el 4 de abril de 2013.

Desde ese momento, Cartes estaría bajo la lupa de los organismos antidrogas, aunque jamás fuera juzgado por este hecho. Además, desde el Banco Amambay, entidad de su propiedad, se perpetuó una operación de lavado de dinero que provenía de negocios ilegales como la venta de narcóticos desde la Triple Frontera a los Estados Unidos y el de tabaco ilícito desde Paraguay a los Estados Unidos. Si en algo se destacaba el nuevo presidente paraguayo era en su habilidad para violar la ley a través de sus negocios.

Como el dios griego Hermes, protector del comercio y los ladrones, Horacio Cartes preparaba su derecha para dar una contraofensiva conservadora en un país que había atisbado un cambio de la mano de Fernando Lugo y que había sido saqueado por Federico Franco. Con la vista clavada en el norte, el camino del ajuste era el sendero a seguir. Un tridente de leyes aguardaba bajo su manga, dispuestas a salir a la calle en los primeros días de su gobierno, capaces de borrar de un plumazo o un balazo a quienes se interpongan. El agronegocio y las finanzas gozaban de óptima salud; la pobreza, el desempleo y el éxodo campesino también.

Alianza Público - Privada

La calles continuaban inundadas, los techos todavía estaban en el piso y la comida no había llegado a los platos de los casi 60.000 inundados paraguayos, cuando el Senado debatía cómodamente en Asunción la Ley de Alianza Público - Privada, más conocida como APP, en octubre de 2013. Ni si quiera habían pasado dos meses de la llegada de Cartes al poder y ya todo el Paraguay podía ser privatizado.

La semana anterior, cinco departamentos habían sido afectados por un fuerte temporal de lluvias y granizo, con vientos de esos que se llevan las cuatro paredes de la casa, los cultivos plantados y la vida de más de uno; pero eso no importaba, ni si quiera la autorización que ya había otorgado la Cámara de Diputados para una ampliación presupuestaria de 20 mil millones de guaraníes, el equivalente a unos 5 millones de dólares, para asistir a las personas afectadas; acá se estaba acordando la entrega de todas las instituciones estatales, toda la infraestructura y servicios públicos a manos privadas.

A los pocos días, el 28 de octubre, Horacio Cartes celebraba por Facebook el quórum obtenido en Diputados: “Quiero felicitar y agradecer a la Cámara de Diputados por la aprobación con amplia mayoría de la Ley de Alianza Público-Privada, después de más de cinco horas de debate”²⁵¹. Exactamente una semana después la ley ya entraba en vigencia bajo el número 5.102, y el Paraguay podía empezar a venderse al mejor postor, ya que como dijo su ministro de Hacienda, Germán Rojas, luego de un encuentro que mantuvo en Nueva York con representantes del grupo de inversión y valores Goldman Sachs: “Hoy en día, Paraguay se está vendiendo solo”²⁵². Los

²⁵¹ Horacio Cartes (Página Oficial), 38 de octubre de 2013.

²⁵² “Cartes vende imagen de Paraguay a grupos financieros en Nueva York”, en ABC Color, 26 de septiembre de 2013.

mercaderes estaban dispuestos a incrementar su presencia en el mercado paraguayo, que le ofrecía condiciones sumamente rentables para sus bolsillos.

La ley se llama "De fomento de las inversiones en infraestructura, a través de la participación público - privada", un elegante eufemismo para nombrar un cuerpo teórico que viola la Constitución Nacional, al dejar todas las decisiones en manos del ejecutivo y borrar del mapa al Congreso y al Poder Judicial: "El Poder Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar, los términos, contenido, condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados"²⁵³, señala en su artículo 52. Así, Horacio Cartes en los tres meses que llevaba como presidente, había centralizado todo el poder en sus manos. El absolutismo reinaba en tierras guaraníes donde las limitaciones institucionales comenzarían a ser nulas. La teoría del italiano Norberto Bobbio sobre el absolutismo donde "el soberano del Estado tiene con respecto a sus súbditos solamente derechos y ningún deber"²⁵⁴, era plenamente aplicable a Horacio Cartes.

"Un pálido ejemplo de la situación que plantea la ley en cuestión es lo que hizo el señor Gramont Berres a fines de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se le ocurrió hacer una planta procesadora de frutas con aval del Estado. Como la planta fue inviable –nunca funcionó– el Estado debe hoy unos 80 millones de dólares, según la justicia suiza, y debido a ello el Paraguay no puede depositar sus reservas en bancos que le paguen algo de interés por las mismas (US\$ 5.000 millones) que, tan solo a un 1 %/año, le daría un lucro de US\$ 50 millones que, así, el Estado pierde cada año debido a, justamente, una participación público-privada realizada por Gramont Berres durante la dictadura de Alfredo Stroessner"²⁵⁵, explicaba el ingeniero y secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu, Ricardo Canese, en una nota que fue censurada por el diario ABC Color, ya que su director, Aldo Zuccolillo, apoya fervientemente la ley de APP.

Desde el oficialismo argumentaban que estas no eran privatizaciones, de hecho el empresario y presidente, Horacio Cartes, al retornar de Nueva York donde asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas para exponer los ejes principales de su gestión de gobierno, declaró: "De ninguna manera (son) privatizaciones o ventas del Estado. Aprovecho para decir que soy enemigo acérrimo de ventas de ningún patrimonio del Estado. Muy por el contrario. Quisiera mostrar que nosotros los paraguayos somos tan capaces como cualquiera que pueda venir a comprar cualquier empresa del Estado"²⁵⁶. Pese a las declaraciones del presidente, la realidad y la nueva ley indicaban algo muy distinto, ya que se habilitaba al Poder Ejecutivo a concesionar unilateralmente bienes, recursos y servicios públicos por plazos de hasta cuarenta años. De hecho, en una reunión con empresarios uruguayos, días antes de que se apruebe la APP, Cartes ofreció a Paraguay diciendo que era como una mujer "fácil"²⁵⁷ y "bonita"²⁵⁸, comentario que encendió la polémica no solo por su tinte machista, sino también porque estaba ofertando el país al mejor postor.

²⁵³ Ley de fomento de las inversiones en infraestructura, a través de la participación público – privada, artículo 52.

²⁵⁴ BOBBIO, Norberto. (1998) "El modelo del iusnaturalismo" En: Sociedad y Estado en la filosofía moderna: el modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano. Fondo de Cultura Económica. México.

²⁵⁵ "Ley de APP, mucho peor que caso Gramont Berres", por Ricardo Canese, 1 de noviembre de 2013.

²⁵⁶ "Cartes dice que es "enemigo acérrimo" de la privatización", en última Hora, 27 de septiembre de 2013.

²⁵⁷ "Paraguay es fácil, es una mujer bonita", dice Cartes", en ABC Color, 26 de octubre de 2013.

²⁵⁸ *Ibidem*.

Esta ley iría en compañía de otra, que reforzaría el modelo de economía neoliberal, porque si de algo sabía Cartes era de cómo surfear los obstáculos que podía presentarle el Congreso para manejar el país con total libertad. Ávido de esto logró, nuevamente, concentrar en su figura la facultad para congelar los gastos públicos, los salarios y disminuir al mínimo el gasto social. El programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional se cumpliría a rajatabla en suelo paraguayo, a partir del 29 de septiembre de 2013, fecha en que fue aprobada la Ley n° 5.098, llamada de Responsabilidad Fiscal. El achicamiento del Estado iría acompañado de un crecimiento desmedido del sector privado, que cuidaba los intereses de los sectores terratenientes a través de la eliminación de la posibilidad de aplicar un impuesto a la importación de granos.

Siguiendo el modelo de tres de los integrantes de la Alianza para el Pacífico: Perú, Chile y Colombia, la receta del Banco Mundial para la privatización de los entes públicos comenzaba a dar resultados en Paraguay. Estados Unidos volvía a tejer una poderosa red sobre el continente Latinoamericano a través de privatizaciones encubiertas. En este camino el poder oligárquico y terrateniente avanzaba a pasos agigantados, pero este tipo de economía no podría imponerse sin un poder represivo que contenga a quienes se manifestaban en su contra. Precavido como pocos, Cartes ya había sancionado una ley capaz de dar respuesta a estas amenazas.

Militarizando el terreno

El atentado invadió las tapas de los diarios. Cartes llevaba poco más de 48 horas al mando cuando la noticia recorrió el Paraguay de punta a punta y se hizo eco en el resto de los países: el Ejército del Pueblo Paraguayo había dado su primer golpe en el nuevo gobierno, atacando en Tacuatí, departamento de San Pedro, a cuatro supuestos guardias del establecimiento ganadero “Lagunita”, propiedad del brasileño Roberto Rezende Barbosa, conocido en su país como el magnate de la caña de azúcar, quien posee 50 mil hectáreas en las tierras guaraníes y por esos días planeaba una millonaria inversión en el Paraguay .

Fue así que Horacio Cartes impuso la modificación a la ley de Seguridad Interna. Hasta entonces, la Constitución permitía que determinadas zonas sean declaradas de excepción donde podían funcionar las Fuerzas Armadas, pero siempre con previo paso por el Congreso para obtener su aprobación. A partir de ahora, el presidente tendría la potestad de determinar zonas de militarización. No es casual que San Pedro, Concepción y Amambay hayan sido los primeros distritos intervenidos, donde abundan las riquezas naturales y las residencias campesinas al modelo extractivista sojero.

“Cartes tiene veintidós matones en su plantilla, varios son policías en servicio activo pero que no tienen comisaría. Uno de ellos, su jefe de seguridad así entrecomillas, es Arístides Cabral, que es un policía retirado, fue acusado de secuestro y tortura de Robin Martí en el 2003, y se retiró y le agarró Cartes. Uno de los matones que tiene Cartes es César Cabral, hijo de Arístides Cabral, que es policía en servicio

activo. No tiene comisaría. Y tiene varios más (...)”²⁵⁹, afirma el líder campesino José Rodríguez sobre cómo se ha incrementado el patrón represivo durante el gobierno de Horacio Cartes.

Esta aprobación, de la modificación a la Ley n° 1.137 de Defensa y Seguridad Interna para el uso de las FFAA en conflictos internos, ha permitido que con la excusa del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) se justifique la matanza de los líderes campesinos y el avance voraz de los empresarios sojeros brasileros y paraguayos, quienes ilegalmente se adueñan de tierras estatales. Además, Cartes reafirmaba su apoyo al gobierno de Washington, aplicando algo similar al Acta Patriótica estadounidense, implementada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con la que se puede detener e interrogar, sin los resguardos jurídicos necesarios.

Desde entonces, las represiones en la era Cartes son frecuentes. La primera ocurrió a tan solo casi dos meses de asumir su mandato en Laterza Cué, distrito de Mariscal López, Caaguazú, donde varias familias exigían la devolución de sus tierras, que desde hacía más de 40 años estaban ilegalmente en posesión de la transnacional estadounidense Bioenergy. Las topadoras, los gases lacrimógenos y las balas de goma no tardaron en llegar por parte de los 200 policías que se presentaron en el lugar, sin orden judicial, mientras los campesinos se refugiaban en el Centro Comunitario. El litigio terminó con más de 100 familias desalojadas, la escuela de la comunidad destruida en presencia de los niños que allí concurrían, cinco campesinos heridos y seis mujeres detenidas, que intentaban sacar fotos de la represión.

La penetración estadounidense en territorio guaraní y la complicidad del presidente paraguayo con el Pentágono lograron que en febrero de este año, en el departamento de San Pedro se instale una base militar llamada “Centro de Operaciones de Emergencias (COE)” del Comando Sur, que abarca los departamentos norteños de Concepción, Amambay y Canindeyú, la supuesta región donde el gobierno de Horacio Cartes libra batalla contra el Ejército del Pueblo Paraguayo. Esta base militar es totalmente estratégica para el gobierno de EE.UU., ya que por la ubicación geográfica del Paraguay, desde allí puede monitorear el espacio aéreo del territorio, frenar las zonas más conflictivas y organizadas que se oponen a los agronegocios y tener acceso a los recursos naturales, principalmente a los hídricos. Desde el corazón de Sudamérica, el norte vigila los procesos de integración latinoamericana en el mismo sitio donde se impulsara el proceso de coordinación de las últimas dictaduras. En su cosmovisión de costo-beneficio, Horacio Cartes rinde pleitesía con su nueva empresa: Paraguay S.A.

²⁵⁹ Entrevista a José Rodríguez.